



**LA CONGESTIÓN JUDICIAL COMO UNA DE LAS
PRINCIPALES CAUSAS PARA QUE LOS CIUDADANOS DECIDAN TOMAR LA
JUSTICIA POR MANO PROPIA.**

LAURA KATHERINE GUEVARA AGUDELO (041131559)

**MONOGRAFÍA DE GRADO PARA OPTAR POR EL
TÍTULO DE ABOGADA**

ASESOR DE MONOGRAFÍA:

DRA. CLAUDIA PATRICIA ORDUZ BARRETO

UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO - JURÍDICAS

BOGOTÁ D.C.

2017

DEDICATORIA

A mis padres, Rodrigo Guevara Cardona y Nelly Agudelo Quintero.

A mi Hermano Alexander Guevara Agudelo.

Y especialmente dedico éste trabajo de grado a la memoria de Edelmira Cardona y de Briggite Ritacuba. El tiempo fue acortado para ellas, pero desde la lejanía agradezco a Dios el gran privilegio de haberlas hecho parte de mi familia.

AGRADECIMIENTOS:

A Dios, porque ha sido el promotor de cada uno de mis sueños, porque me ha fortalecido en los momentos de dificultad y porque si he llegado hasta aquí ha sido solo por su gracia e infinita misericordia. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él.

A mi Familia, por su apoyo incondicional, por su ejemplo intachable, por su incansable esfuerzo y por su plena confianza en mí.

A Natalia Garzón Higinio, por ser una amiga incondicional y por hacer parte no solo de mis triunfos, sino también de mis fracasos.

A la Universidad Libre, por haberme concedido el grato honor de ser unilibrista, por todo el apoyo que me ha brindado para alcanzar mis objetivos académicos y por fundar en mí un pensamiento crítico, recreador de conocimientos científicos y promotor de una sociedad mucho más democrática, pluralista y tolerante.

A la Dra. Claudia Patricia Orduz Barreto, directora de mi trabajo de grado, por su apoyo, motivación e instrucción incondicional.

A todas y cada una de las personas, que de una o de otra forma fueron partícipes de este bello proceso.

Mil Gracias.

ACEPTACIÓN

Valoración:

Calificación (A o I): _____

Dra. Claudia Patricia Orduz Barreto

Asesora

Dr.(a)

Jurado

Dr. (a)

Jurado



AUTORIDADES ACADÉMICAS

FUNDADOR: General Benjamín Herrera.

PRESIDENTE NACIONAL: Jorge Alarcón Niño.

RECTOR NACIONAL: Fernando Dejanón Rodríguez.

SECRETARIO GENERAL: Floro Hermes Gómez Pineda.

PRESIDENTE SECCIONAL: Julio Roberto Galindo Hoyos.

RECTOR SECCIONAL: Jesús Hernando Álvarez Mora.

DECANO FACULTAD DE DERECHO: Carlos Arturo Hernández Díaz.

SECRETARIO ACADÉMICO: Nelo Armando Cañón Suárez.

DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES: John Fitzgerald Martínez Vargas.

COORDINADOR ÁREA DE INVESTIGACIÓN: Belisario Daza González.

JEFE DE ÁREA DERECHO PENAL: Harold Sotelo León.

ASESORA DE MONOGRAFÍA: Claudia Patricia Orduz Barreto.

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTOS:	III
ACEPTACIÓN	IV
AUTORIDADES ACADÉMICAS	V
TABLA DE CONTENIDO	VI
TABLA DE GRÁFICAS:.....	VIII
TABLA DE CUADROS.	IX
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: LA CONGESTIÓN JUDICIAL EN UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO – CASO COLOMBIANO.	7
Definición del fenómeno: Congestión Judicial.....	11
Origen de la Congestión Judicial en Colombia y su avance histórico.....	12
Marco Jurídico.....	17
Causas de la Congestión Judicial en Colombia.	22
Carencia de funcionarios judiciales.....	22
Excesiva Carga Laboral.	27
Implementación de la Acción de Tutela y/o Habeas Corpus.	31
Actos dilatorios por parte de los apoderados judiciales.	36
Excesiva ritualidad, culto a las formas y populismo punitivo.....	40
Consecuencias de la Congestión Judicial en Colombia.....	46
Pérdida progresiva de la calidad en los fallos judiciales.	47
Desconfianza ciudadana e Inseguridad jurídica.	50
Incremento desmesurado del fenómeno de justicia por mano propia.	51
CAPÍTULO II: LA JUSTICIA POR MANO PROPIA COMO REACCIÓN SOCIAL A LA CONGESTIÓN Y COMO DESCONFIANZA CIUDADANA EN EL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO.	54
Definición del fenómeno de justicia por mano propia.....	55
Origen y desarrollo del fenómeno de justicia por mano propia.....	57
Panorama Internacional:.....	57
Panorama Nacional:	67

Desconfianza ciudadana en el Sistema Judicial Colombiano.	72
Percepción ciudadana sobre inseguridad en el País.	80
CAPÍTULO III: COLOMBIA UN PAÍS ALTAMENTE CONFLICTIVO, DEBE ERRADICAR EL PROBLEMA DE RAÍZ.	86
Índices de violencia en Colombia.	89
Estadísticas internacionales sobre violencia.	98
Derecho Comparado:	101
Islandia:	102
Dinamarca:	105
Suiza:	106
Japón:	107
Holanda:	111
Estudio de casos e influencia de los medios de comunicación.	114
Registros periodísticos años 2015, 2016 y 2017.	115
Influencia de los Medios de Comunicación.	127
PROPUESTAS DE CAMBIO Y CONCLUSIONES.	135
Referencias	146

TABLA DE GRÁFICAS:

Ilustración 1 Inventario activo, ingreso y egreso de procesos en Colombia.	24
Ilustración 2 Cobertura de la Rama Judicial.....	25
Ilustración 3 Porcentaje de tutelas frente al total de procesos ingresados.....	34
Ilustración 4 Participación de la tutela en los ingresos y egresos de procesos efectivos por especialidad.	35
Ilustración 5 Percepción ciudadana sobre las causas que dificultan el acceso a la justicia..	79
Ilustración 6 Porcentaje de Hogares que han sido víctimas de un delito.	81
Ilustración 7 Reacción ciudadana ante un hurto.	82
Ilustración 8 Tasa de percepción de inseguridad según el sexo.	83
Ilustración 9 Justificación de uso de la violencia	84
Ilustración 10 Los países con mayor aprobación a la justicia por mano propia.	100
Ilustración 11 Países con menor aprobación a la justicia por mano propia.....	101

TABLA DE CUADROS.

Tabla 1 Cantidad de Procesos que Ingresaron a la Justicia Penal. Años 2007 - 2013.	14
Tabla 2 Indicadores anuales de la gestión judicial.	15
Tabla 3 Evolución tutelas falladas. 1992-2004.	33
Tabla 4 Violencia interpersonal, tasas por cada 100.000 habitantes. Colombia 2012-2011.	91
Tabla 5 Violencia interpersonal, orden según frecuencia de distribución geográfica por municipio, Colombia 2011.	91
Tabla 6 Violencia Interpersonal según el día del hecho y sexo de la víctima, Colombia 2011.	92
Tabla 7 Promedio jóvenes entre 15 y 24 años víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes.	98

INTRODUCCIÓN

“Las leyes llegan para controlar a los hombres que en vez de abrazarse como hermanos, se despedazan como lobos” (Carnelutti, 1989)

En la actualidad, el sistema judicial colombiano afronta uno de los problemas de congestión más preocupantes a lo largo de la historia, pues se ha llegado a un nivel tan alto de mora judicial, que gracias a ella la rama ha colapsado, debilitándose a tal punto que ni siquiera la infraestructura de los despachos es suficiente para depositar la cantidad exorbitante de procesos que llegan a diario por reparto; los funcionarios judiciales no soportan la interminable y exhaustiva revisión de expedientes y es tanta la carga laboral, que los jueces de la República pueden argumentar como justificación a la demora en el trámite procesal la innumerable cantidad de trabajo que deben sobrellevar. No obstante, aun con el excesivo hacinamiento de procesos judiciales, los ciudadanos minuto a minuto acuden a la jurisdicción para que ella sea quien resuelva sus controversias a través de un tercero natural e imparcial, llamado juez, pues, viviendo en medio de una cultura innatamente salvaje e intolerante, se hace imposible resolver los problemas a través de la simple conciliación y el único mecanismo civilizado (previo al salvajismo) que quedaría es en efecto, acudir a la Jurisdicción.

Partiendo de lo dicho con anterioridad, la situación planteada supone una respuesta Estatal oportuna (que implica prontitud) y efectiva (que implica una decisión justa), en donde en el mejor de los casos el día en el que se presente la controversia, ese mismo día sea atendida y solucionada; pero sí no son días, que quizás sean en pocas semanas y en el peor de los casos y sólo cuando el litigio presentado a la administración sea sumamente complejo, que sean pocos meses los que se deba esperar para recibir una respuesta ajustada a derecho

de la administración. No obstante, en Colombia la realidad es otra, porque no son días, ni semanas, ni mucho menos meses que los ciudadanos deben esperar para la solución de una controversia, sino que son años enteros esperando el pronunciamiento del “tercero imparcial” llamado juez. Y es entonces la oportunidad para preguntar ¿realmente el aparato judicial tiene actualmente alguna credibilidad en los colombianos? o por el contrario, el reflejo de justicia ha mostrado un proceso judicial mucho más tedioso y complicado que incluso la misma controversia presentada.

Lamentablemente, al parecer, la desconfianza en una rama judicial ineficiente y congestionada cada día es mayor, pues *“la duración y rutinización de los procesos judiciales disuade a los individuos de utilizar la justicia y, en términos generales, produce una exclusión de la oferta y en consecuencia de la demanda en aquellos casos más urgentes e importantes. En estas condiciones, desde luego, existe una tendencia a favorecer las soluciones privadas y con frecuencia violentas, en las cuales, a veces se presenta un fenómeno inverso de exceso de rapidez en la solución que, a su vez, incrementa la conflictividad”* (Boaventura & García Villegas, 2001., pág. 43), ya que en definitiva no es rentable perder cinco (5) o diez (10) años en un proceso judicial cuando perfectamente por medios propios se podría llegar a la solución de la controversia en contadas horas, días o semanas; y parece ser que, en definitiva es preferible “linchar” al violador que entregarlo a las autoridades, o asesinar a quien debe una suma de dinero previo a presentar el proceso ejecutivo, e incluso está más que demostrado que los ciudadanos prefieren encargarse personalmente del problema usando o no la violencia antes que acudir a una rama judicial que tiene todo menos justicia para brindarle al pueblo.

Pues bien, es precisamente en lo dicho con anterioridad, donde radica el desarrollo de la presente monografía, toda vez que con el presente documento se pretende determinar si en un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo es el colombiano, ¿A mayor congestión judicial corresponde mayor decisión ciudadana de tomar la justicia por mano propia? Dicha pregunta problema y desde luego, objetivo general de la investigación, desencadena en una serie de objetivos específicos que serán desarrollados en el presente trabajo, mediante los capítulos que a continuación se mencionarán: El primero de ellos, analizará la problemática de la congestión judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho, para el caso colombiano. Ello implica un estudio acerca de dicho fenómeno en Colombia, teniendo en cuenta el origen, el avance histórico, las causas por las que hoy por hoy es una problemática, al parecer incontrolable; y por supuesto las consecuencias que ha traído dicho fenómeno judicial y socialmente. El segundo, analizará el fenómeno de justicia por mano propia como reacción social a la congestión y como desconfianza ciudadana en el sistema judicial; de esta forma, también se definirá dicho concepto, se mostrará el origen y el desarrollo del mismo y algunas causas que aumentan los índices del fenómeno a investigar. En el tercer título, se estudiarán los índices de violencia en Colombia que implica un estudio de casos de los registros periodísticos sobre ajustamiento social de los últimos tres (3) años, con los cuales se pretende demostrar el aumento desmesurado de la congestión judicial y por ende de los casos de justicia por mano propia. En el mismo acápite, se hará un análisis sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en la percepción que la ciudadanía tiene sobre el sistema judicial; para culminar con algunas propuestas de cambio y conclusiones que harán énfasis no en la problemática presentada, sino en las fórmulas de solución que buscan aportar un poco a la verdadera transformación y al mejoramiento del País, con el fin de dilucidar la problemática a efectos de controlar el objeto de estudio.

La orientación de la investigación, será de tipo ius filosófico, toda vez que se tiene como objeto de estudio la *“valoración de las normas jurídicas (justas o injustas), al igual que la correspondencia o discrepancia de las normas jurídicas con el conjunto de valores de la sociedad respectiva”* (Vanegas Torres, y otros, 2011). Ello, teniendo en cuenta que dentro de la pregunta problema se desencadena una relación entre el Derecho y la Justicia, inmerso en un escenario social que posee unas relaciones interpersonales conflictivas e intolerantes. De igual modo, la razón de ser del presente documento, es mostrar al lector una perspectiva distinta respecto a la congestión judicial, no como problemática individual sino como la causa fundamental y por qué no la secuela radical de la decisión ciudadana de tomar la justicia por mano propia, razón por la cual, el tipo de investigación utilizado será una investigación correlacional, toda vez que se tendrá como objetivo determinar el grado de relación existente entre la congestión judicial y la decisión de los ciudadanos de tomar la justicia por mano propia, en el caso colombiano. Lo anterior, desde luego requerirá de un método de investigación en principio de tipo histórico para más adelante convertirse en uno lógico y tal como se verá en los últimos capítulos, se hará uso del método práctico, toda vez que a través de la observación, en el estudio de casos concretos se tendrá un conocimiento directo del objeto y del problema de investigación. Es menester mencionar, que se hará uso de fuentes principalmente y en su mayoría bibliográficas.

Como se verá en párrafos posteriores, la congestión judicial como género, será la causa esencial para que los ciudadanos se vean obligados a acudir a otros mecanismos para solucionar sus controversias, puesto que la desconfianza y la inseguridad que existe en la presentación de un proceso judicial, que envuelve pensamientos prevenidos tales como *“no pasará nada”* o *“tardará muchos años”*, crea una impotencia de justicia y por ende una

desesperación por conseguirla por cualquier medio, que ocasiona la aparición de la especie: la justicia por mano propia, como la reacción ciudadana ante la incapacidad e insuficiencia de la rama judicial y ante la respuesta tardía de un Estado creador del sistema contencioso, pero al cual su creación se le salió de las manos.

La conveniencia e importancia del desarrollo de la presente monografía, radica en los pocos (por no decir nulos) estudios que existen en Colombia, relacionados con el fenómeno de justicia por mano propia, puesto que a pesar de sus altos índices de ocurrencia, los cuales son registrados a diario a través de diversos medios de comunicación, no existe ninguna investigación hasta el momento que ponga de presente dicha problemática en Colombia o que por lo menos la estudie a profundidad con fines de prevención. De manera que, resulta más que pertinente su estudio justo en éste momento por el que está atravesando Colombia, puesto que aun cuando se logró firmar un acuerdo de paz con las FARC, no se puede desconocer que Colombia es un país altamente conflictivo, en donde los índices de criminalidad son supremamente altos; pues de acuerdo a cifras arrojadas por la Fiscalía General de la Nación, tal solo en el año 2016 *“en promedio cada 60 minutos hurtaron 5 vehículos, 6 celulares, 3 casas, 2 locales comerciales y como si fuera poco extorsionaron a 14 compatriotas”*.

Interesa al mundo jurídico no sólo analizar el fenómeno de justicia por mano propia, sino identificar su correlación, (directamente proporcional) con la problemática de la congestión judicial, respecto de la cual sí abundan innumerables escritos e investigaciones, puesto que la misma además de ser inocultable, resulta siendo bastante atractiva para los críticos y doctrinantes del derecho. Lo anterior, porque el presente documento consolida una serie de información y refleja la gravedad que comporta dichos fenómenos, toda vez que da

voces de alerta acerca de un Estado completamente deslegitimado y una comunidad intrínsecamente desconfiada e insegura que desconoce por completo el poder de coerción estatal y denota a todas luces la ausencia de justicia.

Más allá de ser éste un requisito de grado, es una investigación que desde sus inicios pretendió no sólo reflejar una verdadera crisis social, sino demostrar que Colombia no puede seguir así, proclamando un proceso de paz inexistente al interior de los hogares. Ya se tiene el problema (congestión judicial - justicia por propia mano – hacinamiento carcelario – inseguridad – impunidad – corrupción - desconfianza ciudadana en el sistema jurisdiccional (...)), ahora se anhela que a partir de ello la solución sea encontrada y por lo tanto los cambios (sociales, políticos, administrativos, legales (...)) empiecen a ser reales y verdaderamente palpantes. Se espera con ansias que a partir de lo que más adelante se propondrá en el presente documento, llegue el día en el que el mundo y en concreto éste país: Colombia, pueda ver un sistema judicial mucho más ordenado, donde pocos sean los casos tardíos e impunes y en el cual los ciudadanos vuelvan a confiar en el proceso judicial, porque para entonces, éste dejará sus formalidades y procurará velar por la celeridad y la justicia, e impulsará la solución pacífica de los conflictos antes que acudir a la violencia tomando la justicia por mano propia.

CAPÍTULO I: LA CONGESTIÓN JUDICIAL EN UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO – CASO COLOMBIANO.

Antes de iniciar, es menester partir de la premisa según la cual la congestión judicial no es un problema que hasta hace poco haya surgido, por el contrario, es un fenómeno que viene desarrollándose desde hace algunos años atrás y que se ha tratado de solucionar formalmente con la creación de leyes que titulan “descongestión judicial” pero que materialmente funcionan para todo, menos para la descongestión. Al respecto, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), citado por (Boaventura & García Villegas, 2001.):

“En el año 1956, se observa un aumento sostenido de los procesos pendientes hasta el inicio de la década de los noventa. En efecto, entre 1956 y 1990 se acumularon entre 200 y 300 procesos anuales por cada 100 mil habitantes. En términos absolutos, estas cifras significan un crecimiento de los inventarios de un promedio cercano a 30.000 procesos anuales en la década de los sesenta, de cerca de 50.000 por año en los setenta y de alrededor de 80.000 en la década de los ochenta. De ésta forma, el número de procesos pendientes, que era de 329.412 en 1956, aumentó a 402.331 en 1960, a 663.338 en 1970, a 1.175.536 en 1980 y a 1.885.361 en 1989”. (Boaventura & García Villegas, 2001., pág. 559)

Así pues, atendiendo a la problemática mencionada y reiterando que es una dificultad que ha afectado al sistema durante muchos años, en el presente capítulo se hará un recorrido histórico y legal sobre el fenómeno de la congestión judicial, examinando su origen, avance, las causas y las graves consecuencias que ha traído para nuestro país el incremento de la misma, pues no sólo ha desbordado los límites de planeación del sistema judicial, en lo que

concierno a infraestructura y capacidad del personal empleado, sino que las controversias sociales han superado la expectativa judicial, en cuanto a procesos se refiere.

El derecho que tiene toda persona de acudir a la jurisdicción, se encuentra consagrado como fundamental en la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 229 y se denomina acceso a la administración de justicia. Así, éste es definido como: *“el derecho de toda persona o grupo de personas, sin discriminación alguna, a que existan mecanismos adecuados y sencillos del sistema de justicia para la resolución de necesidades jurídicas, y sobre las cuales se adopte una decisión mínimamente satisfactoria, oportuna y a la que se le dé cumplimiento”* (La Rota, Lalinde Ordoñez, Santa Mora, & Uprimny Yepes, 2013.).

Por otra parte, el deber estatal de atender a cada petición presentada ante la jurisdicción, está desarrollado en la Ley 270 de 1996, la cual ha considerado en su artículo primero (1) que la administración de justicia ha sido encargada por la Constitución y la ley al Estado, como función pública, para que éste haga efectivos *“los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”*. Y en su artículo segundo (2), determina que: *“El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público”* (Ley 270 , 1996). De esta forma, es claro que la facultad de administrar justicia, compete única y exclusivamente al Estado, quien tiene el monopolio judicial, situación que le impone una obligación evidente y es prestar un servicio efectivo y oportuno, que garantice a los asociados derechos fundamentales y les otorgue garantías de confianza en el sistema. *“El acceso a la justicia es un derecho del orden constitucional garantizado por el Estado a través de las entidades que conforman el sector justicia en*

especial por la Rama Judicial del Poder Público” (Consejo Superior de la Judicatura; Departamento Administrativo Nacional de Estadística., 2009, pág. 40).

Dicho derecho fundamental, cuenta con una serie de herramientas propias de su naturaleza, que en el deber ser de las cosas tendrían que funcionar perfectamente, pero que en el plano real no sucede así, puesto que sí bien el sistema judicial de manera objetiva, busca dirimir los conflictos sociales con el fin de conservar el ordenamiento jurídico y desde la perspectiva subjetiva, lo que busca es la protección de los derechos individuales, las controversias son tan abundantes que se hacen incontrolables; o los procedimientos son excesivamente formales que generan una obstrucción al acceso al sistema judicial; o las dilaciones procesales abundan en tal proporción que hacen que el principio de celeridad sea dejado en el olvido; o incluso, la carga laboral de los operadores judiciales al ser exagerada genera que el estudio de un proceso termine convirtiéndose en un gran “karma” que trae como solución la mora judicial.

Quien acude a la jurisdicción, busca la declaración, la condena o la constitución de un derecho, busca que un tercero haga lo que él no pudo hacer. En ese sentido, el proceso judicial sería *“el medio para realizar la protección del derecho y para que pueda efectivizarse la ley. Es la forma de realizar la función jurisdiccional”* (Moreno Moreno & Malagón Martínez, 2008., pág. 41) o acudiendo a otra definición, *“El proceso judicial es el método coercitivo diseñado por el ordenamiento para encontrar, proveer y aplicar soluciones apropiadas a cuestiones problemáticas concretadas de contenido jurídico, tras una secuencia de actos relacionados entre sí, ordenados con criterio lógico e inequívocamente dirigidos a ese propósito, garantizando siempre el ejercicio de la defensa*

adecuada de los intereses en discusión” (Rojas Gómez, Lecciones de derecho procesal. Teoría del proceso., 2013, pág. 117).

Carnelutti, determina que la Litis es un desacuerdo, es decir un conflicto de intereses y que *“el proceso civil, opera para combatir la Litis y el proceso penal opera para combatir el delito”* (Carnelutti, 1989, pág. 25); de esta forma, el conflicto representa la discordia de los hombres que se materializa en la acción y como reacción llega el proceso judicial, que apacigua las cosas y ayuda a resolver los mismos de forma pacífica y civilizada.

Dicho lo precedente, es claro que doctrinariamente la definición de proceso judicial no sólo inspira celeridad, sino también confianza para quienes acuden desesperados a la jurisdicción para que sea ésta quien resuelva sus conflictos. Sin embargo, en Colombia, actualmente el Estado sufre una de sus más grandes crisis en cuanto a justicia se refiere, es evidente que ni siquiera los funcionarios están convencidos de que su labor es un símbolo de la misma, pues la demanda procesal aumenta minuto a minuto y la oferta de funcionarios judiciales es insignificante y por demás incapaz para responder a los conflictos sociales.

“En efecto, el conflicto que vive el país genera una demanda excesiva que copa la capacidad laboral de los operadores judiciales. Mientras subsista con los niveles actuales, seguirá siendo el motivo original de la congestión. Este es elemento que trasciende a la administración de justicia, para comprometer al Estado en su integridad y a su componente social, porque la crisis de la justicia al fin y al cabo es un reflejo de la crisis general que padece el Estado y la sociedad entera” (Consejo Superior de la Judicatura., 2005.).

El fracaso de la justicia, es el fracaso del Estado y por ende de la sociedad. No es posible que el hombre se vea obligado a acudir a la violencia por la ineficacia de las leyes

estatales o incluso, que por intentar ser civilizado, sea castigado con la demora de un trámite procesal que puede durar sarcásticamente mucho más que adquirir la pensión de vejez. Es increíble que un proceso ordinario dure más de diez (10) años y que en su lugar, sea preferible volver a aquellos métodos salvajes, en donde lo importante no eran las leyes sino la justicia material.

Definición del fenómeno: Congestión Judicial.

Siendo el centro de la investigación la justicia por mano propia como el resultado de la congestión judicial, dicho concepto resulta siendo indispensable para el presente documento, razón por la cual es menester definir el mismo como *“la acumulación real de procesos en un despacho judicial, en forma progresiva hasta llegar a un grado que desborda la posibilidad normal de su atención”* (Consejo Superior de la Judicatura., 2005., pág. 55). Así pues, el gran número de demanda de procesos que encuentra una oferta mínima en cuanto a despachos judiciales se refiere, ya implica una congestión en la justicia; o quizás los interminables términos procesales, los altos índices de conflictividad y violencia en el país y la mora en el trámite, también hacen parte de lo que se consideraría como congestión. Pues bien, dicho concepto aparecerá cuando: *“el aparato judicial establecido por la Constitución y la ley, no es capaz de responder oportunamente a las necesidades de las personas”* (Torres Calderón, pág. 4).

En efecto, la incapacidad estatal de atender oportunamente a las necesidades de las personas, no solo genera congestión judicial, sino también desconfianza ciudadana en el aparato jurisdiccional que afecta la legitimidad estatal y la coercitividad que por sí sola tiene la ley. De igual modo, el incremento desmesurado de los casos de justicia por mano propia, será otro síntoma que evidencia la existencia de la enfermedad denominada congestión

judicial, pues es allí donde la sociedad decide hurtar la facultad estatal del ius puniendi y conseguir justicia por sus propios medios. Porque valga la pena mencionar que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 116, señala expresamente quiénes están facultados para administrar justicia, y señala que son: *“La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los jueces, la justicia penal militar, el congreso en casos concretos y los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”* (Asamblea Nacional Constituyente., 1991., pág. art. 116). Texto que demuestra que, los particulares per se NO administran justicia legítimamente, sino sólo cuando son investidos de tal facultad.

Origen de la Congestión Judicial en Colombia y su avance histórico.

“(...) En un estudio realizado en 1980 por el Instituto de Ciencia Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia sobre el tiempo que demoraba el trámite de los distintos procesos penales con relación a los términos establecidos por la ley, se encontró que aquél era siempre superior a estos. En algunos casos la diferencia entre la duración real del proceso penal y la duración legal máxima alcanzaba el 203% (...) Estas demoras niegan el precepto constitucional de una pronta y cumplida justicia y generan en el ciudadano común una sensación de impotencia y frustración al tener que verse sometido al lento y desgastador mecanismo judicial para tener que resolver sus conflictos (...)” (Cámara de comercio de Bogotá., 1990., pág. 5)

No sería justo atribuir culpas desde ya, respecto a la congestión judicial, toda vez que, aun cuando es claro que existió una falla desde el principio en el sistema judicial al no prever la gran demanda que se tendría a futuro en procesos judiciales, no es menos cierto que la ciudadanía incapaz de resolver sus conflictos a través de otros medios alternos de solución, se ha dedicado a interponer demandas, tutelas, Habeas Corpus, derechos de petición, querellas, denuncias, entre otros, ocasionando un evidente colapso en la administración de justicia. Así pues, ya *“(...) desde el año 1995, la demanda de justicia había aumentado en un 98.2%: de 898.162 procesos que entraron en aquella época, en el 2008 la cifra fue de 1.783.670 casos. Sin embargo, la demanda ha crecido a un ritmo más acelerado que el de la oferta de justicia ya que de 4.012 jueces y magistrados que había en el 95, se pasó a 4.237 funcionarios, esto quiere decir que la oferta sólo creció un 5.6% (...)”* (Coronado Britto & Valencia Nieto, 2009., pág. 27), y no siendo suficiente con ello, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reveló que para el primer semestre del año 2008, *“(...) la administración de justicia cuenta con un inventario de 2.977.941 procesos, de los cuales el 52% (1.548.418) está sin trámite, es decir, que no ha registrado actuaciones ni manifestaciones en los últimos seis meses. Aun así, la jurisdicción emite 4.476 decisiones por día, de las cuales 1.371 son acciones de tutela (...)”* (Ibíd., pág. 27).

Lo anterior, además de ser alarmante, resulta siendo decepcionante, y desde luego da un panorama que a primera vista es devastador, pues en el año 2005, respecto a la jurisdicción civil, se reveló que para dar solución a un proceso civil ejecutivo, de acuerdo al código, el juez contaba con 298 días para hacerlo, esto es 9.9 meses, pero en promedio real, el sentenciador demoraba 1.301 días –que aproximadamente correspondía a 3.6 años–, situación que generaba un porcentaje de mora procesal del 336%. A su vez, un proceso civil “normal”,

tendría que solucionarse en 469 días – Es decir, en 1.3 años - , pero el juez en realidad demoraba 2.048 días para hacerlo, - esto correspondía a 5.6 años - razón por la cual se tiene un porcentaje de mora procesal de 432%. (Consejo Superior de la Judicatura., 2005., pág. 55).

En lo que respecta a la justicia penal las cifras no son menos alarmantes, pues tal como se revelará a continuación, para el periodo 2007 a 2013, las demandas aumentan de 619.757 en el año 2007 a 867.481 en el año 2013, situación que refleja un incremento del 40% en el conflicto penal tratado por los despachos judiciales en etapa de juzgamiento.

Tabla 1
Cantidad de Procesos que Ingresaron a la Justicia Penal. Años 2007 - 2013.

Año	Índice de Demanda Penal
2.007	619.757
2.008	649.795
2.009	697.760
2.010	768.228
2.011	789.696
2.012	784.573
2.013	867.481

Nota: Tomado y adaptado (Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales -SINEJ-., 2014.)

Ahora bien, con seguridad el lector imagina que desde el año 2013 hasta el año 2017, la situación podría ser distinta, sin embargo, en suma, el estado actual de las cosas, se traduce en lo siguiente, de acuerdo a los indicadores de gestión de la Rama Judicial, publicados por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.

Tabla 2
Indicadores anuales de la gestión judicial.

INDICADORES ANUALES DE LA GESTIÓN JUDICIAL						
INDICADOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Congestión.	46%	47%	48%	45%	37%	45%
Retraso – egreso de procesos rezagados.	11%	5%	6%	3%	0,4%	0,3%
Retraso – índice de Evacuación Total – IET.	44%	53%	55%	54%	49%	34%
Productividad (egreso efectivo promedio mensual por despacho)	37	43	39	39	34	33
Eficacia.	26%	28%	26%	20%	19%	18%
Eficacia – índice de Evacuación Parcial.	84.1%	99.6%	92.6%	82.6%	76.9%	77.5%

Nota: *Las cifras corresponden al primer semestre del año 2017. Tomado del Sistema de información Estadístico de la Rama Judicial SIERJU

Tal como se puede evidenciar en la tabla anterior, la acumulación de procesos generada por la no atención oportuna de los mismos en los términos procesales correspondientes, teniendo en cuenta el nivel de egresos efectivo y el inventario de asuntos a cargo de cada despacho judicial, para el primer semestre del año 2017 fue del 45%.

Ahora bien, con el propósito de identificar procesos que se han atendido de manera tardía y el impacto que esto genera en el inventario, el nivel de retraso se cuantifica a partir de la medición de procesos rezagados, esto es, salidas de procesos por pérdida de competencia – por ser esta una herramienta indicativa de que un proceso ha superado el término previsto en la legislación, sin tener la respectiva sentencia o decisión que ponga fin

al asunto- o porque son remitidos a otros despachos judiciales como medidas de descongestión, y la acumulación o desacumulación de procesos que se genera contando con el volumen de ingresos en el respectivo periodo. Por lo anterior, tal como se demuestra, el retraso – egreso de procesos rezagados, *“cuantifica el porcentaje de procesos que se identifica están saliendo con rezago del despacho en relación con el total de egresos registrados por parte de los despacho judiciales”*. Tal como se demuestra, dicho porcentaje es descendiente al pasar de los años, pues en el año 2012 la cifra es del 11% y para el año 2017, dicho porcentaje decrece al 0,3%. Se considera que ello se debe probablemente a la terminación de los despachos de descongestión y a que no todas las especialidades aplican la pérdida de competencia. Como complemento de lo dicho, el índice de evacuación total, que mide el retraso en consideración al nivel de evacuación con relación a la carga laboral, indicó que en el año 2012, el esfuerzo de los servidores por desacumular procesos de la carga laboral total fue del 44%, mientras que en el primer semestre del año 2017, fue del 34%, alcanzando los máximos valores en los años 2013, 2014 y 2015.

Por su parte, el índice de productividad, contabiliza la cantidad de procesos evacuados con sentencia, mensualmente en promedio por cada despacho judicial y las cifras desde luego son bajas, toda vez que se debe tener en cuenta que hasta el año 2015 se contó con el apoyo de medidas de descongestión que contribuyeron a la evacuación de procesos judiciales.

Por último, el análisis en cuanto a la eficacia, hace referencia a que se cumpla con lo esperado. De esta forma, éste indicador permite visualizar los despachos que mantienen evacuación por encima de lo que ingresa, es decir, aquellos que ayudan a descongestionar el inventario inicial. A partir de lo anterior, se obtuvo que en el año 2012, este indicador estaba sobre el 26% y al primer semestre del año 2017 se ubicó en el 18%.

Marco Jurídico.

Las estadísticas presentadas previamente, han hecho que desde luego surja una gran preocupación por disminuir la congestión judicial y ha sido a través de leyes como se ha combatido dicha problemática, por lo menos formalmente. La estructura judicial desde sus inicios, empezó con el pie izquierdo, pues con la Ley 103 de 1923, por la cual se expidió un estatuto de procedimiento civil, denominado Código Arbeláez, (el cual no entró a regir debido a que su vigencia fue suspendida el año siguiente por la Ley 26 de 1924), se puede notar la inclinación palpable de los redactores por mantener la tradición de los procesos escritos, que en todo sentido han resultado ser mucho más demorados, tediosos y poco prácticos, pues la escrituralidad, no sólo ha dejado rezagos de lentitud, sino que nos ha mostrado el desastre de la justicia con la acumulación de un sin número de escritos que debido a la gran carga laboral, no son analizados a profundidad, sino que resultan haciendo simple estorbo en los despachos judiciales.

Más adelante, específicamente en el año de 1931, surge la Ley 105 que disciplinó el denominado código judicial, incorporando lo pertinente a la administración judicial con normas tanto del Código de Procedimiento Civil como de Procedimiento Penal. Hasta ese momento, se podría decir que la justicia no había llegado a su máximo esplendor, razón por la cual los procesos no eran tantos y aun había un Estado que sobrellevaba los conflictos de su sociedad.

En 1964, se trató de impulsar un gran cambio en la estructura judicial con el fin de hacer que la justicia fuera más eficaz y pronta. Así pues, el Decreto 528 hizo una redistribución de tribunales, creando estas corporaciones en donde existían los circuitos judiciales. Claramente

la creación de despachos judiciales, no sólo ha sido una salida palpable a la congestión judicial sino que resulta siendo una ayuda idónea para la resolución de los conflictos, así el número incontrolable de procesos sería manejable en la medida en que la oferta de juzgados fuera amplia, porque ello no significaría sólo el incremento de la infraestructura judicial, sino también la generación de empleo y lo que es mejor la disminución en las cargas laborales de los jueces, porque al haber mayor cantidad de terceros imparciales, la atención personalizada de cada uno de los conflictos sería garantizada, efectiva y pronta.

Ya hacia el año de 1970, se expide el Código de Procedimiento Civil, documento que continuaría implementando el sistema escritural, demarcando la tradición de amplios términos procesales y grandes dilaciones generadoras de mora judicial o lentitud en el trámite procesal. Al respecto, cabría recordar que *“Por desgracia, la justicia, si es segura no es rápida, y si es rápida no es segura”* (Carnelutti, 1989), así pues, tampoco se quiere decir que los procesos judiciales deban ser resueltos a la ligera o que un proceso entre más corto sea en unidad de tiempo, va a ser mucho más efectivo, por el contrario, la dificultad con el Código de procedimiento civil radicó en que el juez se tomaba en la literalidad todo el tiempo que éste consideraba necesario y al final, luego de unos cuantos años, la resolución del proceso demarcaba todo, menos justicia material.

A partir de 1971, la problemática de la congestión judicial ya empieza a ser mucho más notoria, puesto que en lo que concierne al sistema penal, el nivel de conflictividad aumenta haciendo que la población empiece a acudir al sistema desmesuradamente. *“En el nivel macro parece claro que un problema, explosivo, de congestión en la prestación de un servicio público que se originó en una demanda por ese servicio que creció por casi medio*

siglo a un ritmo superior al 6% frente a una oferta que hasta los setenta a duras penas alcanzaba el 1.5% al año” (Boaventura & García Villegas, 2001., pág. 517).

Dicho caos hace que en ese año se genere una reforma en el sistema penal, que tuviera como único fin introducir juzgados de instrucción criminal, no obstante ¿Era ésa una verdadera solución para el problema de congestión que se estaba viviendo en el momento? Investigadores afirman que:

“La gran falla de la reforma de 1971, fue la de haber deteriorado la calidad de la etapa de instrucción buscando corregir, por el lado de la oferta, un problema cuantitativo de congestión que se originaba por el lado de la demanda. La confusión entre cantidad y calidad, dándole prioridad a la primera sobre la segunda, en el servicio público donde por definición lo que importa es la calidad, condujo a que el Sistema Penal se concentrara en los procesos fáciles, rápidos y seguros de evacuar, abandonando aquellos que requerían mayor esfuerzo, y que son, precisamente, los que imponen mayores costos en la comunidad, y los que, por lo tanto, deberían recibir atención prioritaria” (Ibíd., Pág. 518).

Lo anterior, desde luego se fortalece, con la reforma de 1987, la cual ordenó que los organismos encargados de la investigación prestaran mayor atención a aquellos procesos en los que por obligación se tuviese la necesidad de la intervención de un abogado penalista, puesto que ellos resultaban siendo mucho más costosos para los sindicados por concepto de honorarios. Dicha reforma, *“en términos cuantitativos, iguala las entradas al sistema penal con su capacidad de evacuación, sin embargo, la gran objeción que se le puede hacer es la de haber institucionalizado los factores que, desde la reforma anterior habían llevado al deterioro de la calidad de los servicios de la justicia penal” (Ibíd., Pág. 519),* toda vez que,

se abandonaron completamente aquellos procesos en los que el acusado o sindicado tuviera un abogado de oficio.

Llegando a 1980, si el desastre no paraba en el sistema penal, claramente empeoraba en la justicia civil, y fue así como a través de la Ley 22, se decretó una emergencia judicial, razón por la cual se crearon *“767 nuevos cargos entre jueces adjuntos y jueces auxiliares distribuidos en todo el territorio nacional. Su trabajo consistía en elaborar, bajo la responsabilidad del titular del respectivo despacho judicial, proyectos de sentencias y autos en los expedientes que el juez le repartía”* (Cámara de comercio de Bogotá., 1990., pág. 6); no obstante, los avances alcanzados fueron mínimos, en comparación a la inversión económica aportada en dicho proyecto, puesto que la emergencia duró quince meses y el costo fue *“más de \$600 millones de pesos, quedando en el sistema penal alrededor de 1.390.000 procesos pendientes”* (Ibíd., Pág. 7).

Con la Ley 30 de 1987, se faculta al Gobierno Nacional, para emprender la tarea de una reforma a la justicia, que en todo caso siempre buscó fórmulas de descongestión y agilidad procesal. Ya hacia el año de 1991 con la expedición de la Constitución Política de Colombia, se abren las puertas y a partir de dicho año, la historia constitucional del país tuvo un avance magnífico, pues se introdujo en el sistema jurisdiccional algunos mecanismos de protección que son hoy por hoy un arma de doble filo, pues permiten que la protección de ciertos derechos sea alcanzada de manera preferente y que por lo tanto se tenga especial consideración cuando se haga uso de los mismos, pero con ello, se amplió mucho más la demanda de procesos judiciales, permitiendo que el sistema judicial se siguiera asfixiando hasta llegar a colapsar.

En 1996, con la Ley 270, ley estatutaria de administración de justicia, se describió el sistema judicial y se empezó a plasmar la importancia de la descongestión judicial. La oralidad, que en el sistema penal se abrió paso con la Ley 906 de 2004, esto es, el Código de Procedimiento Penal, invadió paulatinamente órbitas de otras áreas del derecho, pues específicamente en la civil, se habló de ello hasta el año 2010, con la expedición de la Ley 1395, “Por la cual se adoptan medidas de descongestión judicial”. Dicha ley, fue implementada con la Ley 1564 de 2012, esto es con el Código General del Proceso, que empezó a ser ejecutado progresiva y transitoriamente de manera gradual, de acuerdo a lo que fuera decidiendo el Consejo Superior de la Judicatura.

Aun cuando las normas citadas se encuentran vigentes, las mismas no han funcionado correctamente en la práctica, razón por la cual, en la actualidad en temas de descongestión judicial, no es que se haya avanzado mucho, puesto que aun cuando se ha intentado a lo largo de los años y a través de leyes combatir dicho flagelo, ha sido imposible superar las aberrantes crisis de hacinamiento en cuanto a procesos judiciales se refiere.

La dificultad actual radica en la incontrolable demanda que se presenta a diario en las oficinas de reparto, pues son innumerables los conflictos sociales, son exorbitantes los problemas interpersonales y la única conclusión que se tiene es que verdaderamente en Colombia nadie soporta a su prójimo; parece ser que todos estos años lo único que se ha hecho es apaciguar el problema, pero nunca se ha intentado arrancarlo de raíz, puesto que lo cierto es que es preocupante el incremento de los índices de conflictividad y de violencia ciudadana, razón por la cual, lo que se debe preguntar es: ¿Cómo disminuir los niveles de intolerancia en el País? ¿Cómo erradicar la violencia social? ¿De qué manera se puede aumentar el nivel de educación y junto con ello de cultura ciudadana? Y ¿Hasta dónde

podemos propagar en la ciudadanía la solución alterna de conflictos, educando a la ciudadanía a conciliar?

Causas de la Congestión Judicial en Colombia.

Muchas serán las causas de la congestión judicial y muchas más las teorías acerca de las mismas, pero a continuación se identificarán algunas de las que se considera fueron trascendentales para el avance descontrolado de dicho fenómeno.

Carencia de funcionarios judiciales.

“Al preguntar a varios jueces, cuál es la principal razón de la congestión, una de las primeras causas mencionadas es que se necesitan más jueces (...) afirman que no cuentan con el personal suficiente y con los elementos de logística necesarios para sufragar toda demanda que tiene la justicia en la actualidad”

(Coronado Britto & Valencia Nieto, 2009., pág. 28)

Un principio general del Derecho estipula que: *“No se puede obligar a nadie a lo imposible”*, de manera que la actividad judicial, entre muchas cosas es una actividad humana y como tal está sujeta a errores y a consideraciones. De este modo, el juez (como cabeza de un despacho judicial), es el principal responsable de la culminación efectiva y eficiente de los procesos cuyo reparto le competen, pero él no puede ir más allá de sus propias fuerzas y quizás olvidarse de su vida personal para fallar más de mil (1.000) procesos con los que cuenta en promedio su despacho. En estudio realizado por el Instituto SER de investigación y plasmado en 1990 por la Cámara de Comercio de Bogotá, se refleja que *“al indagar sobre el número de procesos que están a cargo de cada juzgado, encontramos que en promedio este supera fácilmente los mil. En mayo de 1982 los jueces penales municipales de Medellín tenían un promedio de 2849 procesos a su cargo. Para los jueces penales municipales de Barranquilla esta cifra era de 5953”* (Cámara de comercio de Bogotá., 1990., pág. 5). Ahora

bien, en un estudio mucho más reciente realizado por el Consejo Superior de la Judicatura, se determinó que: *“A la acumulación de procesos hay que agregar los asuntos que cada año ingresan a los despachos judiciales civiles, para formar un número de expedientes de difícil atención y agilización. Para el año 2003 ingresó un total de 470.651 procesos a los juzgados civiles, de los cuales 342.035 son ejecutivos, que sumados a los que se encuentran en trámites, activos o inactivos, producen una carga laboral de mayúsculas proporciones”* (Moreno Moreno & Malagón Martínez, 2008., pág. 60).

Gracias a un estudio realizado por la Corporación Excelencia en la justicia, denominado: “El estado de nuestra justicia”, se lograron importantes estadísticas del sector jurisdiccional en Colombia, desde el año 1998 hasta el 2016, en donde se devela el inventario de procesos activos y de ingresos y egresos efectivos anualmente. Así pues, los resultados – que fueron extraídos del Consejo Superior de la Judicatura – UDAE – SIERJU – evidenciaron que sólo en el año 2016 ingresaron un total de 2.036.798 procesos nuevos y que además, para ese mismo año 1.633.558 procesos se encontraban en el inventario de activos. Las estadísticas comprueban que 2.036.798 procesos estuvieron en el indicador de egresos efectivos. (Corporación Excelencia en la justicia. , 1998-2016.)

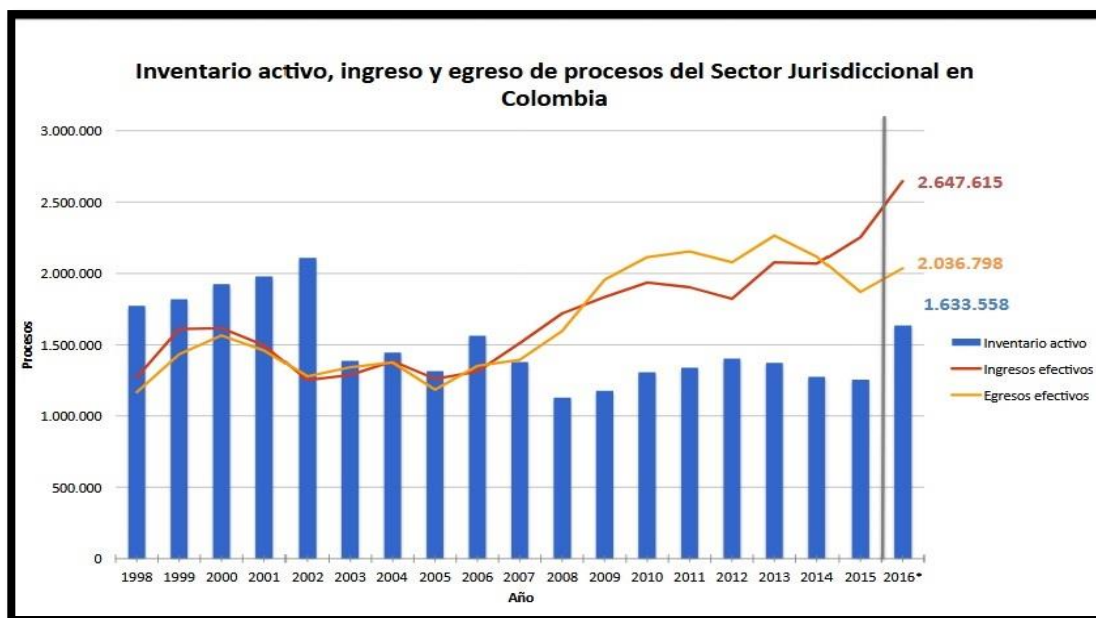


Ilustración 1 Inventario activo, ingreso y egreso de procesos en Colombia.

De conformidad con lo precedente, evidentemente la situación no ha mejorado mucho en los últimos años, puesto que gran parte de la problemática radica en la inmensurable cantidad de procesos judiciales y en la insuficiencia de funcionarios para atender las controversias presentadas a la jurisdicción. En el mismo estudio mencionado con anterioridad, la Corporación Excelencia en la Justicia reveló cifras acerca de la cobertura de la rama judicial para el año 2014. Así pues, los resultados fueron los siguientes (Corporación Excelencia en la justicia. , 1998-2016.):

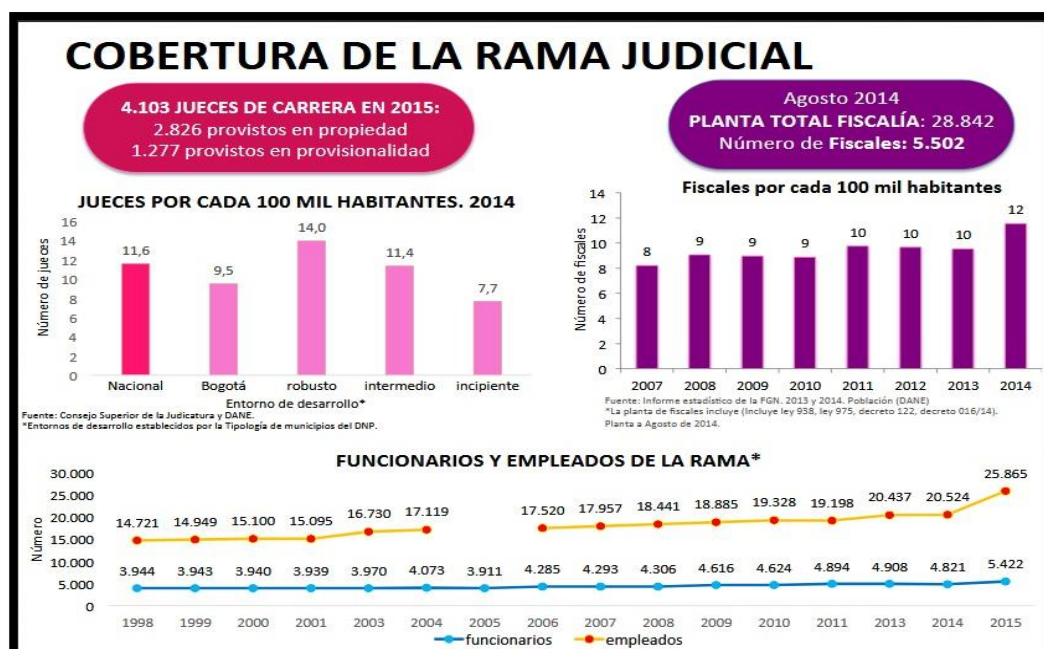


Ilustración 2 Cobertura de la Rama Judicial

Palpablemente, para el año 2014, a nivel nacional se tenía un promedio de 11,6 jueces y 12 fiscales por cada 100.000 habitantes. No obstante, para septiembre del año 2017 “por cada 100.000 habitantes hay en promedio 10,95 jueces, algo que para muchos representa una de las razones fundamentales para la congestión judicial que afecta a los despachos judiciales, pues se debe tener en cuenta que el estándar internacional, determinado por varias organizaciones como la Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, es de aproximadamente 65 jueces por cada 100.000 habitantes” (El nuevo siglo., 2017.).

Como resultado se lo precedente, se obtiene no sólo el incumplimiento de Colombia en los estándares internacionales, sino la excesiva carga laboral que los 10,95 jueces de la República deben soportar por cada 100.000 habitantes que deciden acudir a la jurisdicción. Con el fin de ejemplificar lo anterior, se supondrá que para el año 2016, los únicos procesos

con los que se cuentan son aquellos que se encuentran activos dentro del inventario mostrado en la ilustración 1, es decir, 1.633.558, omitiendo por supuesto, los ingresos y egresos efectivos para dicha anualidad. Así pues, en el caso hipotético en el que la rama judicial para el año 2016 hubiese tenido que atender sólo 1.633.558 procesos, claramente a cada juez, le hubiese correspondido un total de 149.183,37 procesos judiciales. No obstante, con el fin de ajustar el ejemplo un poco más a la realidad, a dicha cantidad se le tendría que sumar el reparto de procesos que ingresaron efectivamente para el mismo año según lo manifestado por el Consejo Superior de la Judicatura en la misma ilustración; que en su totalidad fue de 2.647.615. Ello indica que a cada juez le correspondieron aproximadamente 241.791,32 procesos judiciales, que sumados a los que ya se tenían como activos, da un total de 390.974,69 procesos para cada operador judicial.

La carencia de funcionarios judiciales, trae consigo una congestión en el sistema que resulta siendo inevitable, porque poniéndonos en contexto, absolutamente ningún juez de la República, por muy eficiente que sea, logra en una semana fallar cien (100) procesos, a menos que sean acciones de tutela y/o habeas corpus, por la sencilla razón de que un juez además de leer expedientes, tiene que realizar audiencias, inspecciones judiciales, evaluar personalmente todas las pruebas incorporadas a los procesos, proferir autos, resolver acciones constitucionales como derecho preferencial y con límite de tiempo, y realizar un sin número de actos que hacen que las ocho (8) horas laborales, parezcan tan sólo tres (3) para todo lo que tiene que hacer.

Adicional a ello, se resalta que además de lo anterior, en muchos de los casos, los jueces cuentan con tan solo dos (2) sustanciadores, un (1) secretario y un (1) notificador, en sus

despachos judiciales; o tal como ocurre en materia penal (generalmente) con tan solo un (1) sustanciador y un (1) secretario.

La generación de nuevos cargos, la posesión de más jueces, puede que alivie el problema de la congestión y sí no, por lo menos ayudaría a equilibrar un poco las cargas laborales, toda vez que como se reitera, lo que se vive no es un problema de simple forma, sino que es una dificultad sustancial y estructural en la rama judicial, pues es imposible no tener congestión, cuando en Colombia hay un total de 5.295 despachos judiciales de diferentes especialidades y de diferentes rangos para 49.381.250 habitantes con los que cuenta el país para agosto de 2017, según estadísticas del DANE.

Excesiva Carga Laboral.

El estudio acerca de la congestión judicial hace referencia al análisis diferencial entre oferta y demanda de justicia, así, un sistema judicial perfecto, (desde la perspectiva ciudadana) sería aquél en el cual la oferta superara a la demanda, pues allí, en un estado ideal de las cosas, los jueces estarían esperando a que surgiera una controversia que mereciese ser conocida por la jurisdicción para poder adelantar un proceso; o por lo menos el sistema judicial sería tan eficiente que alcanzaría a controlar los procesos que ingresan a diario a reparto, logrando un perfecto equilibrio entre los que ingresan, los que se encuentran en trámite y los que egresan con sentencia, sin importar que ésta sea favorable o desfavorable a las pretensiones del actor. Por otro lado, un sistema judicial imperfecto, sería aquel en el que la demanda de justicia superara la oferta de la misma, toda vez que en este caso, las controversias excederían la capacidad judicial para resolver las mismas y ocasionarían un desequilibrio en la administración de justicia. *“(...) En este punto es de resaltar que no obstante las mejoras observadas en los últimos años en la administración de justicia (en los*

términos de productividad, por ejemplo), si se continuara con la tendencia de la demanda de justicia y de la carga de la rama, la situación a diez años se tornará insostenible: la carga laboral promedio sería de 3.715 procesos por juez, la congestión promedio de 71.5% y el tiempo para descongestionar promedio de 2.89 años (...)” (Garay, 2003, pág. 278)

De acuerdo con lo dicho, indudablemente Colombia hace parte de los Estados que cuentan con un sistema judicial imperfecto, lo cual se corrobora, de acuerdo a una noticia del periódico El Tiempo, emitida el treinta (30) de noviembre del año 2015, en la que se asegura que para dicho año la congestión e impunidad en los procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia, se vio reflejada *“en el represamiento de procesos de ese tipo, que suman un poco más de 510.000”* (Sarralde Duque, 2015)

Es la inmensa conflictividad en el país la que genera un exceso de carga laboral para los pocos funcionarios judiciales, que tienen como incentivo inverso la demora o lentitud en el trámite procesal, puesto que, verbigracia, los operadores saturados de trabajo quedan imposibilitados para agilizar la justicia, generando mayor congestión bajo el pretexto (que en muchos casos corresponde a la realidad) de la inmensa carga laboral. Ello desde luego, ha sido objeto de pronunciamiento de la H. Corte Constitucional y al respecto ha dicho que:

“La mora judicial, tal como lo ha entendido esta corporación, viola el primado constitucional del acceso a la administración de justicia cuando la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos” (T-1249 , 2004.).

Lo anterior significa que, los funcionarios judiciales tienen plena justificación en la demora del trámite procesal, cuando invocan como causal de mora, la excesiva carga laboral, toda vez que ello no configura en ese aspecto, violación al debido proceso. Esto desde luego resulta siendo paradójico e incluso hasta inconstitucional, toda vez que surge la pregunta de ¿Qué juzgado en Colombia NO tiene exceso de carga laboral?, claramente ninguno, todos traen como justificación de la demora judicial, el exceso, la desproporción y la abundancia de procesos judiciales, trasladando al sujeto que acude a la jurisdicción, la responsabilidad o la carga de soportar la indebida administración del sistema judicial, “*como si ésta no estuviera en manos del Estado sino del justiciable*” (Rojas Gómez, Apuntes sobre la ley de la descongestión., 2011., pág. 15)

En efecto, el exceso de trabajo y el poco personal responsable del alto número de procesos asignados, no justifica que el juez merezca tal consideración para que éste falte a su compromiso social y con ello solamente acuda al menor esfuerzo, fallando o pronunciándose en relación de unos mínimos y sencillos procesos, puesto que ello se alejaría del justo medio que preconizaba Aristóteles. En ese sentido, se reitera que la Corte Constitucional ha sido demasiado beneplácita con los mismos, (T-230 , 2013) pues la justificación de mora judicial no aplicaría sí y sólo sí cuando se logra acreditar que el funcionario judicial en efecto ha sido negligente y que su comportamiento por tanto es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones, situación que guardadas las proporciones es sumamente difícil de probar.

En tema de congestión, es claro que no habría exceso en la carga laboral, si se contara con personal suficiente que atendiera las controversias llevadas a la jurisdicción y sí éste fuera mucho más eficiente, responsable y comprometido en su labor. Así mismo, dicho

personal no sería insuficiente si el índice de conflictos disminuyera en el País y esto se lograría a más de con educación y empleo, con agilidad en cada uno de los procesos que lleguen a la jurisdicción. Pero lamentablemente ni se cuenta con los funcionarios suficientes, tampoco con pocos procesos y mucho menos con seres humanos tolerantes, comprometidos, responsables y capaces de resolver sus conflictos hablando. Para el año 2017, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, los asesinatos por violencia interpersonal pasaron de 44,49% a 67,85%, en el caso de hombres, y de 24,71% a 40,37% en el de la mujeres. Como por cada dos mujeres asesinadas mueren ocho hombres, el promedio general de muertes por riñas supera el 60%. *“Las cifras de violencia por intolerancia reflejan la gran descomposición social en la que hemos caído los colombianos: es esa violencia interpersonal, especialmente las riñas, la que origina muchas muertes violentas”* (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses., 2017.), aseguró el Dr. Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto de Medicina Legal y docente universitario, entre otras, de la Universidad Libre.

Ahora bien, el cinco (5) de enero del año 2017, la Fiscalía General de la Nación informó que para el año 2016, se recibieron un total de 1.228.112 noticias criminales, esto es, un 4,02% más que en el año 2015. Al dar a conocer el censo delictivo de 2016, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, informó que los delitos más denunciados ese año fueron hurto, con 314.511 casos (25,61% de las noticias criminales); lesiones personales, con 185.573 casos (15,11% de las noticias criminales) y violencia intrafamiliar, con 120.154 casos (9,78% de las noticias criminales). (Fiscalía General de la Nación., 2015 - 2016.)

Así pues, es claro que los innumerables conflictos, en medio de una sociedad altamente intolerante e insegura, terminan siendo un amplio mar interminable entre los despachos

judiciales y cada expediente se termina perdiendo entre el caudal, de los procesos que nunca fallan y que nunca leen.

Implementación de la Acción de Tutela y/o Habeas Corpus.

Con la promulgación de la constitución de 1991, se alcanzaron logros inimaginables en cuanto a derechos fundamentales. Así, fueron implementados muchos mecanismos de protección, gracias a los cuales hoy se puede hablar de un acceso mucho más factible a la jurisdicción, pues antes se requería de muchas formalidades, hoy se cuenta con acciones que ni siquiera demandan la presencia de un apoderado judicial, porque lo que se busca es que el ciudadano pueda tener una protección tan amplia a sus derechos, que pueda acudir sin limitación alguna ante el juez y exponer su pretensión. Mecanismos tales como la Acción de Tutela y/o el Habeas Corpus, son reflejo del avance judicial y del interés actual en la protección de los derechos sustanciales y fundamentales de toda persona, que prevalecen sobre las formas; sin embargo, dicha facilidad en la interposición de demandas ha sido perjudicial para la estructura del sistema judicial, pues en la actualidad, según cifras del Sistema de Información Estadística de la Rama judicial (SIERJU) la Acción de Tutela suma el 32% de los procesos que ingresan a la justicia, *“esta gran cantidad de tutelas está asfixiando todo el sistema judicial del país y ha causado muchos traumas debido a que la justicia ordinaria ha tenido que paralizarse para dar paso a la tutela perentoria e inmediata bajo la pena de que el funcionario sea sancionado sino responde dentro del término”* (Coronado Britto & Valencia Nieto, 2009., pág. 31).

Si bien la tutela no es una acción perjudicial en sí misma, sí ha sido mal utilizada y quizás mal interpretada en su objeto, toda vez que la ciudadanía ha querido reemplazar los

medios ordinarios de protección y en vista de que éstos son absolutamente tediosos, prefieren acudir a la misma primero, en muchas ocasiones sabiendo que ésta es improcedente.

Del mismo modo ocurre con la Acción constitucional de Habeas Corpus, consagrada en el artículo 30 de la Constitución Política, por cuanto es un recurso preferente encaminado a proteger la libertad de cualquier persona que considere que ha sido detenida sin el respeto de sus garantías constitucionales, constituyéndose dicha acción, a diferencia de la Acción de Tutela, en un mecanismo principal de protección del derecho a la libertad, razón por la cual basta con la simple sospecha de la ilegalidad de la detención para que el mismo proceda directamente, sin necesidad de acudir a otros medios de defensa judicial. Es menester tener en cuenta que la Acción Constitucional de Habeas Corpus debe ser resuelta dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su interposición, so pena de que el funcionario incurra en el delito de desconocimiento de hábeas corpus consagrado en el artículo 177 de la Ley 599 de 2000, al no tramitar o decidir u obstaculizar dentro de los términos legales dicha petición. Lo anterior, desde luego genera que los Jueces de la República, (tal como sucede con la acción de tutela), no sólo por temor a incurrir en el tipo penal, sino para evitar futuros procesos disciplinarios, decidan suspender el trámite de los demás procesos ordinarios para resolver prioritariamente la acción constitucional allegada a su despacho.

Dicha confusión ciudadana, genera un grave problema al interior de los despachos judiciales, toda vez que las Acciones Constitucionales citadas, cuentan con un beneficio exclusivo -la preferencia sobre otros procesos-; de manera que sí por ejemplo, un juez recibe por reparto veinte (20) procesos y cinco (5) son tutelas y/o habeas corpus, los quince (15) procesos ordinarios que llegan, (o peor aún) los novecientos cincuenta (950) procesos que

están esperando ser tramitados al interior del despacho, deben seguir esperando, porque la protección constitucional la tienen primero y por encima de todo los derechos fundamentales.

Respecto a lo anterior, por ejemplo y refiriéndonos de manera exclusiva a la acción de tutela, para no hacer más extenso el presente acápite, en los últimos años, específicamente en el periodo que comprende 1992 a 2004 aumentó excesivamente el ingreso de acciones de amparo, puesto que, se pasó de 10.732 tutelas falladas en 1992, a 198.313 tutelas en 2004, lo cual claramente es un incremento de diez veces aproximadamente.

Tabla 3 Evolución tutelas falladas. 1992-2004.

Año	Total tutelas falladas	Fallos por juez.
1992	10.732	3,3
1993	20.181	6,2
1994	26.715	8,2
1995	29.950	9,2
1996	31.248	9,6
1997	33.663	10,3
1998	38.248	11,7
1999	90.248	27,7
2000	131.765	40,5
2001	133.272	41
2002	143.887	44,2
2003	149.454	45,9
2004	198.313	61

Nota: Tomada de (Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito, & García Villegas, 2006., pág. 473)

Lo ideal sería que las cifras fueran disminuyendo a medida que avanzan los años, puesto que ello indicaría que los derechos fundamentales casi nunca son vulnerados dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho; sin embargo, tristemente la Corporación Excelencia en la Justicia, realizó un promedio en el que se reveló el porcentaje de acciones de tutela que ingresaron hasta el año 2015, frente al total de procesos ingresados.

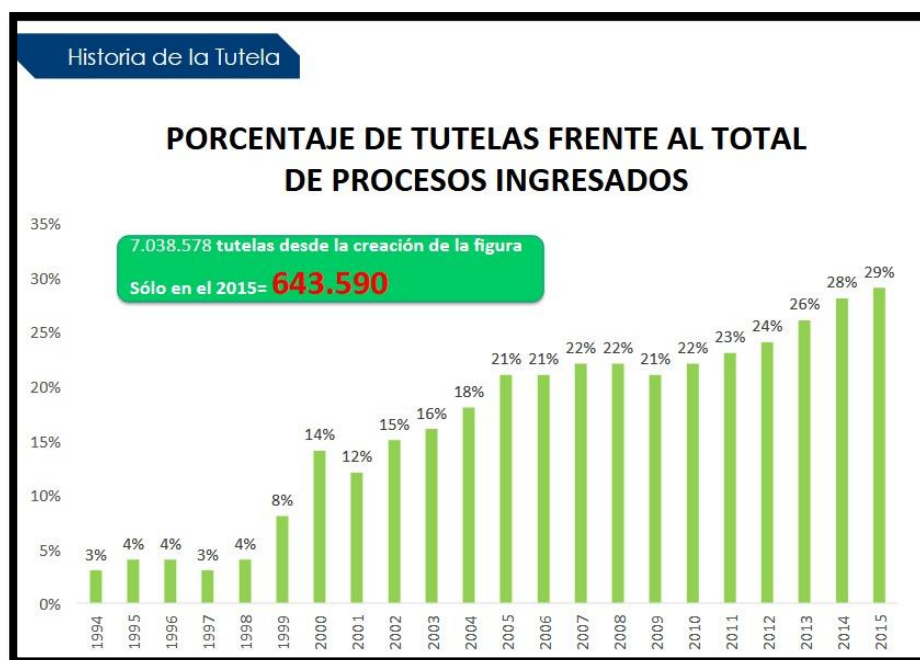


Ilustración 3 Porcentaje de tutelas frente al total de procesos ingresados.

Tal como se puede evidenciar, tan sólo en el año 2015, ingresó un total de 643.590 acciones de amparo, que representan el 29% de la totalidad de procesos judiciales que ingresó por reparto en la rama judicial. *“La demanda de tutela ha crecido mucho más rápido que la demanda general de justicia, pues mientras el número total de nuevos casos en la jurisdicción ordinaria casi se ha duplicado, la demanda de tutela ha crecido aproximadamente diez veces. Esto ha hecho que la tutela represente una carga creciente de trabajo para los jueces”* (Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito, & García Villegas, 2006., pág. 474)

Siendo un poco más específicos el veintiséis (26) de diciembre del año 2016, el periódico El periódico El Tiempo, publicó un artículo en el que se afirmó que *“cada 3,5 minutos se presenta una tutela por la salud”*, es decir que, para el año 2015, en total se presentaron 614.520 acciones, una cada 51 segundos, de las cuales el 24% correspondieron a violaciones

al derecho a la salud, esto es, aproximadamente 411 tutelas diarias (El Tiempo., 2016). No obstante, lo verdaderamente decepcionante es la forma en cómo se trasgreden los derechos fundamentales a diario en Colombia, puesto que independientemente de si las acciones de amparo presentadas son procedentes o no, lo cierto es que cada 3,5 minutos un ciudadano considera que sus derechos fundamentales han sido vulnerados y lo que es mucho más grave, el principal derecho afectado, es el derecho fundamental a la salud.

El abuso de los usuarios en el servicio de justicia, no sólo ha afectado a los juzgados municipales o del circuito, sino que según estudio realizado por el Consejo Superior de la Judicatura para el año 2014 es verdaderamente excesivo el porcentaje de acciones de tutela que ingresan anualmente a cada jurisdicción para ser atendidas, de esta forma, las estadísticas comprueban que por ejemplo, en la especialidad penal, para ese año, representaron un 61% y en la civil un 25%.

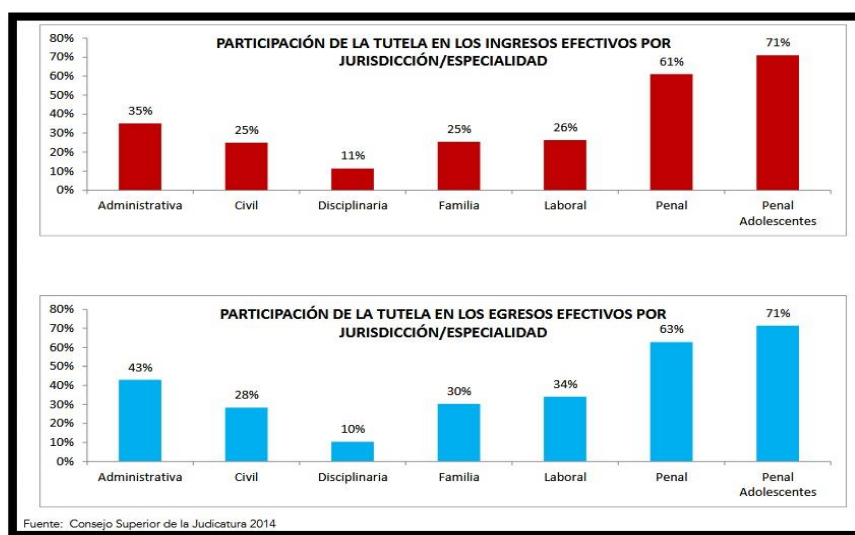


Ilustración 4 Participación de la tutela en los ingresos y egresos de procesos efectivos por especialidad.

Ese absurdo exceso en la presentación de acciones de tutela y hábeas corpus, que muchas veces desencadenan en un fallo de improcedencia, ha hecho que la congestión y el atraso judicial sea un problema verdaderamente significativo y preocupante, situación que debe llamar la atención para crear consciencia no sólo en la ciudadanía, sino también en las entidades que se dan a vulnerar derechos fundamentales sin ninguna clase de control, porque sí bien dicha problemática ha sido fruto de errores administrativos, financieros, políticos y judiciales, no es menos cierto que la masiva vulneración de derechos y el abuso de los usuarios que acceden a la administración para interponer una gran cantidad de garantías constitucionales con el mismo objeto (como las ya citadas), ha agravado el correcto funcionamiento de la administración de justicia, puesto que no hay sistema judicial que soporte la cantidad de acciones puestas a consideración del mismo.

Actos dilatorios por parte de los apoderados judiciales.

“A Dios un abogado le imita en esto: Dios de la nada hizo el mundo; él hace un pleito” (Jiménez de Cisneros, 1959., pág. 485)

La presencia de un apoderado o la representación técnica es indispensable para dirigirse a la jurisdicción en la mayoría de los procesos, toda vez que la actividad judicial, exige de quienes acuden a ella ciertos conocimientos propios de profesionales. Es así como a través de un contrato de mandato y bajo el derecho de postulación, el titular del derecho en litigio otorga poder al abogado, para que éste sea quien lo represente dentro del proceso judicial. Ahora bien, el hecho de que sea un profesional el que deba representar al dueño del derecho, trae consigo muchas ventajas, pero en lo que respecta al tema que se investiga en el presente documento, ha traído unas cuantas desventajas.

Coloquialmente se ha dicho en el mundo del Derecho que *“Hecha la ley, hecha la trampa”*, porque (para lamento de muchos futuros profesionales), el ejercicio de la abogacía, trae consigo una marca social de trampas, engaños y conveniencia, porque algunos pocos malos abogados, se han encargado de fomentar la imagen del “abogado ladrón”, “abogado mañoso” o “abogado mentiroso”. Dicha imagen, no ha sido en vano, y muchos profesionales en Derecho la han portado con orgullo viendo en éste trabajo, la oportunidad perfecta para generar algún tipo de enriquecimiento sin justa causa o para competir por la máxima demora en el trámite judicial.

Un ejemplo no muy lejano, es “el proceso sin fin” de Samuel Moreno, tal como lo denominó la revista Semana, en un artículo publicado en octubre del año 2015, en donde verdaderamente se demostró que ese caso en concreto retrata perfectamente la suma de todos los defectos de un sistema acusatorio que permitió que el ex alcalde de Bogotá estuviera detenido casi por cuatro años sin condena alguna. La cronología de todas las audiencias a las que faltó Moreno fue plasmada en éste artículo y se evidenció palpablemente que la defensa de Samuel Moreno, apoyada por su abogado no era otra que dilatar el proceso judicial. Así,

“El 31 de enero de 2014 aplazó su audiencia de imputación por problemas de salud de los abogados. El 25 de julio por incapacidad médica suya, el 7 de octubre porque no tenía defensor y el 4 de febrero de 2015 porque tenía otra audiencia. En 2015, pidió aplazamiento el 2, el 19 y el 27 de marzo. El 9 de ese mes ya había solicitado la nulidad del proceso. El 14 de mayo decidió cambiar de defensor. El 26 de junio, el nuevo abogado tampoco asistió. Finalmente, se programó el inicio del juicio oral para el 21 de septiembre, pero ese día no compareció el apoderado. Tampoco lo hizo el 23 de septiembre de 2015 y se le designó un

defensor de oficio que el exalcalde no aceptó. El martes 13 de octubre se suspendió la audiencia por una recusación. Y esa fue la gota que rebosó la copa” (Revista Semana, 2015.)

Dicha recusación fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual además de negarla, decidió compulsar copias a la Fiscalía para que se abriera una investigación en contra de Samuel Moreno y de su abogado por el delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.

Por infortunio, abogados como los que han representado a Samuel Moreno, han hecho un gran aporte a la congestión judicial actual, pues desde siempre han sido expertos en dilatar un proceso judicial, en alargar o demorar la obtención de la sentencia que al final se sabe que va en contra de los intereses de quien o quienes representan. De esta manera, no es extraño ver la forma en cómo se desnaturalizan los recursos ordinarios para lograr una demora en la ejecución de las decisiones; la parte vencida en muchas de las ocasiones, adicionalmente, va a apelar y no porque la providencia sea propiamente contraria a la ley o haya omitido partes fundamentales probadas en el proceso, sino porque simplemente no le conviene a la parte que repone o apela, porque no le sirve que lo condenen y por ello, para demorar más la ejecución de la sentencia reponen, apelan, se quejan, consultan, casan y si es posible piden que la sentencia sea revisada.

“Muchas veces es el abogado el que adopta una actitud dilatoria en el proceso mediante la interposición de recursos e incidentes innecesarios, con petición de pruebas inocuas, con peticiones sin fundamentos, no en procura de que haya una eficaz justicia sino, por el contrario, para confundir al juez, entorpecer el trámite del proceso y causar demora en la decisión y la ejecución” (Consejo Superior de la Judicatura., 2005., pág. 26)

Lamentablemente, otro caso mucho más reciente, vinculado a uno de los mayores escándalos de corrupción en la justicia que reflejó la gran habilidad por parte de los apoderados judiciales en demorar el trámite procesal a cualquier costo o precio, es precisamente el decepcionante caso del ex Fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el cual en declaraciones rendidas ante la Corte Suprema de Justicia, relató la forma en como el senador Musa Besaile pagó \$2.000 millones a cambio de dilatar en su beneficio un proceso judicial que se adelantaba en su contra, en el alto tribunal por parapolítica. De esta forma, el ex Fiscal Anticorrupción afirmó que: *“Se decretaron unas pruebas y el proceso comenzó a dormir el sueño de los justos, y añadió que, como no se acordó el inhibitorio, se decretaron unas pruebas, se ordenó practicar diligencia para dilatar el proceso. **Lo que buscaban, aceptó Moreno, era que la investigación prescribiera**”* (El Espectador., 2017). Ciertamente la mención del caso en particular, no sólo resulta siendo indignante sino también dolorosa, puesto que por desgracia, Luis Gustavo Moreno, hoy sirve como ejemplo perfecto para demostrar en la presente monografía las maniobras oscuras, ilegales, corruptas, irresponsables y antiéticas de las cuales se basan algunos pocos abogados para lograr la máxima dilatación en los procesos judiciales, que al final pueden desencadenar no en justicia, sino en impunidad.

Concluyendo, la actitud temeraria o de mala fe por parte de ciertos apoderados durante el trámite judicial, no es suficiente para influir en la problemática que se ha venido trabajando, sino que también son generadores de congestión judicial cuando lo único que les interesa es recibir honorarios y por tal motivo la única solución que le ven a todos los casos que les llega de consulta, es la interposición de demandas. A muchos abogados poco y nada les interesa las personas que acuden en protección, asesoría, respeto y guía frente a sus

derechos; porque sí fuera así, propondrían otras formas de solución de conflictos, avocarían por la conciliación, procurarían, previo a demandar, que las partes hubiesen agotado todas las posibilidades existentes que les sirvieran para resolver la controversia en buenos términos.

“En cuántas ocasiones no vemos que por consejos del abogado se intentan las más descabelladas acciones penales, civiles, frente a las cuales, ante el aparente ropaje de legalidad, nada pueden hacer los jueces para, desde un primer momento detener el desarrollo de esa conducta y después de años de litigio, multitud de trámites, desgaste de tiempo y dinero se determina la temeridad del proceder sin que nada pase” (López Blanco, 2003, pág. 194).

Excesiva ritualidad, culto a las formas y populismo punitivo.

Antes de la expedición del Código General del Proceso, la justicia se reducía al cumplimiento de vanas formalidades que, dada la experiencia, lo único que generaban era una hipocresía judicial, en donde el rito era más importante que el contenido de la demanda y desde luego, el cumplimiento de los requisitos valía mucho más que el derecho sustancial presentado para su protección. Ello, generó un conformismo y una mal interpretación en el objeto de la administración de justicia, lo primero, porque los funcionarios judiciales por lo único que se tenían que preocupar era por la calificación de la demanda, por lo menos en sentido formal y cualquier error era castigado con órdenes de corrección que podían durar un largo tiempo. Y lo segundo, porque definitivamente el apego excesivo a la ley transmitía el claro mensaje a la sociedad de “justicia demorada e inalcanzable”, así un proceso ordinario de pertenencia, fácilmente podía durar diez (10) o quince (15) años, teniendo en cuenta que en la mera admisión de la demanda, tardaba mínimamente un (1) año.

El apego a la ley sí bien es cierto es importante, imperativo y totalmente necesario en un Estado de Derecho, lamentablemente ha generado consecuencias inmensamente graves respecto a la congestión, puesto que los procesos se han hecho extensos, interminables, tediosos y hasta indeseables; la justicia colombiana se ha llenado de pretextos para hacer caso omiso a las controversias sociales y ha sido tan claro el mensaje, que se ha construido poco a poco una desconfianza social en la justicia que hoy por hoy es absolutamente palpable.

“Nuestro procedimiento es exageradamente reglado, lleno de términos que nunca se cumplen, y de formalidades cuya transgresión genera múltiples nulidades que hacen inoperante y muy costosa la justicia. Si alguna reforma hay que hacerle a nuestros códigos de procedimiento es precisamente la de “desprocedimentalizarlos”, dejando únicamente los mecanismos que permitan garantizar el derecho de defensa de las parte. En una palabra, se debe tener en cuenta que el procedimiento debe ser un instrumento eficaz para lograr la realización del derecho sustantivo, y no un artilugio para matarlo” (Cámara de comercio de Bogotá., 1990., pág. 9)

Luego de 1991, las Altas Cortes empezaron a pronunciarse sobre la importancia del derecho sustancial y sobre la prevalencia de éste por encima de las formas, dándose cuenta que durante años, los procedimientos y el exceso de ritualidad, lo único que habían generado era una obstrucción en la justicia y un desazón de impunidad. Sin embargo, muy tarde se daría cuenta el cuerpo legislativo de la necesidad de incorporar la oralidad en los procesos civiles y dejar en el pasado los procedimientos llenos de “peros”; pues fue hasta el año 2004 con la Ley 906, donde se incorporó en el país la oralidad en los procesos judiciales en cuanto a justicia penal se refiere, no obstante, debido a la problemática social por la cual atravesó el país a mediados de los años 80 y 90, la oralidad no pudo llegar a su máximo esplendor, pues

grandes intereses económicos y políticos, asociados fuertemente al narcotráfico, hicieron que la gran idea de procesos meramente orales fuera decayendo poco a poco, hasta reducirse a la mera escrituralidad, en donde incluso, el acusado no pudiera ni siquiera identificar a su acusador – justicia sin rostro -. Sin embargo, la oralidad nunca ha dejado de ser un pilar importante, pero pendiente por alcanzar, en el Derecho, pues en el año 2010, la idea de la oralidad permea en las esferas de la jurisdicción civil y tras la expedición de la Ley 1395, se vuelve a plantear la necesidad de dejar atrás los tortuosos procesos escriturales y pasar a la nueva era de la oralidad en donde mucho más que papel, en los juzgados exista el verdadero derecho sustancial, lo cual, adicionalmente, permitiría dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 29 constitucional que refiere el derecho al debido proceso como oral y público, entre otras atribuciones.

Ahora bien, lamentablemente como muchas de las leyes que se expiden a diario en el país, la celeridad en los procesos penales, impulsada por la verdadera oralidad, se ha quedado en el papel, puesto que lo cierto es que no ha funcionado a plenitud y la inmensa carga laboral, los incontables procesos que a diario se reciben por el alto grado de conflictividad en Colombia, la falta de funcionarios que atiendan tal cantidad de casos y la ironía de querer implantar la oralidad con códigos de más de quinientos (500) artículos, no ha hecho más que fortalecer la imagen en la ciudadanía de “demora en el trámite procesal” e ineficacia de los procesos judiciales.

El Congreso de la República y en general los mandatarios del país no han hecho más que impulsar la creación de normas que en su mayoría resultan siendo innecesarias y absolutamente disfuncionales, pues aún hoy es verdaderamente exagerado ese populismo en donde el problema no se ataca por su origen, sino que se apacigua y se calma a tal punto que

la sociedad tolera su existencia y no hace nada para impedir su desarrollo. Al respecto, el abogado Rodolfo Valero y Borrás, en un congreso llevado a cabo en Buenos Aires – Argentina, en el cual se criticó el sistema penal acusatorio colombiano, afirmó lo siguiente *“desde la creación del Congreso de la República, el 27 de noviembre de 1820, comenzó un diluvio de leyes que hasta hoy suman 5.957.000”*.

Ciertamente la excesiva normatividad que tiene nuestro país hace que la justicia se vea tortuosa y con excesiva formalidad, pues en Colombia existe una ley para cada problemática social, todo está prohibido y la rama del derecho que más se desarrolla es el derecho penal, cuando éste debe ser la última ratio. Jamás se ha pensado en simplemente descodificar el país y pasar a un proceso de recodificación en donde quede como resultado unas cuantas normas con lo verdaderamente esencial, es decir con principios que eduquen a las personas, que les ofrezcan oportunidades para salir adelante y más allá de tener un Estado sancionador, sea preventivo y verdaderamente oportuno para atender las necesidades sociales.

Lo dicho precedentemente, claramente es demostrado con uno de los artículos más ambiguos, amplios y por demás absolutamente innecesarios que tiene el actual Código Penal – Ley 599 del año 2000 -, esto es el artículo 182, el cual literalmente reza *“El que, fuera de los casos especialmente previstos como delito constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”* (Ley 599., 2000., pág. Art. 182). Basta una lectura superficial del mismo, para darse cuenta que no dice nada y dice mucho a la vez, porque tiene un grado tan alto de subjetividad que *“alguna cosa”*, resulta siendo cualquier acto que el ser humano pueda realizar y ¿quién determina que se ajusta al constreñir, hacer, tolerar u omitir que habla el artículo? Normas como esas, objetivamente no se necesitan, pues su función no es más que normativizar en exceso e

incrementar el problema de la congestión judicial, puesto que una persona podrá verse involucrada en cualquier clase de proceso penal y los jueces tendrían que conocer del mismo, por más descabellado que sea.

Como se reitera el gran problema de la ritualidad, del culto a las formas y del populismo punitivo, deviene especialmente de éste último, puesto que, verbigracia, si se tiene una dificultad de ataque con ácido a la mujer, se crea la ley del feminicidio – (Ley 1761., 2015)-, en lugar de, verbigracia, prohibir la venta en el mercado de dichas sustancias; si existe una dificultad con la delincuencia en menores de edad, se expide una nueva norma especialmente para sancionar a los menores infractores – esto es, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098., 2006)-, en lugar de educar a los niños hoy, para que mañana sean buenos ciudadanos; si existen problemáticas en la ciudadanía en general, lo último que se piensa es en determinar la raíz de las mismas, sino que se prefiere emitir nuevas normas que sancionen – se hace referencia a la (Ley 1826., 2017), de acusador privado y a la (Ley 1801., 2016.), nuevo código de policía- que prohíban, que castiguen al individuo y no que permitan su crecimiento personal y mucho menos su rehabilitación ante una sociedad que en sí misma lo corrompe.

El actual Código de Policía, (Ley 1801., 2016.), por ejemplo, sanciona a los famosos “colados en Transmilenio”, castiga la participación en riñas, las actividades con ruido excesivo, el mal manejo de residuos y basuras, los dibujos vandálicos en espacio público o grafitis en lugares no autorizados, entre otras conductas. No obstante en su artículo segundo, claramente señala:

“Objetivos específicos:

1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público.

2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.

3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y solución pacífica de desacuerdos entre particulares (...)

6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional” (Ley 1801., 2016., pág. Art. 2)

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta inmediata es ¿será que lo que la comunidad necesita para aprender a convivir, para respetar al otro, para tolerar la diferencia y para simplemente comportarse de forma adecuada es la creación de un código que contenga prohibiciones y sanciones? ¿Será que con la expedición de la Ley 1801 de 2016, ya no hay colados en Transmilenio, o riñas, o los ciudadanos dejaron de arrojar la basura por las ventanas de los buses? Pues bien, claramente las cosas en el país continúan igual y cada día es peor; no porque el actual código de infancia y adolescencia castigue a los menores infractores, éstos han dejado de delinquir, por el contrario, como se evidencia a diario en los medios de comunicación, el comportamiento de los menores es mucho más agresivo y lesivo para la sociedad.

Como solo un ejemplo de ello, se resalta el caso ocurrido el pasado treinta (30) de mayo de 2017, registrado por el Espectador, en donde dos (2) jóvenes de 16 años, fueron

sorprendidos hurtando con un arma de fuego en Kennedy, situación que llama la atención, pues en lo corrido del presente año, van 4.000 menores detenidos (según la misma fuente) y la mayoría involucrados por el delito de hurto. (Moreno Barreto & Dulce Romero, 2017)

Es claro que para que la oralidad y la verdadera descongestión judicial, puedan llegar a ser exitosas, es necesario que más que normas y códigos ineficaces, en el país haya educación y verdaderas oportunidades para la ciudadanía; como se ha dicho tantas veces en el presente escrito, judicializar a un menor de edad definitivamente NO es la solución, ya que ello, aunque corresponda por legalidad y justicia ante el comportamiento atentatorio a la sociedad, igual no resulta siendo la solución más adecuada, puesto que lo que un niño necesita es amor, educación, respeto, enseñanza de principios y valores básicos; los ciudadanos requieren el establecimiento de límites específicos y absolutamente claros; que contengan pocas normas drásticas que sancionen el desconocimiento de algún deber en particular y que obligue a las personas a pensarlo dos (2) veces cuando de delinquir se trata. Luego, un verdadero Estado de Derecho, requiere normas con el condicionamiento único de que sean eficaces y justas, encaminadas a generar una verdadera política criminal de Estado en la cual, lo que predomine sea la prevención y la implantación de una verdadera cultura ciudadana.

Consecuencias de la Congestión Judicial en Colombia.

Habiendo estructurado algunas de las causas trascendentales de la congestión judicial, es menester analizar ahora las consecuencias que ha traído dicho fenómeno en el deterioro de la justicia en nuestro país, puesto que es claro que lo que se tiene hoy como rama judicial ha sido la construcción ladrillo por ladrillo, de una serie de malos procedimientos, malas leyes y malas prácticas jurídicas. Todo lo que somos hoy, es fruto de lo que hicieron de nosotros en tiempos pasados, lo cual, conociéndolo, por supuesto que se puede cambiar para

generar lo que constituye el objeto de éste escrito, la prevención como aquel mecanismo de construcción de país y en consecuencia de vivencia en paz.

Pérdida progresiva de la calidad en los fallos judiciales.

“(...) La mayoría de los jueces se encuentra bajo presión del Consejo Superior de la Judicatura para producir fallos en cantidad pero sin calidad (...)”

(Moreno Moreno & Malagón Martínez, 2008., pág. 145)

Una de las consecuencias inmediatas de la congestión judicial, generada como ya se vio por una serie de causas indiscutibles, es la mediocridad en las sentencias judiciales; dicha problemática es tan cierta que hoy por hoy ni siquiera es el juez quien proyecta sus providencias personalmente, sino que las hacen los trabajadores del despacho, que por el exceso en la carga laboral, leen a medias los procesos y crean formatos para que sólo sea cambiar nombres, apellidos y enviarlos para la firma del juez. La protección al derecho sustancial se pierde, cuando no se tiene la garantía de que el juez verdaderamente vaya a tomar una decisión fundamentada y racional frente a lo probado en el proceso; ello no quiere decir que los jueces no motiven las sentencias, sino que pese a que las motivan, muchas veces no son fallos racionales o adecuados con la situación en concreto. Es tan importante salir de procesos judiciales lo más pronto posible, que lo que pasa a veces es que se expiden fallos en serie, contando con que la parte a quien perjudique la decisión puede usar los recursos pertinentes y tener la posibilidad de ganar el pleito en segunda instancia, porque en primera poca atención se le prestó.

Es claro que no siempre la problemática judicial está en cabeza de los funcionarios judiciales, sin embargo, al ser ellos los responsables de impartir justicia, tienen un nivel de responsabilidad mayor que los ciudadanos, puesto que resulta siendo desproporcionado

trasladar a quien acude a la jurisdicción la carga de no encontrar soluciones, sino muchas más dificultades, pues, el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental y por tal razón, debe dársele la prioridad que merece. No obstante, la crisis de congestión ha generado que los funcionarios y particularmente los jueces, no tengan otra opción que emitir sentencias desprovistas de análisis crítico y de todo tipo de interpretación normativa; ya en el derecho no surgen conceptos nuevos o posturas nuevas, porque la excesiva cantidad de procesos sólo deja tiempo para copiar y pegar apartes de sentencias de las altas cortes y notificar desesperadamente providencias judiciales, para disminuir un poco la carga laboral.

Se tiene el pleno convencimiento de que más que cantidad, lo que cuenta en el mundo jurídico es la calidad de los fallos, porque ellos también ayudarían (aunque sea idealmente) a descongestionar la justicia, en la medida en que sí un fallo es absolutamente integral en sus partes, los intervinientes no tendrían ninguna razón para hacer uso de los recursos procedentes, puesto que el fallo sería tan claro y tan justificable que aun la parte a quien perjudique la decisión, estaría convencida de que la misma es absolutamente justa. En las sentencias judiciales, los administradores de justicia deben aprovechar cada palabra y cada signo, para reflejar en sus providencias la justicia material, para convencer al ciudadano de que en Colombia la justicia sí existe y que aun a pesar de las mil dificultades, ésta no sólo es para la gente del común -“los de ruana”- sino que aplica a todo el que acuda a la jurisdicción sin discriminación alguna. Con ello, no se quiere decir que lo que se pretende son fallos meramente retóricos en los que la poesía salga a flote y en donde se mal gasten páginas interminables hablando de principios muchas veces inexistentes en nuestro país, sino que lo que se busca es que los jueces puedan realmente individualizar y particularizar cada caso en concreto, a tal punto de que a cada proceso le pueda corresponder una sentencia racional.

Al respecto, es menester destacar como una de las pocas sentencias en las cuales a través de política criminal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sienta jurisprudencia en los casos de corrupción en donde los implicados han aceptado cargos, buscando una reducción importante de la pena; la sentencia emitida el pasado trece (13) de octubre del presente año en el caso concreto de los hermanos Miguel Eduardo, Miguel Francisco y Guido Nule, por el denominado “carrusel de contratos”. En dicha sentencia, se aplaude que la Corte aplica una verdadera justicia material, puesto que argumenta que *“no se puede presentar una rebaja en la pena si no devuelven los dineros que se apropiaron”* (Sala de Redacción., 2017) y a partir de lo anterior, decide aumentar la pena en contra de los antes citados, de 14 a 19 años, cinco meses y once días, además de condenarlos a una multa económica de \$13.055 millones.

Así mismo, la Sala de Casación Penal, argumentó que los juzgadores, es decir, los jueces y el Tribunal, habían estado interpretando erradamente la (Ley 906., 2004), en cuanto a la decisión de aplicar el máximo de rebaja de la pena. Lo anterior, porque en criterio de la Corte, *“dejaron de considerar el tema del resarcimiento de los perjuicios causados a las víctimas y el verdadero ahorro en la labor investigativa de la Fiscalía”* (Sala de Redacción., 2017). Así pues, la Corte consideró que en el fallo de primera instancia se evidenció palpablemente que los acusados no mostraban ningún tipo de interés o intención de reparar los perjuicios causados, sino que por el contrario, pretendieron que se tuviera como suficiente reparación el pago del siniestro efectuado por una compañía aseguradora que también administra recursos públicos, lo cual a todas luces resultó siendo censurable para la alta corporación.

Con la sentencia mencionada, no sólo se demostró que a veces la ley no es exclusivamente para las personas con menor capacidad económica, tal como se refirió

anteriormente, sino que además se fijó un claro criterio en donde la Corte rechaza radicalmente los actos de apropiación o desfalco a los recursos públicos. Luego, sí los jueces en sus providencias desarrollaran una política criminal preventiva y certera, en cabeza de aquellas personas que tienen mayor prestancia y posición a nivel económico, académico, social, político, entre otros; y lo mismo se replicara en cada uno de los ciudadanos que cometan un delito, se lograría desarrollar como vivo ejemplo para quienes afortunadamente no han incurrido en el mismo, el fin de la pena señalado en el artículo cuarto (4) del Código Penal – (Ley 599., 2000.)-, referente a la prevención general e incluso prevención especial, por cuanto quien haya acudido a algún hecho punible conocería las consecuencias de dicho acto y en consecuencia, se abstendría tanto él como el grupo social de realizar cualquier comportamiento ilegal.

Desconfianza ciudadana e Inseguridad jurídica.

Quizás uno de las problemáticas más grandes que afronta Colombia, es contar con un alto nivel de incredulidad ciudadana y de inseguridad jurídica, pues las muchas tragedias que la comunidad ha tenido que soportar, la han hecho indiferente y desconfiada, a tal punto que se ha visto obligada a acudir a otros medios para suplir sus necesidades, porque del Estado no espera nada más que decepciones.

Pues bien, una de las mayores consecuencias inmediatas de la congestión judicial, es el incremento de la desconfianza e inseguridad ciudadana en el sistema judicial. Ésta, será expuesta con mayor amplitud en el capítulo II, sin embargo, en el presente acápite nos limitaremos a decir que la desconfianza ciudadana y la inseguridad jurídica, además de ser consecuencias inmediatas (porque surgen ipso facto, una vez que la comunidad ve los errores

judiciales), son también progresivas, porque las mismas se van reforzando y van aumentando cada vez que la justicia no llena las expectativas ciudadanas. En este punto, claramente la congestión en el sistema judicial cumple un papel muy importante, toda vez que cuando la sociedad ve una rama judicial que no tiene la capacidad para responder con el reparto de procesos que llega a diario, o que demora años tramitando un proceso, o que acepta todas las dilaciones posibles, porque los términos se cumplen únicamente para las partes y no para el juez, es claro que ello genera un sinsabor de incredulidad, porque eso indica que es una justicia ineficiente e inútil.

“El problema de la congestión judicial es una de las principales causas de la impunidad y atenta, además, contra la credibilidad de la ciudadanía frente a la eficacia del poder judicial. Es por esto que debe ser atacada en una forma integral e inmediata (...)” (Cámara de comercio de Bogotá., 1990., pág. 16).

Valga la pena a apoyar lo dicho por un columnista del periódico El Tiempo, en artículo publicado en el 2013, *“Colombia no puede continuar ofreciendo a su pueblo una justicia tardía, que agudice la pobreza, lo aleje de las instituciones y lo arroje a los brazos de la justicia privada”* (González Cuervo, 2013)

Incremento desmesurado del fenómeno de justicia por mano propia.

Aunado a la desconfianza ciudadana e inseguridad jurídica, se encuentra la búsqueda desesperada de otras posibilidades que le ayuden a los ciudadanos a resolver sus controversias, pues un conflicto no puede pervivir eternamente, sino que algo en su interior, llama a su pronta solución. Así pues, la congestión judicial en un sistema ineficiente (tal como también se ampliará a profundidad en el próximo capítulo), trae como fruto el aumento

desmesurado de la justicia por mano propia, puesto que como nadie confía en nadie, la única protección que se tiene es la defensa propia.

“El analista argentino Gustavo Beliz señala que la justicia por mano propia es una forma extrema de privatización de la violencia, y en Colombia Antanas Mockus ha criticado con insistencia la aprobación ciudadana del uso de la fuerza para corregir o para matar a un infractor (...) Más todavía: lejos de ser un mecanismo efectivo de control, la justicia por mano propia reproduce y aumenta los niveles de inseguridad, supone amenazas a la integridad de las personas y tiene graves implicaciones sobre la legitimidad y aceptación popular del Estado” (Ortega Contreras, 2015).

Claramente, el incremento de la justicia por mano propia en lugar de crear un modelo perfecto de sistema judicial, lo que hace es empeorar la desconfianza y la inseguridad social, puesto que en medio de esa búsqueda desesperada de justicia, se cae en una desproporción de lo que se cree es la pena que merece el delincuente, comparado con el daño causado o el delito cometido. Así pues, a diario se ven los casos en los que la comunidad airada, no se mide para castigar a aquél que ha tenido ciertos comportamientos desviados o episodios en los que la víctima, se convierte en victimario fácilmente y que sí bien, muchas veces cambian los papeles justificados en una ira e intenso dolor, un estado de necesidad, una fuerza mayor, un caso fortuito y/o entre otros, una legítima defensa, ésta deja de ser legítima una vez existe el evidente exceso o la clara desproporción.

No está por demás reiterar que la crítica fundamental que se hace al Estado, radica en que éste se ha encargado de crear normas que tipifiquen conductas y prohíban formas de actuar, se ha centrado en el desarrollo del Derecho Penal, pero nunca se ha preocupado en prevenir dichos comportamientos anormales, el Estado desde siempre ha llegado después de;

es decir, no ofrece una justicia material, pero cuando los ciudadanos la buscan por sus propios medios porque no ven otra salida, ahí llega el Estado para castigar su exceso, cuando lo que debió haber hecho era evitar que la persona administrara justicia por sus propias manos y brindarle en su reemplazo la solución sustancial a la controversia presentada.

“ Creo que la justicia por propia mano es un fenómeno que habla de la poca o nula funcionalidad o eficacia de todas las instituciones de la justicia, no sólo de los tribunales (...) Pero las raíces de este fenómeno, como aquí ya se apuntó en varias ocasiones, están en la crisis de los Estados y de su capacidad de respuesta (...) Pues a la gente, en términos genéricos, le resulta más barato, le resulta más accesible (y no me refiero sólo al dinero), crear sus propias instituciones que acudir al Estado ” (Concha Cantú, 2002, pág. 74)

Concluyendo, no son pocos los casos que se podrían identificar que justificaran lo dicho con anterioridad, situación que permea una preocupación indiscutible, porque lo ideal es que los conflictos se solucionaran dentro de la civilidad, pero cuando un conflicto se soluciona con otro mucho más grande, eso trae no civilidad sino un estado de salvajismo.

“Cuando no existe certidumbre entre los gobernados respecto a la capacidad del gobernante para corregir los actos de desestabilización y de violencia, sean por efecto del delito ordinario o de la delincuencia organizada, aparece la anarquía, el caos y sobre todo la desmoralización. Se pierde entonces la fe y el respeto hacia las instituciones públicas (...) Las consecuencias no deseadas de un estado de incertidumbre y de anarquía pueden ser las de la reacción, violenta muchas veces, de las víctimas de la injusticia ” (Abascal Carranza, 2014., pág. 23)

CAPÍTULO II:
LA JUSTICIA POR MANO PROPIA COMO REACCIÓN SOCIAL A LA
CONGESTIÓN Y COMO DESCONFIANZA CIUDADANA EN EL SISTEMA
JUDICIAL COLOMBIANO.

“(...) El problema es de estructura moral, y ahí lo evidente es la dificultad para distinguir controles en la acción comunitaria. Las masas cobran el poder que les da la pérdida del rostro individualizado. Son nadie y son todo. Son la piedra lanzada contra el individuo amarrado y son la ira ante la injusticia. Son el deseo de infligir el daño y son la memoria de la niña violada” (Monsiváis, 2002, pág. 28)

En el capítulo anterior, se ilustró al lector acerca del fenómeno de la congestión judicial a nivel general, mostrando un panorama no muy alentador en nuestro país. De éste modo, se enunció que la presente monografía no tiene como fin ahondar de forma individualizada en la congestión judicial sino que por el contrario ésta resulta siendo el medio para llegar al fin propuesto, que es demostrar la correlación existente entre dicho fenómeno y la justicia por mano propia, toda vez que parece ser que se corresponden de manera directamente proporcional, puesto que entre más congestión judicial exista, los casos en los que los ciudadanos deciden tomar la justicia por mano propia aumentarán y se elevarán exorbitantemente; y por el contrario entre menor congestión judicial haya, los ciudadanos definitivamente acudirán a la jurisdicción antes que buscar la justicia privada.

En éste sentido, en el presente capítulo, se profundizará, acerca del fenómeno ya descrito, indicando primariamente su definición, para luego analizar cuál ha sido su origen y desarrollo; y finalmente, se verificarán los índices de desconfianza e inseguridad en el país.

Definición del fenómeno de justicia por mano propia.

A decir verdad, son pocos (por no decir que ninguno) los escritos de grandes autores que definan dicho concepto, no sólo porque es un término coloquial y propio para identificar un fenómeno meramente social, sino porque además corresponde a una ilegítima administración de justicia, es decir, lo normal es que un juez sea quien decida un conflicto y lo anormal es cuando un particular es quien lo hace.

Pues bien, la decisión ciudadana de tomar la justicia por mano propia, de acuerdo al sujeto, puede verse desde dos (2) perspectivas (Flores, 2002., pág. 87). La primera de ellas, es individual y surge cuando el ciudadano al ver transgredidos sus derechos o al sentir la impotencia e imposibilidad de satisfacer sus necesidades, busca satisfacerlas, o dar cumplimiento a sus derechos, a través de la justicia por mano propia y la segunda, que es una reacción colectiva, aparece cuando varios sujetos toman la decisión de pasar por alto la estructura del sistema legal y judicial, y en pro de un cambio social actúan desesperadamente dejando como precedente la medida tomada ante la ineficiencia (en lo que respecta éste documento) del sistema judicial, fenómeno que por la pluralidad de sujetos se ha podido evidenciar a lo largo de la historia en las revoluciones.

Partiendo de la premisa según la cual *“todo concepto en el derecho es peligroso”*, es menester entender la justicia por mano propia como la administración de justicia que hacen los particulares o quienes cumplen funciones públicas, de manera “ilegítima” o no autorizada, en la cual se despliegan una serie de acciones tendientes a obtener un resultado que se considera justo o favorable para el actor. Así, tomar la justicia por mano propia en la mayoría de los casos implica usar la violencia (como medio) para obtener el fin perseguido que es el

reconocimiento de un derecho y generalmente se relaciona con la venganza o la retribución de algún daño o perjuicio que la persona ha sufrido. No obstante, si bien es cierto, no es recomendable hacer uso de dicho mecanismo ilegal, tantas veces citado y objeto del presente escrito, dicha decisión es “justificable” cuando el Estado no brinda una justicia idónea que sea propicia a las necesidades del grupo social, toda vez que *“si yo le di al Estado esa capacidad mía, propia, humana, de hacerme justicia por propia mano, de cobrar venganza, de la venganza privada, y el Estado no me da la respuesta que yo merezco, entonces, pues empiezo a hacerme justicia por propia mano”* (Islas, 2002, pág. 44).

Por otro lado, un sinónimo más que perfecto que definiría inmediatamente dicho fenómeno no es más que *ausencia estatal* e incluso *orfandad* o *abandono*, puesto que en un País donde el Estado tuviera pleno control de sus asociados, la justicia por mano propia estaría erradicada e incluso dichas prácticas serían severamente castigadas, toda vez que el único que tiene el monopolio judicial es el Estado. *“Esto es fiel reflejo de la situación general del país, donde el Estado no tiene el monopolio del poder, ni el control sobre un porcentaje considerable de la población y el territorio; ni es el único actor que determina su organización social”* (Lagos E, y otros, 2002, pág. 23).

Sin embargo, en Colombia no sólo existe el delito de forma abrupta y desmesurada, sino que además se tiene que soportar la justicia privada, que en lugar de evitar la comisión de delitos, los multiplica, pues parece ser que todos aman la justicia por mano propia, nadie espera para sacar su celular y grabar los golpes que recibe el ladrón o los linchamientos que la comunidad le da al violador; todos quieren estar en primera fila para filmar lo que sucede y lo más lamentable de todo, es que todos saben que el video pronto se hará viral en las redes sociales, porque a nadie le duele; paradójicamente todos celebran y aplauden el heroísmo del

hombre o la mujer que maltrata al que antes era victimario, más de uno grita “bien hecho”, “se lo merece”; pero que no haya confusión en esta parte, la presencia de justicia por mano propia en Colombia, no sólo es el fracaso de un Estado ausente, sino también de una educación religiosa que en un largo tiempo fue hipócrita y de una educación cívica que desde siempre ha sido inexistente. Lamentablemente debo decir que en mi país no existe la pena de muerte, pero ésta ilógicamente se practica a diario.

Origen y desarrollo del fenómeno de justicia por mano propia.

Panorama Internacional:

Se podría identificar una fecha exacta del origen humano, pero eso no incumbe a nuestro estudio, sino que lo que interesa es resaltar esos momentos por los que éste ha atravesado, iniciando desde luego con la etapa del salvajismo; con ese estado humano que Hobbes denominaría el “estado natural”. Thomas Hobbes, nacido en el año de 1588, *“profundiza el análisis de la naturaleza del hombre para justificar la celebración de un pacto social, dando vida a una persona ficticia denominada Leviatán”* (Rey Cantor, 2010, pág. 165), de esta manera, indica que los hombres son iguales por naturaleza, tanto en sus facultades corporales como mentales, pues aun cuando un hombre sea más fuerte o mejor preparado mentalmente, éste no podría alegar para sí un beneficio que otro que fuese menos fuerte o menos ágil mentalmente, no pudiese obtener también por otros medios.

No obstante a lo anterior, el escritor indica (Hobbes, 1651, pág. 223) o denota el egoísmo natural del hombre, pues aun cuando éste pueda reconocer la existencia de otro ser humano mejor, nunca creerá que éste pueda ser mejor a él mismo. La igualdad del hombre trae consigo la inseguridad, pues se advierte que *“sí dos hombres cualesquiera desean la*

misma cosa, que, sin embargo, no pueden ambos gozar, devienen enemigos; y en su camino hacia su fin (que es principalmente su propia conservación y a veces sólo su delectación) se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse” (Rey Cantor, 2010, pág. 165). El deseo de ambos rivales por alcanzar la cosa deseada, es un simple ejemplo de lo que en el estado salvaje se podía vivir a diario, pues claramente era una lucha constante de todos contra todos y en dicha guerra el vencedor siempre era el más fuerte; teniendo en cuenta que ahí no habían leyes ni mucho menos regulaciones, sino que lo que prevalecía era la guerra, era la justicia por mano propia.

De acuerdo al autor inglés, en ese estado el hombre vive en un constante miedo, pues todos los demás seres humanos son potencialmente sus enemigos, razón por la cual lo que prima es la supervivencia individual en lugar de la ayuda mutua. Es ésta la razón para que los hombres decidan salir del estado de barbarie creando un *pacto* en el que todas y cada una de las partes juren cumplirlo para que éste realmente cobre un valor social y en donde exista un poder coercitivo que haga cumplir el mismo en casos en los que muchos pasen por alto sus normas. *“Pero en un estado civil, donde hay un poder establecido para obligar a aquellos que de otra forma violarían su palabra, aquel temor no es ya razonable, y por esa causa, aquel que debe a tenor del pacto cumplir primero, está obligado a hacerlo”* (Rey Cantor, 2010, pág. 235).

Teorías contractualistas de la creación del Estado, tales como la de John Locke o Jean Jacques Rousseau hicieron que esa vida salvaje que el hombre llevaba tuviera una historia lógica y absolutamente real. Sin embargo, éste es tan sólo el inicio humano, toda vez que más adelante se empezaron a crear leyes que regulaban su propio comportamiento, porque la experiencia había demostrado que la razón sólo le alcanzaba para hacer el mal a otros. La

Ley del Tali3n, conocida como aquella que delimit3 la justicia desproporcionada y las represalias absolutamente ilimitadas, se definía con la fórmula “ojo por ojo y diente por diente” y podría ser citada como la primera que autoriz3 la justicia social y la defini3 como legítima. Ésta, permiti3 que la víctima o sus parientes cercanos persiguieran al ofensor para reparar la ofensa recibida, de manera que sí alguien hería a otro, también iba a ser herido; sí alguien asesinaba, seguramente iba a ser asesinado; sí alguien hurtaba, otros le hurtarían sus bienes también.

Hasta ese momento, la ley era absolutamente fácil en su aplicación, sin embargo como todo en el derecho, empezaron a presentarse casos difíciles de fallar, en donde la desproporcionalidad era completamente desbordada, a tal punto de “pecar por exceso o por defecto”. Me refiero a casos en los que tal vez quien hurtaba era extremadamente pobre y por ende no tenía nada que le pudiesen hurtar, o en el otro plano, casos en los que quien generaba el perjuicio era castigado tan duramente que pagaba su error con la muerte. Para ese momento, el hombre aún era un lobo para el hombre (Hobbes, 1651, pág. XIII) y por ende, vivía en una guerra permanente, en donde pese a la existencia de una ley, la justicia la debía tomar cada uno conforme a sus necesidades, confirmando que la justicia por mano propia desde siempre ha existido, de manera que no es nuevo que el hombre desesperadamente acuda a cualquier medio para solucionar un conflicto u obtener lo que quiere, pues históricamente ésta ha sido su fórmula de supervivencia, ha sido lo que él ha conocido como “justicia”. *“Al haber libertad natural, lo que imperaba era la ley del más fuerte: quien podía usar mejor esas libertades o potencialidades naturales, terminaba oprimiendo a quien era más débil en esa vida social. Y entonces se generaba la venganza, la justicia por propia mano, el hacerse justicia a sí mismo”*. (Martínez Bullé, 2002, pág. 56)

Luego de lo anterior, parece ser que el hombre más que por gusto, decide por simple necesidad donar parte de su voluntad y libertad a un ente artificial creado que tendría como función implantar el orden y la justicia; es ahí cuando surge el Estado social, en donde lo que primaría no sería la libertad ilimitada, sino la libertad controlada en donde los derechos de cada quien llegarían hasta donde empiezan los de los demás. No es por lo tanto fuera de lugar acudir al contrato social de Rousseau, que describe una decisión voluntaria del hombre de someterse a una ley que ellos mismos han creado, es tal como dicho autor lo dice *“una forma de asociación (...) por la que cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sin embargo, más que a él mismo, y permanezca tan libre como antes”* (Rousseau, 1999, pág. Cap. VI).

Así pues, dicha alienación voluntaria, corresponderá a la descripción que Jean-Jacques dará acerca de la creación del Estado, un ente creado por todos y para todos, en donde si bien habrá un representante común, el Estado lo conformarán todos, situación que da no sólo origen a una sociedad sino a una verdadera civilización. No es por ende adecuado pensar que al Estado se le salió de las manos sus asociados, porque no es que el primero haya creado a los últimos, sino que por el contrario los últimos son el primero. *“Las diferencias a este respecto entre Hobbes, por un lado, y Locke y Rousseau, por el otro, son enormes. Sin embargo, es común a todos ellos la idea de que la opción de abandonar el estado natural para construir una sociedad civil y unos Estados modernos es una opción radical e irreversible (...) El contrato social es la metáfora fundadora de la racionalidad social y política de la modernidad occidental. Sus criterios de inclusión/exclusión fundamentan la legitimidad de la contractualización de las interacciones económicas, políticas, sociales y culturales”* (Boaventura & García Villegas, 2001., págs. 12-13).

Evidentemente ese contrato social que tan abiertamente proclamamos, es simplemente una necesidad teórica que se creó para darle explicación a la importancia que recobró la verdadera convivencia en sociedad. De manera que no es tan descabellado pensar en aquellos días en los que muy de mañana toda la sociedad decidió por fin dejar atrás la guerra y empezar a formar una verdadera civilización, no obstante, no es que todos hayan decidido firmar tal pacto, sino que (siendo ello lo más importante), todos decidieron llevarlo a cabo (Martínez Bullé, 2002, pág. 57).

La formación del Estado, tal como se describió en párrafos precedentes, implica con toda seguridad, la erradicación y completa supresión del fenómeno de justicia por mano propia, porque los ciudadanos creando un Estado que se ocupe de sus conflictos, poco y nada tendrían que ver con la administración de justicia, sin embargo al avanzar en el tiempo, nos damos cuenta que se presentarán momentos apremiantes, en donde los ciudadanos se verán obligados a pronunciarse en contra de una mala administración y en donde el pueblo organizado tomará verdaderamente la justicia por su propia mano y preferirá sin lugar a dudas la denominada justicia privada.

Muestra de ello, no pueden ser más que las grandes revoluciones que han surgido y de las cuales aún hoy se tiene memoria. Las injusticias, han sido el motor para que el hombre opte por tomar la justicia por su cuenta, en medio de un acto desesperado y queriendo alcanzar el reconocimiento de algunos derechos e incluso el respeto mínimo de la condición humana, el hombre intranquilo ha buscado por todos los medios hacerle ver a los poderosos que el Gobierno le pertenece al pueblo y que por lo tanto las normas las da él. En este punto, es claro que *“los derechos humanos surgen, evidentemente, desde que hay hombres en la tierra, desde los primeros reclamos de los seres humanos porque se respetara su dignidad,*

por evitar abusos por parte de la autoridad (...) porque todos los seres humanos tenemos un sentimiento natural de justicia (...) razón por la cual, los derechos humanos se inventan con la caída o terminación del absolutismo como modelo de Estado y la aparición del Estado Liberal” (Martínez Bullé, 2002, pág. 54).

De éste modo, no queda de más recordar como parte del origen del fenómeno al cual nos referimos las muchas revoluciones emprendidas por un pueblo oprimido y encadenado a las ilegalidades cometidas en su contra, tales como la revolución americana en 1775, la revolución rusa en 1917, la revolución de noviembre en 1918, la revolución china en 1927, la revolución cubana en 1959; y cómo no hacer alusión a la revolución magna forjada en 1789 en Francia, en donde queriendo alcanzar principios claves como la igualdad, libertad y seguridad jurídica, se revela un pueblo (en principio) sumiso y cansado de una monarquía opulenta y apática a sus necesidades, toma la justicia por su propia mano y sangrientamente hace respetar sus derechos, plasmados días después en la famosa **Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano**, del 26 de agosto de 1789. Éste documento que por demás ya estaba plenamente elaborado por los grandes pensadores de la época, cobra una importancia enorme no sólo en Francia, sino a nivel mundial, pues consagra las bases de una verdadera sociedad llena de civilidad, respeto y tolerancia, con tan solo diecisiete (17) artículos; de ésta manera, apartes como los que se verán a continuación más allá de ser verdaderos versos de poesía, resultan siendo lo mínimo, lo simple, pero lo verdaderamente fundamental, pues son condiciones sine qua non un Estado pueda funcionar:

Artículo 1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2: La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 4: La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.

Artículo 6: La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo público, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Artículo 16: Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución. (...) Entre otros. (Representantes del Pueblo Francés, 1789)

Pocos años atrás el Pueblo estadounidense, desesperado también y en pro de la independencia de su país azotado por los ingleses, ya había expedido la **Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia (1776)**, la cual en principio cobijaba a ese pequeño Estado, pero que más adelante se hizo extensivo para la Unión Perpetua de los Estados Unidos de América. En dicho documento, ya se había determinado: *“Que el gobierno es instituido, o debería serlo, para el común provecho, protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad: que de todas las formas y modos de gobierno, es el mejor, el más capaz*

de producir el mayor grado de felicidad y seguridad, y el que está más eficazmente asegurado contra el peligro de un mal Gobierno; y que cuando un Gobierno resulte inadecuado o es contrario a estos principios, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público” (Representantes del Buen Pueblo de Virginia., 1776, pág. Art. III)

Napoleón Bonaparte diría en su momento: *“aquél que no conoce la historia, está condenado a repetirla”* y claramente el ser humano es la excepción a dicha afirmación, pues es un ser amnésico que no sólo repite su historia, sino que marca precedentes peores, pues lamentablemente por muy culto que sea el hombre, éste siempre ha contado con la terrible “virtud” de autodestruirse. En este sentido, aun cuando la raza humana ha atravesado por episodios como los antes descritos, que le han dejado como resultado obras magnas como las que transcribimos, continúa asesinándose, como sí se volviera a tener la oportunidad de vivir en éste mundo o de compartir con el otro.

Claramente no se mencionan a profundidad otros miles de momentos que solo le han dejado amargos recuerdos a la humanidad, como los de la mal llamada “santa” inquisición, en donde durante la edad media la Iglesia Católica decidió tomar la justicia por su propia cuenta amparada en una ley divina que no existía y que nadie le había otorgado, pues aun cuando existían tribunales eclesiásticos, éstos no respetaban derechos humanos, ni mucho menos garantías mínimas del hombre y se daban a (verbigracia) obtener la confesión a través de la tortura o de los juicios de Dios. Qué hipócrita sociedad, llena de prejuicios y lamentos que vive alrededor de una doble moral en donde a diario se condena indiscriminada y públicamente a alguien que ha cometido pecado, aun sabiendo que quienes lo condenan, en

su corazón practican actos mucho más perversos y reprochables. ¿Con qué autoridad la Iglesia Católica en su momento predicaba amor hacia el prójimo cuando ella misma los asesinaba por la simple decisión de no compartir sus ideales, propuestas o formas de pensar?

Al respecto, John Locke en un escrito monumental y con más indignación que dolor, escribió: *“El Evangelio declara frecuentemente que los verdaderos discípulos de Cristo tienen que sufrir persecuciones; pero que la Iglesia de Cristo deba perseguir a otros y forzarlos con el fuego y la espada a abrazar su fe y doctrina, no lo he encontrado todavía en ninguno de los libros del Nuevo Testamento”* (Locke, 1689, pág. 16). Claramente, Locke, afrontaba el evangelio tal como Cristo lo enseñó, sin obligaciones, sin torturas, sin injusticias, alejado de cualquier ambición o pretensión terrenal y banal; por el contrario, recordó esa cristiandad que predica y practica la caridad, la humildad y la tolerancia, en donde desde los pulpitos se grita respeto y desde la vida diaria se aplica el amor al prójimo en su más grande expresión que es respetar su diferencia y no interferir en ella negativamente hasta herirlo o dañarlo.

“No es suficiente que los hombres eclesiásticos se abstengan de la violencia, de la rapiña y de toda clase de persecuciones. Quien pretenda ser sucesor de los apóstoles y asuma el oficio de enseñar, está obligado a advertir a sus oyentes acerca de los deberes de paz y buena voluntad hacia los hombres, tanto los equivocados como los ortodoxos, tanto aquellos que difieren de ellos en la fe y en el culto como aquellos con quienes están de acuerdo” (Ibíd., Pág. 16).

Cuán difícil ha sido para toda la humanidad seguir los principios que desde John Locke se pregonaban, qué complicado ha sido para el hombre aceptar y amar al otro como si

fuese él mismo, porque lamentablemente años después hacia septiembre de 1939, el mundo sería testigo de otra de las mayores desgracias y depravaciones humanas, pues hasta el día de hoy, será inolvidable el **Holocausto Nazi**, en el que el gobierno Alemán, dirigido por el político y militar Adolf Hittler, decide tomar la justicia por su propia mano y de acuerdo a ideologías infundadas, adoctrinan a la comunidad y deciden inhumanamente exterminar a todo el grupo judío, con la simple justificación de la inexistente raza aria y desde luego superior. Es claro que todo lo que sufrió el pueblo judío fue una absoluta injusticia, pero se denota que tomar la justicia por mano propia, no sólo hace referencia a aquellos episodios que persiguen fines legítimos o beneficiosos, sino que a menudo ocurre cuando las personas e incluso las mismas autoridades estatales toman la justicia y la administran de manera ilegítima, en pro de ideales y pensamientos individuales que sí bien pueda que beneficien a unos pocos, por lo general, perjudican al grupo social.

En medio de una sociedad que no ha hecho más que tomar la justicia por mano propia, surge como incógnita, sí ¿verdaderamente el contrato social expuesto por Hobbes, Locke y Rousseau existe?, es decir, ¿ciertamente la sociedad alguna vez salió del salvajismo y permitió que un ente administrara justicia por ella? *“El contrato social simbólico restringido parece haber agotado su eficacia política en la medida en que en las representaciones ciudadanas son cada vez más visibles el hecho de que este contrato sobre vuela por encima de una sociedad en gran medida des-contractualizada”* (Boaventura & García Villegas, 2001., pág. 83). Increíblemente parece que ese momento histórico en el que todos los seres humanos deciden por fin dejar de vivir como animales y pasar a un orden social estructurado por un Estado que además de brindar seguridad, controle los conflictos justamente, nunca existió, nunca se vivió y lo que es peor se entraña en simples discursos retóricos que

demuestran una humanidad poco organizada y más bien desordenada y envuelta en un verdadero caos.

Panorama Nacional:

Cualquiera pensaría que con todo lo mencionado, hoy por hoy ya no existen eventos trágicos de injusticias y de violencia, sin embargo, la historia se repite y de los errores nadie aprende; de manera que sí se diera una mirada no internacional sino mucho más centrada en Colombia, se tendría que decir que el fenómeno de justicia por mano propia es el diario vivir de todos los ciudadanos y que por lo tanto, el desarrollo del mismo en nuestro país es palpable y absolutamente evidente. Tan es así que increíblemente el origen de la violencia y de la justicia por mano propia en nuestro país data desde la misma fecha de independencia, el 20 de julio de 1810, donde de acuerdo a los registros históricos, faltando pocos minutos para las doce del día, el señor Luis Rubio (encargado de la misión en lugar de Antonio Morales, quien por su carácter fuerte fue descartado), entra al almacén del español José González Llorente y le pide prestado un adorno para la mesa del banquete que se le brindaría a Antonio de Villavicencio, que acabaría de llegar de España, autorizado por el rey para restablecer en América la autoridad amenazada por varias sublevaciones. Valga la pena decir que *“la verdad no se sabe con certeza, ni se sabrá nunca, si se trataba de un florero o de otra clase de objeto. Diversos testigos sostienen que Rubio le solicitó a Llorente que le prestara “un adorno para la mesa”. La confusión es tan grande que, según otros testimonios, quien pidió el préstamo fue Lorenzo Marroquín y hay quienes sostienen que fue Pataleón Santamaría. Sin embargo, nada de eso es extraño, porque así acabará escribiéndose en el futuro la historia de Colombia: con rumores, imprecisiones, vaguedades, que son un obstáculo para reconstruir la verdad”* (Gossaín, 2017).

La historia rememora que Morales permaneció atento, en la puerta de la calle, esperando a Rubio, a quien el español José González Llorente le respondió que no podía prestarle un adorno porque había tenido malas experiencias con ello y se lo devolvían siempre deteriorado. La leyenda sostiene que Llorente, le respondió con altanería y palabras soeces. Al parecer, el adorno – que, de acuerdo al dicho de muchos, era un florero- fue el que desató la trifulca, pues minutos después (tal como se había acordado), el “sabio” Francisco José de Caldas, pasa en frente del lugar de los hechos, saluda a Llorente y tal como estaba previsto, Morales le dice a gritos que no lo salude porque acababa de insultar a los criollos. Fue así como se dio inicio a la violencia y a la guerra; y desde ese día empiezan a surgir constituciones para cada momento histórico que germinaba en el País. Así pues, en 1811 se expide la Constitución del Estado Libre del Socorro, en 1830 surge una nueva Constitución en Ocaña; en 1832, bajo el régimen presidencialista, el Congreso nombra como Presidente a Francisco de Paula Santander y se expide una nueva carta política en donde el País recibe el nombre de Estado de Nueva Granada. Más adelante, en 1843 en el auge de la guerra civil, entre conservadores y liberales, fue elegido presidente Pedro Alcántara Herrán, quien después de concluida la guerra, elaboró una nueva Constitución en la que se fortaleció el poder del Presidente; así pues, más adelante en 1853, surge una nueva Constitución Liberal, en la que se dio inicio al federalismo; en 1858, el conservador Mariano Ospina Rodríguez, sancionó una nueva Constitución, en la que el país se llamó Confederación Granadina y se legalizó el sistema federalista. Hacia el año de 1863, en la Convención de Rionegro, se elabora una nueva Constitución que hizo un gran énfasis en el sistema federal, razón por la cual el nombre de Confederación Granadina fue cambiado por el de Estados Unidos de Colombia.

Los numerosos conflictos armados entre Liberales y Conservadores por el poder, fueron la muestra exacta de un País que desde siempre ha estado dividido y que ha usado el fenómeno objeto de estudio como primera y única herramienta para combatir la diferencia de pensamiento o de creencias, porque la historia demuestra, que en Colombia la diversidad, no se promueve, sino que se erradica con violencia y matanzas.

Cada guerra representaba una pérdida de derechos inimaginable, pues por un lado la dignidad humana se desprestigiaba y por el otro, la población toleraba las vulneraciones o las reprimía con más violencia. Ya en el año de 1886, se redactó una nueva constitución, impulsada por los Conservadores y precedida por el Presidente Rafael Núñez, en la cual se transforma el sistema federal y el nombre de Los Estados Unidos de Colombia, por un Estado Centralista y por el nombre de la República de Colombia, constitución que si bien es cierto, podía dar solución y evitar los conflictos, no lo logró y por ello, guerras como la que inició el 17 de Octubre de 1899 y que permaneció durante aproximadamente tres (3) años, dejaron un sinsabor de tristeza y decepción, pues lo cierto es que luego de cada guerra civil, Colombia no sólo perdía ciudadanos – verbigracia, tal como ocurrió en la guerra de los mil días previamente citada, en donde cerca de cien mil colombianos entregaron sus vidas, es decir, el 2.5% de la población de aquella época-, sino que además se empobrecía y auto destruía toda su industria.

Las guerras entre los partidos políticos, hicieron que surgiera más adelante, el **Frente Nacional**, el cual tuvo como fin la alternación del poder entre Conservadores y Liberales cada cuatro (4) años desde 1958, hasta 1974. Sin embargo, éste acuerdo dejó como resultado la creación de grupos insurgentes que, al estar privados de una equitativa oportunidad de participación política, vieron la vía armada como el único modo de optar por el poder. Fue

así, como hacia el año de 1964, se crean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-, que en principio, eran grupos de campesinos alzados en armas para defender sus tierras en las llamadas “repúblicas independientes”, pero más adelante, esto es, hacia los años de 1970, se consolidó un movimiento guerrillero que contaba con una propuesta política. En 1965, en el departamento de Santander, surge el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, como respuesta a varios cambios políticos y con la participación de algunos miembros del Movimiento Revolucionario Liberal –MRL-, liderado por Alfonso López Michelsen. De igual modo, para el año de 1968, se funda el Ejército Popular de Liberación – EPL-, como respuesta a un fuerte conflicto social creado por compañías extranjeras en la zona bananera de Urabá. Y el 19 de abril de 1970, surge el M19, justamente para las elecciones presidenciales del periodo de 1970 a 1974. En las mismas, se tuvo como candidato del Frente Nacional a Misael Pastrana Borrero y de la Alianza Nacional Popular, al señor Gustavo Rojas Pinilla. Tras la victoria de Pastrana, muchos alegaron fraude electoral y como apoyo a dicha inconformidad surge el grupo insurgente Movimiento 19.

Con el surgimiento de dichos grupos en Colombia, no sólo se ratificó la violencia que ha sido permanente y constante en toda la historia del país, sino que, además, se fortaleció el fenómeno de justicia por mano propia que ha marcado al Estado Colombiano, sobre todo con trágicos episodios que han durado por décadas. Valga la pena mencionar que, en el año de 1990, la guerrilla del M19, firmó un tratado de paz durante el gobierno de Virgilio Barco y constituyeron el movimiento político Alianza Democrática M-19. En el año de 1991, gran parte de los miembros del Ejército Popular de Liberación, se desmovilizaron tras la firma de un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria y conformaron un movimiento político denominado Esperanza, Paz y Libertad. De igual modo, en el año de 1994, tras el mismo

gobierno de César Gaviria, una fracción del ELN decidió desmovilizarse. No obstante, como es evidente, dichos acuerdos de paz, no fueron suficientes para detener el conflicto armado que como se reitera, por décadas enteras azotó a nuestro país despiadadamente. Tristemente, perviven aún movimientos al margen de la ley, tales como los paramilitares, las Bacrim o incluso el mismo ELN, que aunque en la actualidad está intentando un diálogo con el Gobierno para lograr un acuerdo de paz, no deja de causar daños irreparables en la sociedad.

Los grupos insurgentes no sólo son el resultado de las muchas inconformidades políticas, sino que son el fruto de una degradación social extrema, que proviene del interior y que inicia en la descomposición familiar y en el desconocimiento de principios y valores básicos tales como respeto, tolerancia y amor. Siendo el afán de cada Gobierno, lograr la paz y erradicar la justicia por mano propia, evitando así la congestión judicial, recientemente, esto es, el pasado 24 de noviembre del año 2016, se firmó en la Habana Cuba un “acuerdo de paz” entre el Estado colombiano y las FARC, grupo insurgente que desencadenó los mayores conflictos en amplias zonas del territorio colombiano y que fue fruto de la amplia desestabilización estatal. No obstante, de acuerdo con el incremento de violencia en Colombia, lo cual se ha reflejado y se reflejará en lo corrido de éste escrito, es claro que, dicho acuerdo representa en la actualidad un triunfo tardío, con una esperanza mínima de que la violencia en Colombia se erradique definitivamente, puesto que como se ha reiterado incansablemente, éste País necesita mucho más que una transformación meramente legislativa y formal, a través de la implementación de acuerdos de paz, anhelando con urgencia, un cambio verdaderamente sustancial y estructural, en donde se remuevan las fibras familiares, educativas, sociales, políticas y económicas.

En la actualidad, la administración de justicia ilegítima se denota incluso en las operaciones militares de falsos positivos, en las que presuntamente campesinos eran asesinados bajo el pretexto de pertenecer o haber pertenecido a grupos al margen de la ley; pero no sólo en ello, sino también se denota, en la presencia de una ciudadanía prevenida y armada; e inclusive, el sólo hecho de que en nuestro país existan grupos delincuenciales que ante la falta de oportunidades y bajo unos ideales decidan tomar la justicia por su cuenta, ello ya hace evidente a un Estado que se convierte en un observador pasivo de la violencia e intolerancia que a diario se vive, frente a una ciudadanía incontrolable, que demuestra desconfianza en el Estado y concretamente en el sistema judicial, porque tristemente, *"La construcción institucional de los problemas en Colombia, opera como un abandono del problema social como tal, por medio de saltos de escala discursivos"* (Boaventura & García Villegas, 2001., pág. 75)

Para finalizar, bastará con encender el televisor, para darse cuenta que la intolerancia cada día aumenta y que el colombiano promedio paga mal por mal, tomando por inercia la justicia por mano propia. Son los medios de comunicación y la observación diaria, la que nos demuestra que el fenómeno de justicia por mano propia se ha desarrollado incontrolablemente en nuestro país, puesto que continuamente, tenemos que ser testigos de asesinatos injustificados, de los llamados "ajustes de cuenta" que no son más ni menos que la materialización de lo que se discute en la presente monografía.

Desconfianza ciudadana en el Sistema Judicial Colombiano.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas, realizada en el año 2013 por el Ministerio de Justicia con apoyo del Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Bogotá, según la cual se midió el nivel de acceso y confianza que los ciudadanos tenían en

la justicia, en un estudio realizado en catorce (14) ciudades del país y con un número aproximado de 6.000 encuestas, se determinó que siete (7) de cada diez (10) encuestados afirman que la justicia en Colombia es “lenta” o “muy lenta”; y en cuanto a la confianza, se obtuvo como resultado que el 51,9% de los encuestados no habían hecho nada después de presentarse un conflicto o desacuerdo por desconfianza en el sistema. En ese sentido, la pregunta inmediata que surge es si los ciudadanos decidieron no hacer nada frente al conflicto, ¿De qué manera lo solucionaron? Y frente a ello surgen dos posibles respuestas, la primera, simplemente desertando del problema, en pocas palabras “dejando así” o, la segunda respuesta, tomando la justicia por mano propia, que por lo general, es casi siempre lo que sucede.

Ahora bien, ¿por qué esa preferencia ciudadana de tomar la justicia por mano propia antes que acudir al sistema judicial?, ¿de dónde viene ese pensamiento que se funda en plena desconfianza y según el cual “nada pasa”?

Pues bien, a través de un estudio realizado por Rodrigo Losada Lora y Napoleón Franco, patrocinado por la Fundación Unidad para el progreso (adelantado en 1986), en donde se investigó la opinión de los colombianos sobre sus principales instituciones, se logró determinar que:

“el panorama de justicia es aún más preocupante, no sólo por la inoperancia de la misma, sino por la pérdida de fe de la comunidad en ella (...) y se encontraron los siguientes resultados con relación a la justicia (...) A la primera pregunta: “¿Cree usted que algunos jueces en Colombia se dejan comprar?”, el 88% contestó SÍ, el 6% NO, y el 6% no supo qué responder. A la segunda pregunta, formulada a quienes habían contestado afirmativamente

a la primera pregunta, “Y de cada 10 jueces, ¿cuántos cree usted que se dejan comprar?”, la respuesta promedio fue del 5.5, es decir más de la mitad. A la pregunta: “Qué cree usted: en Colombia los jueces generalmente aplican la ley por igual a todos los ciudadanos, ¿SI o NO?”, la respuesta fue: NO, el 85.4%, SI el 11.5% y no supieron qué responder, el 3.1%. A la cuarta pregunta: “De 1 a 10, donde 10 es lo mejor y 1 es lo peor, ¿Qué tanto confía usted en los jueces y la justicia en Colombia?”, la respuesta fue de 4.7%, es decir, por debajo de la mitad” (Cámara de comercio de Bogotá., 1990., pág. 3).

La mentalidad de los colombianos hace más de veinte (20) años, en lugar de mejorar, ha empeorado en cuanto a desconfianza en el sistema judicial se refiere, es así, como en mayo del año 2013, la Vanguardia Liberal, destacó que “la última encuesta de Colombia, realizada para varios medios de comunicación, reveló que la desconfianza en la justicia en general es del 71 por ciento y, específicamente de las cortes, es del 65 por ciento. La cifra alarma aún más si se tiene en cuenta que la rama judicial quedó segunda, después de un 75 por ciento de desconfianza en el congreso de la república” (Vanguardia Liberal, 2013). Así mismo, para septiembre del año 2014, el periódico El Tiempo, reveló los resultados de la encuesta Gallup y comentó que “a la luz de los resultados de Gallup, el sistema judicial lleva mucho tiempo saliendo mal librado. La novedad esta vez es que su imagen negativa llegó al 79 por ciento, la más alta que ha tenido (...) hay una politización de las funciones de la rama judicial, y eso le resta imagen y legitimidad” (El Tiempo, 2014) .

Igualmente, el DANE, estableció que para el año 2015, la criminalidad oculta en Colombia ascendió al 76% pues de cada 100 delitos cometidos, los colombianos solo denuncian 24 delitos de 100 (Departamento Nacional Administrativo de Estadística, 2017). Al respecto, es evidente que la tendencia social de NO denunciar y NO acudir a las

autoridades, es permanente y continua, pues tal como lo menciona el actual Fiscal General de la Nación, Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, en una manifestación pública, registrada por noticias RCN el primero (1) de agosto del año 2016, “ *la impunidad de los diferentes delitos en el país ronda el 99%, especialmente porque las víctimas no salen a denunciar*”, afirmando de igual modo que en índices internacionales, para el año 2015, Colombia obtuvo “*el deshonroso tercer lugar de impunidad, después de Filipinas y México (...) situación que se agrava, si se tiene en cuenta que por la degradación del sistema y los problemas de acceso a la justicia, los ciudadanos no cumplen con su deber de denunciar*” (Noticias RCN., 2016)

Para el 31 de agosto del año 2017, la misma encuesta bimestral de Gallup, reveló los altos índices de desconfianza ciudadana en el sistema judicial y la desfavorabilidad en la imagen de los órganos judiciales. Así pues, en un artículo publicado por el mismo periódico El Tiempo, se concluyó que: “*los ciudadanos creen menos en la justicia hoy*”, se reflejó que “*La Corte Suprema logró un récord de imagen negativa en la medición. El 72 por ciento de los encuestados, 13 puntos más que en junio pasado, aseguró tener una imagen desfavorable de ese tribunal. (...) Para la Corte Constitucional, la imagen negativa llegó al 63 por ciento (...) y el 83 por ciento de los encuestados en agosto, tienen una imagen desfavorable del sistema judicial colombiano*” (El Tiempo, 2017)

La imagen cortante y radical que la ciudadanía tiene frente a la idea de acudir a un proceso judicial, es que los aparatos judiciales son ineficientes o que el proceso en sí, le va a generar muchos gastos y pocos resultados. Hoy pocos confían en los fallos judiciales y muchos se muestran incrédulos ante el resultado final de una sentencia porque existe a nivel general una **inseguridad jurídica** inmensa. Verbigracia, los fallos contradictorios acerca de un mismo tema, aunado al constante y coloquialmente denominado “choque de trenes”, crean

en la ciudadanía una absoluta burla en el sistema judicial, es decir que la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de cierre en la jurisdicción ordinaria, profiera un fallo en el que determine una cosa y luego por vía de tutela, la Corte Constitucional, como tribunal de cierre en la jurisdicción constitucional, revoque el fallo para que en su lugar se haga algo completamente diferente, genera en la sociedad una incertidumbre y un dilema jurídico que refuerza la desconfianza ciudadana en el sistema judicial, pues una cosa es que se contradigan los jueces de primera y segunda instancia (que es lo que comúnmente sucede), pero otra muy distinta es que dos (2) tribunales de cierre apoyen posturas totalmente distintas, puesto que la sociedad receptora de los fallos contradictorios queda en el limbo y en un purgatorio constante.

Un claro ejemplo de lo anterior, es el límite interpuesto por la Corte Constitucional, bajo la sentencia (C-258, 2013) a las megapensiones de los parlamentarios, magistrados, fiscales, procuradores y algunos funcionarios de las regiones, aduciendo que ninguna pensión en Colombia podrá superar los 25 salarios mínimos. A partir de dicho fallo, las pensiones a los altos mandatarios, empezaron a ser reajustadas por administradoras como Colpensiones y Fonprecom, y dentro de dichos ajustes, se le disminuyó la pensión de sobrevivientes a la señora Lina Ramírez, viuda del expresidente de la Cámara de Representantes Giovanni Lamboglia, quien inmediatamente decidió interponer una acción de tutela, solicitando que su mesada fuera devuelta a su tope inicial y que además se le pagara una prima especial de servicios a la que tienen derecho solo los congresistas en ejercicio, por 7 millones 898 mil 445 pesos.

La tutela que llegó a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, prosperó y en el fallo se ordenó a Fonprecom pagar la megapensión de Ramírez por encima de los topes

ordenados en la sentencia C-258 de 2013, pues se consideró que el reajuste automático de las pensiones vulneraba el derecho al debido proceso. Dicho fallo, fue seleccionado en sede de revisión por la Corte Constitucional y con ponencia de la magistrada Myriam Ávila, la Corte, en un claro ejemplo de choque de trenes, decide reversar la orden de la Corte Suprema de Justicia, y recordar que los tope a pensiones millonarias es cosa juzgada y que por lo tanto no es controvertible. Además de advertir que el reajuste al tope de las megapensiones deberá seguir siendo automático sin que ello vulnere el debido proceso.

Por otro lado, luego de un sistema escritural que lo único que dejó fue papeles para archivar y mares enteros de expedientes en los despachos judiciales, no está de menos mencionar, que muchos de los ciudadanos no acuden al sistema judicial porque consideran que éste es lento y demorado; y ello, desde luego puede generar para quienes acuden a la jurisdicción un costo alto, por honorarios de abogados y por todo lo que puede valer un proceso judicial. Así pues, el sistema escritural, se encargó de construir el pensamiento de “justicia demorada”, que al final termina siendo justicia denegada y trajo como resultado el aumento de la incredulidad y de la preferencia ciudadana de tomar la justicia por mano propia, junto con la renuncia tácita al sistema judicial, puesto que antes de ser masoquistas al someterse a un largo y aburridor proceso, lo que se prefiere es la solución inmediata, cueste el precio que cueste.

Ante las discrepancias de juzgados, cortes y exceso de expedientes, entre otras vicisitudes, surgen nuevas normas, que al menos en el papel pretenden lograr que haya justicia y con ello evitar los conflictos y las vías de hecho. Tal es el caso de las leyes 906 del año 2004 y 1564 del año 2012, con las que se esperaba que la oralidad, la concentración, la prontitud, la inmediatez, la publicidad en las decisiones y procesos, modificaran el pensar

popular de una justicia ineficaz y con ello se demostrara a los ciudadanos que el principio de celeridad sí existe y que los procesos podían ser resueltos en una, máximo dos audiencias, teniendo al juez como verdadero director y facilitador del proceso. Sin embargo, ello no ha ocurrido y por tal razón el objeto de éste trabajo, pues preocupa la persistencia en la congestión judicial y en la toma de justicia por propia mano.

Las estadísticas muestran que infortunadamente la justicia, no poseen credibilidad ante la ciudadanía, porque a pesar del cúmulo de normas que posee el País, la protección a los derechos en realidad es mínima. Los ciudadanos en coma por el conflicto, deben ser curados con la inyección de justicia, a la cual se le debe agregar un antídoto de prontitud, celeridad, eficacia y confianza, pues solo así, se logrará erradicar definitivamente las vías de hecho.

Por otro lado, la desconfianza en el sistema judicial aumenta, cuando existe una gran población en el país que no conoce o simplemente no sabe qué trámite seguir ante ciertos eventos o conflictos que se presentan a diario. Pues bien, a pesar de que la ignorancia de la ley no es excusa para nadie, muchas veces los ciudadanos se abstienen de acudir al sistema judicial por simple desinformación y por la incapacidad de los funcionarios judiciales para brindar una orientación adecuada y respetuosa a la ciudadanía. ¿Cómo interponer una denuncia? ¿Cómo presentar una querella? ¿Ante quién se puede hacer una conciliación? ¿Cómo hacer una tutela? ¿Ante quién radicar un derecho de petición? ¿Qué hacer en el evento de (...)? Son algunos de los interrogantes que a diario surgen entre los ciudadanos y ello es apenas normal, porque no todos son abogados y por lo tanto no todos tendrían por qué saber el trámite a seguir ante (desde lo más simple) un accidente de tránsito, hasta (lo más complejo) un homicidio o un acceso carnal violento.

“Resulta pertinente en este momento dar una mirada a estudios recientes de la Corporación Excelencia a la Justicia y a los resultados de la Segunda encuesta de profundización. Jueces, litigantes y partes procesales realizada por el Instituto SER de Investigación a instancias del Consejo Superior de la Judicatura”, en el cual se refleja que el 69% de las personas no acuden al sistema judicial por desconfianza en los apoderados judiciales; **el 52% por desconocimiento de los derechos; el 43,50% de la población, por falta de credibilidad en el sistema judicial**; el 42,50% por ignorancia en los trámites; el 40% por los altos costos en los honorarios; el 33,80% por demora en los procesos judiciales; el 17,30% por la precaria atención en los despachos judiciales y el 9% por la ubicación de los mismos. Ello, mezclado con la razones que se dieron con anterioridad, hacen que ante muchos conflictos, los seres humanos simplemente actúen por instintos, siendo sujetos activos: ¿Qué hacer primero?, linchar al ladrón y luego sí llamar a la policía; o siendo sujetos pasivos: ¿Qué hacer primero?, dejar así por no saber ante quién acudir, qué hacer o por simple incredulidad en el aparato judicial.

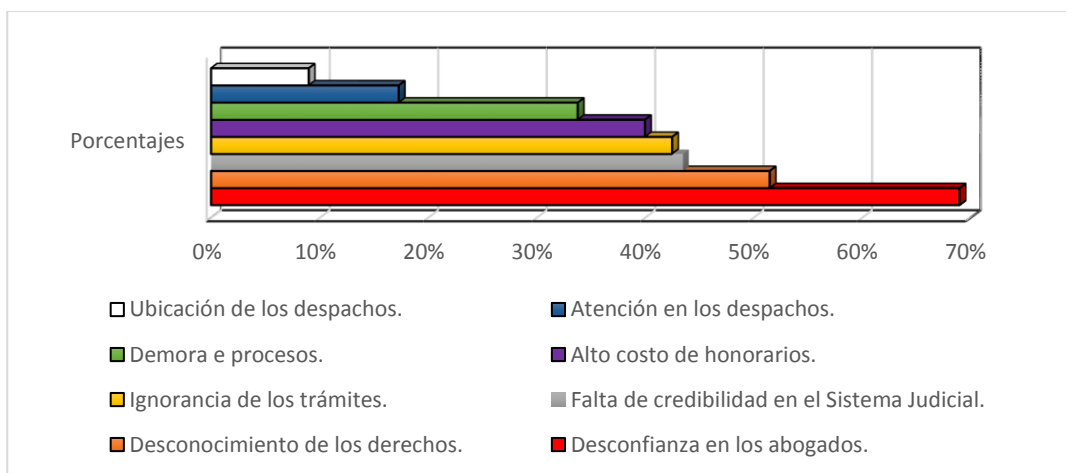


Ilustración 5 Percepción ciudadana sobre las causas que dificultan el acceso a la justicia.

Nota: Tomado de (Sarmiento Granada, 2003)

Percepción ciudadana sobre inseguridad en el País.

Aunado a la desconfianza en el sistema judicial, se encuentra la inseguridad social y la percepción de impunidad; puesto que cuando el ciudadano hace uso de la justicia por mano propia, en el fondo lo que le está diciendo al Estado, es que quiere conseguir lo que él no le proporciona y es seguridad, confianza y justicia. El hecho de que en medio de un conflicto, el Estado sea incapaz de proporcionar a sus asociados fórmulas de solución, es apoyo indirecto a que éstos busquen la respuesta de otra manera y por otros medios.

El ciudadano necesita sentirse seguro (social y jurídicamente) en medio de una sociedad con un índice de delincuencia desproporcionado; es indispensable que el colombiano crea en un Estado que hace respetar sus derechos y que en cualquier situación aparece inmediatamente para salvaguardar los intereses de sus asociados, sin embargo, ello en la vida real no pasa, pues la inseguridad es omnipresente en todo el territorio nacional y siempre hay demoras, dilaciones, injusticias y decepciones.

Un claro ejemplo de lo anterior, fue lo ocurrido el pasado 20 de octubre del año 2017, en donde el propietario de un local ubicado en el barrio Palermo de Bogotá D.C., tras escuchar ruidos en plena madrugada, decide sacar su arma de fuego y reaccionar ante la presencia de cuatro (4) delincuentes que pretendían hurtarle algunas bebidas alcohólicas y el dinero de la caja registradora de su local comercial. Su reacción, fue en efecto violenta y dejó como consecuencia el homicidio de uno de los presuntos delincuentes y las lesiones personales del otro atacante. No obstante, aun cuando la víctima, esto es, el propietario del local, hirió y asesinó a los presuntos ladrones en defensa propia, fue capturado y procesado, por el delito de porte ilegal de armas, toda vez que el arma no contaba con salvoconducto. (Noticias Caracol, 2017)

“Los riesgos están presentes en la medida en que la situación de inseguridad se encuentra in crescendo y en tanto que ni el Estado ni las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la ley logren contener los altos flujos de delincuencia y delincuentes, lo cual puede desatar a grupos privados que, llevados por la desesperación de la situación, recurran a la fuerza y a la venganza por propia mano” (Cuéllar M, 2011)

Al respecto, en una encuesta realizada en el año de 1997, tomando como muestra representantes de jefes de hogar en tres (3) ciudades colombianas, estas son, Bogotá, Medellín y Barranquilla, se pudo evidenciar el nivel de inseguridad en el que los colombianos afirman vivir y su pensamiento sobre el sistema penal específicamente. De este modo, se pudo evidenciar, que de los ciudadanos encuestados, el 55% habían sido víctimas de un atraco callejero; el 7% de un atraco en su residencia y en el trabajo; el 19% de hurto en residencia (sin que se dieran cuenta); el 8% de hurto en el trabajo y de amenazas; el 9% de lesiones personales; el 6% de hurto de carro dejado en la calle; el 5% de hurto de carro con violencia y de homicidio; el 4% de soborno y extorsión; el 3% de otro y el 2% de secuestro.



Ilustración 6 Porcentaje de Hogares que han sido víctimas de un delito.

Nota: Tomado de (Boaventura & García Villegas, 2001., pág. 523)

De igual modo, a la pregunta ¿Qué tan probable considera que lo atraquen mañana al salir de su casa?, en las tres (3) ciudades encuestadas, un 30% de la población lo consideró Muy probable; el 60% de la población lo consideró probable y tan solo el 10% de la población lo consideró nada o poco probable. Por su parte, ante la pregunta ¿Qué haría sí lo atracaran mañana al salir de casa? El 55% de los ciudadanos encuestados respondieron que preferiblemente deciden olvidarse del problema y hacer como si nada hubiese pasado; el 35% de la población encuestada, respondió que ante dicha situación promoverían una reunión con los vecinos, para solucionar la dificultad; y la minoría de los encuestados, esto es, tan solo el 10% respondieron con seguridad que acudirían a las autoridades para denunciar el hecho.

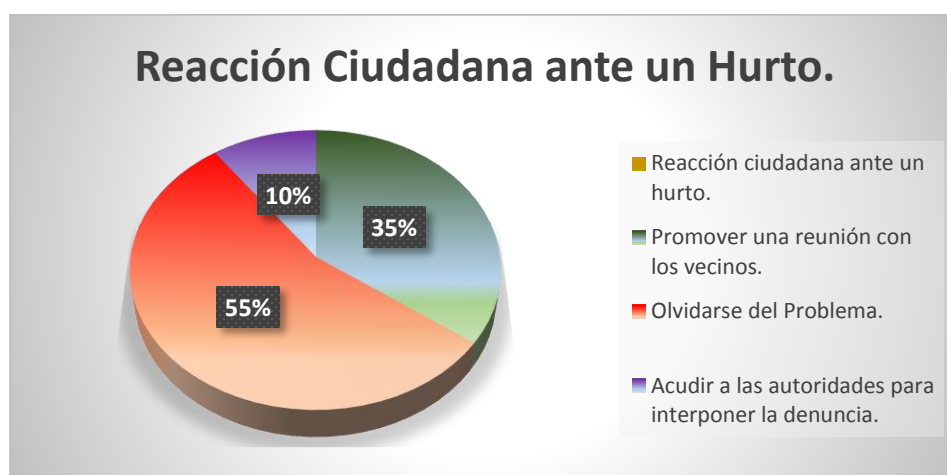


Ilustración 7 Reacción ciudadana ante un hurto.

Ahora bien, con la última Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – ECS, realizada y registrada por el DANE en 28 ciudades del país, se determinó la tasa de victimización respecto a eventos ocurridos en el año 2015, tales como hurto a residencia (a nivel hogares), hurto a personas, hurto a vehículo, involucramiento en riñas y peleas que impliquen violencia física, y extorsión o intento de extorsión. Lo anterior, arrojó como resultado que durante el año 2015, “el 18,8% de las personas de 15 años y más sufrieron por

lo menos un delito para el total de 28 ciudades”. Igualmente, al indagar sobre la percepción ciudadana sobre la inseguridad, “se encontró que para las 28 ciudades, el 62,4% de la población de 15 años y más informó sentirse inseguro en su ciudad durante el año 2015. Esta tasa fue de 61,4% en el 2014 (...) Por el sexo, el 64,3% de las mujeres de 15 años y más informaron sentirse inseguras en su ciudad, frente a un 60,2% de los hombres de 15 años y más” (Departamento Nacional Administrativo de Estadística, 2017).

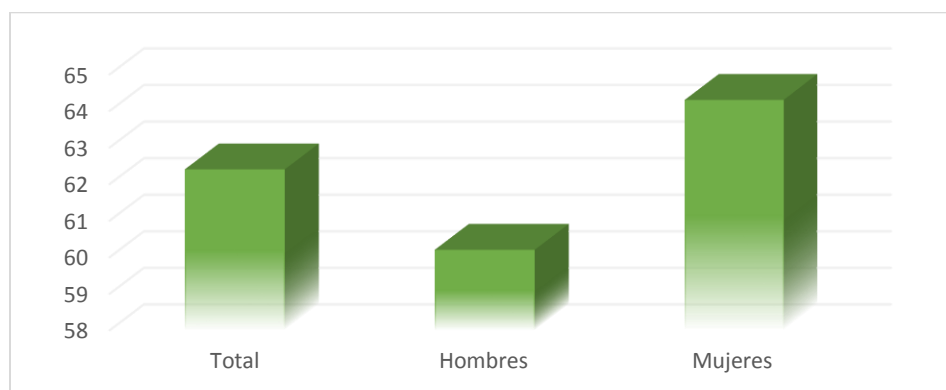


Ilustración 8 Tasa de percepción de inseguridad según el sexo.

De acuerdo a un comparativo hecho por el profesor de la Universidad Nacional y ex alcalde de la ciudad de Bogotá, Antanas Mockus en el año 2012 de las justificaciones para usar la violencia entre el promedio de América Latina, a través de encuestas realizadas a hombres jóvenes menores de veinticinco (25) años, se obtuvo como resultado que el 64% de los hombres encuestados justifican el uso de la violencia cuando se trata de defensa propia, con lo cual el objeto de este trabajo vuelve a resaltarse, pues en la mayoría de los casos en los que los ciudadanos deciden tomar la justicia por su propia mano, lo hacen con un pensamiento de legítima defensa o autoprotección.

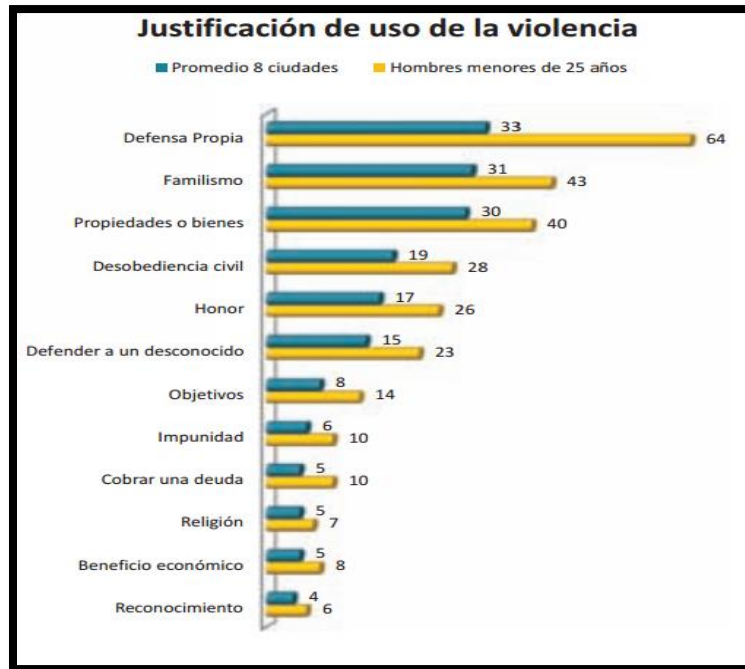


Ilustración 9 Justificación de uso de la violencia

Nota: Tomado de (Ortega Contreras, 2015)

Siendo la inseguridad lo que genera el comportamiento agresivo de los ciudadanos, lo cual conlleva a que, en muchos de los casos, apliquen la justicia por propia mano y en muchos otros la venganza ante la ausencia de autoridad, se denota que en una sociedad llena de miedo y fuera de eso incrédula en las instituciones, lo único que se obtiene es una ciudadanía que decide usar la violencia como defensa propia, como método de tranquilidad y serenidad. Es realmente triste e indignante, que el colombiano tenga que resignarse a simplemente no poder sacar el celular, portar una joya, llevar dinero en efectivo, en la calle, entre otros, porque sería víctima de un hurto (en el mejor de los casos) o incluso de homicidio para lograr el cometido. Corolario a lo citado, el Sociólogo Armando Borrero, ex consejero presidencial y magister en Defensa y Seguridad Nacional, en entrevista rendida ante la Radio de la Universidad Nacional, en la franja denominada “Unanálisis saber para interpretar”,

afirmó que: “*el Estado es el principal integrador de la sociedad, y si esa integración no se da porque el Estado es débil, aparece la ley de la selva. Como el Estado no funciona, como la justicia es ineficiente, la gente desesperada acaba saltando la barrera y tomando justicia por propia mano (...) El único remedio es que el Estado fortalezca su función de intermediario en los conflictos sociales (...) La seguridad es una condición necesaria para el ejercicio de los derechos y para el desarrollo de las libertades, si no hay seguridad, mandan los que tengan mayor poder, los que tengan la fuerza, los que tomen la justicia por mano propia”*(Subrayado fuera de texto) (Consejo Superior de la Judicatura., 2005.)

CAPÍTULO III: COLOMBIA UN PAÍS ALTAMENTE CONFLICTIVO, DEBE ERRADICAR EL PROBLEMA DE RAÍZ.

Tener una justicia congestionada, es igual a decir que la demanda que llega a diario en cuanto a conflictos se refiere es tan alta que la oferta de administración de justicia no es suficiente para solucionar los conflictos. Sin embargo, ¿Por qué tantas demandas para repartir en un día? ¿Por qué tantos conflictos cada minuto? Pues bien, la crisis de la congestión judicial supone un país que guarda consigo a un pueblo que además de ser generador de conflictos, es agente o sujeto activo de constantes vulneraciones a derechos que abren la puerta a grandes pleitos judiciales. Lo que se quiere decir no es que los ciudadanos se den a presentar demandas desmesuradamente porque no tienen nada más qué hacer, sino que en definitiva existe una inseguridad, una inestabilidad laboral, una desigualdad social, una falta de oportunidades y un nivel de injusticia tan alto en Colombia, que hace que el pueblo colombiano intente “*defenderse y tratar de reclamar por la vía judicial, lo que en la vida real les niegan*” (Ospina Duque, pág. 448).

En medio de una sociedad necesitada de la presencia estatal para la protección y respeto de los derechos mínimos que deben garantizarse, en donde los impuestos aumentan y el salario mínimo disminuye, la estabilidad laboral es nula; a diario salen vendedores ambulantes argumentando que las oportunidades de trabajo son inexistentes y que para sostener a su familia, deben valerse de la caridad pública. O como si fuera poco, siguiendo en el área laboral, la modalidad prevalente en las pocas opciones de trabajo existentes resulta siendo el contrato de prestación de servicios y/o término fijo, sin contar que miles de empleadores contratan a sus trabajadores sin pagarles las prestaciones sociales y éstos

últimos por simple necesidad, aceptan ganar incluso menos de un salario mínimo, aunque sea por simples 6 meses, que durarán tanto como dura un parpadeo. La baja vinculación laboral, se corrobora con las tasas de desempleo que el mismo Estado reconoce a través de estadísticas dadas por el DANE, en las cuales, de acuerdo al Boletín Técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se determinaron los principales indicadores del mercado laboral para septiembre del año 2017. Así, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 9,2%, la tasa global de participación de 64,2% y la tasa de ocupación de 58,2%. De igual modo, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la tasa de desempleo fue del 10,5%, la tasa de participación del 67,4% y la tasa de ocupación del 60,3%. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística., 2017)

Situaciones como las antes citadas, son las que conducen al caos social, pero no son las únicas, toda vez que como ejemplo podemos advertir que el mismo Estado, a través de sus instituciones, al ser renuentes y al no cumplir con lo que les corresponde, generan la formulación de derechos de petición que desencadenan al final en una vulneración de derechos fundamentales y en el aumento de la congestión judicial, cuando se decide interponer una acción de tutela por falta de respuesta oportuna al derecho de petición. Dicha circunstancia se complementa con la desintegración en la familia, lo cual se refleja a través de la irresponsabilidad de los padres o miembros del núcleo familiar, al generar violencia e incluso al incumplir con las cuotas alimentarias debidas. O por último, podría ponerse de presente otra situación del diario vivir social, como aquella en la cual el ciudadano del común por diversas razones, decide desesperadamente acudir ante amigos, conocidos, instituciones bancarias, entre otras, para solicitar préstamos que le ayuden a sobrevivir; dineros que en muchas ocasiones, no logran solventar sus necesidades de alimento, salud, educación o

vivienda y que por supuesto, derivan más adelante en un incumplimiento en el pago de dichas obligaciones y por ende en la interposición de procesos judiciales o en la toma de la justicia por mano propia con los llamados “ajustes de cuentas”.

Todas aquellas circunstancias, hacen que tanto la persona que busca empleo, como a quien no le pagan lo legalmente debido y ve violentados sus derechos; junto con el sujeto que no recibe respuesta frente a sus solicitudes; o aquél que sufre inasistencias alimentarias o incumplimientos en los pagos y obligaciones, vean como única salida legítima acudir a las autoridades, para conseguir que sus derechos básicos, sean tutelados, generándose en un Estado, con un promedio de 49.381.250 habitantes para agosto del año 2017, una desprotección estatal absoluta, que ocasiona que los procesos y solicitudes a la administración de justicia, ocupen irónicamente una proporción similar a su población.

No importa qué tantas normas de descongestión se creen o qué tantos jueces se contraten anualmente, el problema claramente no se solucionará partiendo del final sino que es menester escavar, indagar, identificar y hurgar al interior de la sociedad colombiana el origen de tanta conflictividad y la génesis del desastre judicial. *“Arrubla Paucar, ex presidente de la Corte Constitucional, ha afirmado recientemente: La conflictividad de los colombianos ha crecido en más de un 200% en los últimos 10 años y los jueces apenas en un 13%. Tenemos una ecuación donde es difícil garantizar sobre todo la celeridad y eso ocasiona congestión. Para hacer una buena reforma a la justicia hay que garantizar varias cosas. Una, independencia de los jueces. Dos, que haya, además, acceso a la justicia de las causas que no están llegando al sistema, para que la gente no haga justicia por su propia mano. Tres, que la justicia sea pronta y cumplida. Cuarto, que haya buena formación judicial”* (La Rota, Lalinde Ordoñez, Santa Mora, & Uprimny Yepes, 2013.)

Pero, adicional a ello, para evitar esa desproporción en el aparato judicial al cual ha hecho alusión el doctor Arrubla, se hace aún más imperioso, generar educación, construcción de valores, limitación en el cúmulo de leyes vigentes, evitando populismo punitivo, con leyes claras, precisas, concretas y efectivas que consigan que el ciudadano respete la constitución, la ley y la sociedad a la cual pertenece.

Índices de violencia en Colombia.

“La primera causa de muerte en Colombia son las muertes violentas (...) ¿Qué hacer con Colombia que se desangra?”

Dr. Carlos Eduardo Valdés Moreno¹

De acuerdo al informe anual de Amnistía Internacional, expedido en el año 2016, Colombia se encuentra entre los 10 países más violentos del mundo (Amnistía Internacional, 2016-2017.), y ello desde luego no es extraño cuando se tiene en cuenta que estamos en medio de una sociedad que se escandaliza más por el divorcio de un famoso o la renuncia de un político a su cargo, que por el homicidio de un joven que haciendo su trabajo, le solicitó a otro no colarse en Transmilenio, o el de la mujer que al decidir abandonar a su esposo, éste en medio de un ataque de celos decide quitarle y arrebatarle la oportunidad de vivir; o la golpiza que un taxista le da a un señor que conduce el transporte público Uber, o el maltrato físico y verbal que un niño recibe en su colegio porque profesa creencias o pensamientos distintos a los de los demás.

“Desde 1987 la tasa nacional de homicidios gira alrededor de 50 por cada 100.000 habitantes, sin duda una de las más altas del mundo, si se tiene en cuenta que una tasa se

¹ Director Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Docente Universitario de la Universidad Libre, entre otras.

considera endémica cuando supera los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes (...) A pesar de que en los años 2002 y 2003 se registró la tasa más baja de los últimos 18 años, ésta alcanzaba todavía la alarmante cifra de 23.000 homicidios por año” (Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito, & García Villegas, 2006., pág. 268). De acuerdo a estadísticas internacionales, 1 de cada 3 asesinatos en el mundo provienen de América Latina, y particularmente en lo que compete a Colombia, cada hora mueren dos personas en hechos violentos. ¿Será éste el País más feliz del mundo?

Según el Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio, entre los años 2008 y 2013, el número de casos de violencia interpersonal creció en, al menos un 44% (Alta consejería presidencial para la seguridad y convivencia. , 2008-2013., pág. 6). Así mismo, según informe reciente de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, *“Hasta el 31 de diciembre del año 2016, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual.”* (Comisión Colombiana de Juristas., 2017, pág. 13). Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en informe divulgado el pasado 3 de marzo, señaló que: en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, ha registrado al menos **120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones**, a defensores de Derechos Humanos. (Defensoría del Pueblo., 2016-2017.)

En el año 2011, tal como se verá a continuación, se registraron 331,99 casos por cada 100.000 habitantes de violencia interpersonal, lo que desde luego representó una proporción demasiado alta en comparación con los últimos 10 años.

Tabla 4
Violencia interpersonal, tasas por cada 100.000 habitantes. Colombia 2012-2011.

<i>Año</i>	<i>Tasa</i>
2002	259,84
2003	224,26
2004	204,11
2005	266,56
2006	274,38
2007	297,03
2008	285,41
2009	308,18
2010	319,02
2011	331,99
<i>Tasa promedio al 2010</i>	268,49

Nota: Tomado de (Dueñas Mendoza, 2007-2011, pág. 5)

Así mismo, dicho estudio registró que de los casos presentados, por lo menos en el año 2011, la mayoría de ellos ocurrieron en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo a la distribución geográfica del fenómeno de violencia interpersonal, seguido por Antioquia y Valle del Cauca.

Tabla 5
Violencia interpersonal, orden según frecuencia de distribución geográfica por municipio, Colombia 2011.

Ciudad o departamento	Municipio	Total casos.	%	Tasa por 100.000 habitantes.
Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	42.517	27,81	569,34
Antioquia	Medellín	6.719	4,40	283,71
Valle del Cauca	Cali	6.243	4,08	275,06
Atlántico	Barranquilla	3.667	2,40	322,08

Bolívar	Cartagena	3.271	2,14	342,26
Cundinamarca	Soacha	3.039	1,99	650,84
Santander	Bucaramanga	2.982	1,95	567,87
Meta	Villavicencio	2.786	1,82	630,32
Tolima	Ibagué	2.671	1,75	502,05
Nariño	Pasto	2.589	1,69	620,14

Nota: Tomado de (Dueñas Mendoza, 2007-2011, pág. 13)

Ahora bien, parece ser que los índices de violencia se disparan cuando de fines de semana se trata o días que incluyen celebraciones especiales, así pues, *“en el fin de semana que correspondió al día de la madre del año pasado (2016) se presentaron 3.937 riñas, 17 muertos y 427 heridos, casi siete heridos y 66 riñas por hora, más de una riña por minuto. La información estadística registrada indica que en el 2015 fueron 4.254, 317 riñas más, muchas de ellas asociadas al alcohol”* (Guarín, 2017). Lo anterior es plenamente corroborado a través de estadísticas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual consagró que para el año 2011, el domingo fue el día con mayor frecuencia de casos de violencia interpersonal, seguido del día sábado. Estos, en su conjunto concentran más del 50% de los casos registrados. Así mismo, las variables mostraron una probabilidad dos veces mayor de que el fenómeno se presente en hombres.

Tabla 6
Violencia Interpersonal según el día del hecho y sexo de la víctima, Colombia 2011.

<i>Día</i>	Mujeres	%	Hombres	%	Total	%
<i>Domingo</i>	10.452	20,17	23.873	23,63	34.325	22,45
<i>Sábado</i>	7.819	15,09	17.865	17,68	25.684	16,80

<i>Lunes</i>	7.305	14,10	12.778	12,65	20.083	13,14
<i>Jueves</i>	6.591	12,72	11.946	11,82	18.537	12,13
<i>Viernes</i>	6.326	12,21	12.204	12,08	18.530	12,12
<i>Miércoles</i>	6.688	12,90	11.525	11,41	18.213	11,91
<i>Martes</i>	6.645	12,82	10.848	10,74	17.493	11,44
<i>Total</i>	51.826	100	101.039	100	152.865	100

Nota: Tomado de (Dueñas Mendoza, 2007-2011, pág. 11)

Respecto a homicidios, de acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal, las muertes violentas se clasifican en homicidios, suicidios, muertes accidentales de transporte, otras muertes accidentales, e indeterminadas. El homicidio, para el año 2014, ocupó el primer lugar con 12.626 casos equivalentes al 50.05% de un total de 25.225 casos presentados en ese año, con una tasa de 52,92 casos por cada 100.000 habitantes (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses., 2015.). Se ha crecido con el pensamiento de que todos somos enemigos y lamentablemente nos debemos proteger de los que nos rodean, lo que conduce a que las personas no mueran de manera natural por el pasar de los años en su ancianidad, sino ante agresiones y violencia interpersonal. Ya lo diría un columnista en un artículo publicado en la revista semana:

“(…) ¡Qué belleza de amor familiar! En Colombia se mata por intolerancia, resultado de una sociedad en la que no se enseña a convivir sino a imponerse, avasallar y patear al otro. El antídoto es pedagogía ciudadana y reglas para vivir y dejar vivir. Adoptarlas y hacer que se cumplan sería en nuestro país una verdadera revolución” (Guarín, 2017)

Por su parte, según estudio de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá hay un muerto por justicia por mano propia cada tres días, así *"entre junio de 2014 y junio de 2015 murieron 140 personas por linchamiento en Bogotá, eso da un muerto cada tres días"*, sostuvo Rosembert Ariza, director de la investigación y profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. *Esta cifra surge del análisis de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional y artículos de medios locales, explicó. De cada diez intentos de linchamientos la policía logró salvar ocho"*, añadió Ariza, al citar 600 personas rescatadas de multitudes violentas del Observatorio de Seguridad de Bogotá”.

En efecto, lo índices de violencia en Colombia aumentan con los casos de justicia por mano propia, pues cuando la persona piensa que, (a manera de ejemplo), el hurto de su celular no es importante para la justicia, o que el policía no va a perseguir al ladrón, o que aun cuando lo capturen lo van a liberar prontamente, ahí ese ciudadano frustrado e impotente, piensa y de hecho se convence de que es mejor castigar él mismo, es decir, por su propia cuenta, al ladrón, antes que confiar en un agente mediador inexistente. Son intereses privados y particulares los que se desenvuelven alrededor de la justicia por mano propia, se habla en efecto de ciudadanos que no hallan respuesta en el Estado, que pierden la confianza en el sistema judicial, que definitivamente consideran que sus intereses deben ser resguardados por sí mismos, porque de otro modo la justicia no se verá por ningún lado y se habla de conductas que no tienen nada de justicia, sino que más bien trastocan los límites de la venganza y que se convierten no en una solución a un problema, sino en la agravación de la dificultad.

De acuerdo a la editorial presentada por el periódico El Espectador el **31 de mayo de 2016**, los casos de justicia por mano propia son tantos y son tan graves, que la ciudadanía hambrienta de justicia, se excede en el uso de la violencia y termina causándole graves agresiones a los presuntos delincuentes que merecen castigos fuertes para que no vuelvan a delinquir. Es esa (golpear, maltratar, humillar y hasta asesinar al delincuente), la “rehabilitación social” y la garantía de no repetición que la propia comunidad se regala, pues con esos actos desbordados de violencia se marca un precedente en la sociedad y se envía una advertencia a los infractores de la ley (ladrones, asesinos, e.t.c.), de no dejarse coger de la comunidad. No obstante, *“Aunque la frustración y la rabia están justificadas en el diario vivir de los colombianos, eso no es motivo para tomar justicia por mano propia y olvidar la utilidad de las reglas que hemos definido como sociedad. Nos explicamos. Sí, el hurto es un crimen indignante y que ha obligado a los colombianos en todas las ciudades del país a vivir con miedo. Eso se mezcla con la frustración que producen un sistema judicial colapsado y unas autoridades que, en su afán de priorizar los hechos más graves, condenan a muchos de esos casos a la impunidad. Por eso es entendible que muchas personas vean el video de la agresión como un momento de catarsis y venganza simbólica por tantas veces que se han sentido impotentes”* (El Espectador., 2016)

Los altos índices de violencia y homicidio en Colombia, deben llevar a cuestionamientos que reiteren no sólo el problema, porque es evidente; sino que realmente abra los ojos para concluir que no estamos haciendo nada, puesto que *“Es necesario, e importante, tener presente que la delincuencia – como lo han afirmado los criminólogos- no surge gratuitamente, sino que es propiciada por múltiples y muy variados factores. De entre ellos, los más significativos son: la pobreza extrema (frente a la concentración de la riqueza*

en unas cuantas personas), la marginación, la inequitativa distribución de bienes, la mala prestación de los servicios públicos, la falta de oportunidades, el subempleo y el desempleo, los salarios bajos e insuficientes para la subsistencia, el anárquico crecimiento de las ciudades, la educación nula o deficiente, el alcoholismo y la drogadicción. A estos factores hay que agregar, como agravantes: la corrupción y la impunidad (González Mariscal, 2002).

Adicional a ello, no podemos desconocer entre otras causas, la fragmentación familiar, el exceso legislativo y algunas decisiones judiciales en las que, a cambio de generarse prevención en la comisión de comportamientos anormales, lo que se produce es un aumento en los índices de criminalidad, a través de excusas tales como el libre desarrollo de la personalidad o el ejercicio de mis derechos.

Los índices de violencia en Colombia y el aumento de la justicia por mano propia, evidencias que tal como lo sostenía Enrico Ferri, hay una causa endógena y/o exógena que impulsa al colombiano promedio a delinquir. De esta forma y apoyados en el autor precitado, es necesario que el Estado, partiendo de lo que ya se tiene y lo que se revela estadísticamente, aplique la **Teoría de la Saturación Criminal**, la cual implica la división del territorio Nacional a tal punto que permita determinar de manera específica cuáles son las principales problemáticas que poseen los grupos sociales, para a partir de ello darle solución. Por ejemplo si lo que afecta a la comunidad es el desempleo, se debe entonces buscar la manera de ampliar las oportunidades laborales; si lo que hace falta es educación, o quizás un salario que por lo menos alcance para satisfacer las necesidades básicas de un núcleo familiar promedio, o mayor intervención estatal, donde éste es ausente, el Estado debe brindar ello y suplir así esas peticiones efectivamente.

Se ha olvidado que *“el delito es un problema social y no un problema puramente penal. Se ha seguido una ilegítima política criminal, desordenada, donde la primera reacción, para frenar la delincuencia, es incrementar las punibilidades, que, en la actualidad, llegan a un máximo de 60 años y en algunos casos hasta de 70; y la delincuencia sigue ahí, sin reducción alguna”* (González Mariscal, 2002, pág. 70). La violencia y la intolerancia se detendrán el día en el que se entienda que el derecho penal debe ser visto como la ultima ratio y que la verdadera solución está en las políticas de prevención, en donde no se induzca al hombre a cometer el delito, sino que por el contrario éste no vea la necesidad de infringir la ley porque o el Estado le otorga todas las oportunidades – Oportunidades diferenciales según Émile Durkheim-, o simplemente le atemoriza tener que pagar alguna sanción por hacerlo.

En este punto, valga la pena mencionar el código de prevención al que hizo referencia Ferri, para preguntar al lector ¿Por qué en lugar de un código punitivo, no se acude a un código que prevenga los delitos? ¿Qué tal si la política criminal estatal en lugar de dedicarse a sancionar cualquier actividad humana, se dedicara mejor a evitar las conductas delictivas? Qué importante sería que Colombia se abriera paso a la posibilidad de sancionar fuertemente y de manera tajante unas pocas conductas y frente a otras que desencadenan comportamientos desviados o que podrían dar lugar a ellos, se concentrara en evitar las mismas.

Se hace referencia a situaciones como aumentar el precio en las bebidas alcohólicas, cuando el exceso en las mismas ocasionan riñas y homicidios; o quizás imponer requisitos rigurosos en la venta y el porte de armas corto punzantes, previniendo los constantes casos de lesiones personales por intolerancia que se registran a diario; de igual modo, podría prevenir el hurto otorgando mayores oportunidades laborales y un salario que no sea tan

mínimo para sobrevivir. O por último, se podría hablar de intensas campañas educativas que involucren no sólo los colegios y las universidades, sino también los salones comunales y por qué no lugares de discusión social, en donde se implante una verdadera cultura ciudadana y se fortalezcan principios, valores y normas básicas de convivencia, que a pesar de ser esenciales en una sociedad, son ausentes en la nuestra.

Estadísticas internacionales sobre violencia.

Antes de finalizar el presente acápite, no se puede omitir el panorama internacional, toda vez que hoy en día, América Latina es la región más insegura del mundo, al igual que la más desigual, y ello, que claramente desencadena en exclusión o inequidad, hace que los índices de violencia aumenten desmesuradamente. *“La violencia es producto del impacto psicológico y pérdida del tejido social causados por los diversos conflictos armados vividos en la región, de la debilidad institucional y de la ausencia de políticas públicas incluyentes y equitativas”*. Ciertamente El Salvador, Colombia, Venezuela y Guatemala son los países que presentan tasas MUY altas de homicidio de jóvenes entre 15 y 24 años, seguidos de Brasil, Ecuador, Paraguay, Panamá, Nicaragua, México, que presentan tasas medias; a su vez, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Cuba y Uruguay que presentan tasas bajas, tal como ahora se ilustrará:

Tabla 7
Promedio jóvenes entre 15 y 24 años víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes.

Mapa de violencia: los jóvenes de América Latina 2008. Investigación de Julio Jacobo Waiselfisz.	
País.	Tasa de Homicidio por cada 100.000 habitantes.
El Salvador	92,3 homicidios.

Colombia	73,4 homicidios.
Venezuela	64,2 homicidios.
Guatemala	55,4 homicidios.
Brasil	51,6 homicidios.
Ecuador	26,1 homicidios.
Paraguay	22,3 homicidios.
Panamá	17,8 homicidios.
Nicaragua	16,6 homicidios.
México	10,4 homicidios.
Argentina	9,4 homicidios.
Costa Rica	9,2 homicidios.
República Dominicana	9,1 homicidios.
Chile	7,9 homicidios.
Cuba	7,7 homicidios.
Uruguay	7,0 homicidios.

Nota: Tomado de (Banco Interamericano de Desarrollo., 2013, pág. 72). El estudio además reveló que *“la probabilidad de que un joven latinoamericano sea víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un joven europeo y 70 veces mayor que las de los jóvenes de países como Grecia, Hungría, Inglaterra, Austria, Japón o Irlanda”*.

No obstante, de acuerdo al barómetro de las Américas de 2014 de Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), el panorama es idéntico en cuanto a violencia se refiere, pues las personas no sólo legitiman el tomar la justicia por mano propia, sino que además lo prefieren. Así pues, de acuerdo a las tablas extraídas, se refleja que República Dominicana terminó siendo el País en donde más personas aprueban o justifican la aplicación de dicho fenómeno, obteniendo una probación del 42,8% sobre 100. El segundo país con mayor nivel de apoyo a la justicia por mano propia es Paraguay, con 42, 3%, le sigue Perú

con el 40,6%, sigue Honduras con el 39,6%, más adelante se encuentra El Salvador (38,2%), luego Ecuador (37,7%), posteriormente Bolivia (37,2%), Estados Unidos (36,3%) y Haití (35%).

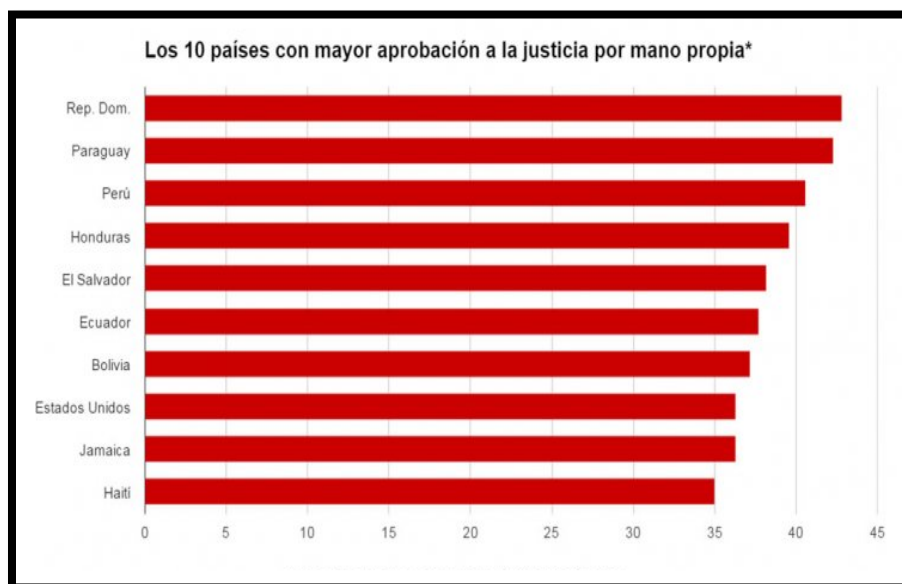


Ilustración 10 Los países con mayor aprobación a la justicia por mano propia.

Dicho proyecto, además reflejó los 10 países con menor aprobación a la justicia por mano propia y sorprendentemente, Colombia se encuentra en el noveno (9) puesto, con un porcentaje de aproximadamente el 25%. De acuerdo al barómetro de las Américas, el 71% de los colombianos desaprueban el uso de la justicia por mano propia y ello (desde luego) resulta siendo bastante contradictorio con la realidad, pues parece ser que los colombianos concuerdan diciendo que no está bien tomar la justicia por mano propia, pero que aun cuando son conscientes de su ilegitimidad, cuando se encuentran en una situación tal, no dudan ni por un segundo en hacer uso de dicho fenómeno.



Ilustración 11 Países con menor aprobación a la justicia por mano propia.

“(…) El crimen consiste en un problema de tiempo, de arrebatárle tiempo al tiempo. Todos los asesinados se iban a morir de todas maneras, algunos tal vez al día siguiente; pero el criminal rompe el discurso adelantando la muerte. Matar es un robo a la naturaleza. Suprimir una vida, es similar a cortar un árbol. Un homicidio es un atentado contra natura. Se mata un individuo, pero en él se trastornan los planes de la naturaleza”
Mauricio González de la Garza en *El milagro azul*. Citado por (Marthe M, 2011, pág. 93)

Derecho Comparado:

Teniendo en cuenta las referencias dadas en párrafos precedentes, sobre el aumento desmesurado del fenómeno de justicia por mano propia, como consecuencia de la congestión judicial y de los altos índices de violencia en Colombia; se considera pertinente brindar al lector un análisis general de los índices de criminalidad en algunos países a nivel internacional, para demostrar en primer lugar que las propuestas de cambio que más adelante se mencionarán, desde luego son efectivas; y por otro lado, para incentivar a la comunidad académica a analizar mucho más de fondo el origen de la conflictividad en el país, pues es claro que la necesidad actual es la creación de políticas públicas eficaces que garanticen a la comunidad educación, seguridad, confianza y sobre todo justicia.

Los países que a continuación se mencionaran, fueron escogidos al azar entre los veinte (20) primeros, considerados como los más pacíficos a nivel internacional en el estudio realizado por el Institute for Economics & Peace, denominado Global Peace Index, para el año 2017. (Institute for Economics & Peace, 2017, pág. 12). De este modo, los países con los que será estudiada Colombia son: Islandia, Dinamarca, Suiza, Japón y Holanda. Por su parte, China y Alemania serán mencionadas con el fin de resaltar ejemplos concretos de cultura ciudadana y de políticas estatales efectivas; y Reino Unido, será destacado igualmente en el acápite de propuestas de cambio y conclusiones, por cuanto su cultura ciudadana evidencia que es esta la mejor propuesta para evitar altos índices de criminalidad.

Es menester mencionar que, se tuvo como aspecto relevante a cotejar, entre otros, el número de habitantes, la superficie terrestre y la legislación penal vigente, para determinar las razones por la cuales dichos países cuentan con índices de criminalidad realmente bajos que los hacen acreedores de privilegiados puestos en el ranking de los Estados más pacíficos.

Islandia:

Oficialmente denominada la República de Islandia y cuya capital es Reykjavik, está ubicada al noreste de Europa. Cuenta con una democracia representativa —el presidente es elegido por voto directo para un mandato de cuatro (4) años- y con una república parlamentaria — el parlamento en la actualidad tiene 63 miembros, elegidos por un periodo máximo de cuatro (4) años-; posee además, como idioma y moneda oficial, el Islandés y la corona islandesa respectivamente. Valga la pena referirse en el presente documento a dicho país, toda vez que, desde el año 2008 ha ocupado el primer lugar a nivel mundial en el listado de países más pacíficos, contando con índices de criminalidad nulos, pues de acuerdo al

Índice Global de Paz (Institute for Economics & Peace, 2016), realizado en el año 2016, Islandia obtuvo como puntuación tan solo un 1,19 en una escala de 1 a 5, donde 1 representa la ausencia total de violencia y de conflicto. Dicha puntuación, para el año 2017 varió, pues para dicho año se obtuvo como resultado un 1,11. Como bien es sabido, Islandia además de ser el país más tranquilo del mundo, es uno de los menos poblado y más pequeños a nivel mundial, pues en efecto, en el informe World Population Prospects, dado por la ONU para el año 2017 (Organización de las Naciones Unidas, 2017, pág. 31), se determinó que, Islandia contó con una población aproximada de 335.000 personas y con una superficie de 103.000 km².

Éste pequeño pero destacado país, ha logrado mantener desde el año 2009 hasta el año 2017 una tasa de homicidios de 1,8 por cada 100.000 habitantes (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2017), a pesar de ocupar el puesto número 15° en el ranking mundial de posesión legal de armas per cápita (BBC MUNDO, 2013), pues sus habitantes las usan para cazar.

Además de lo anterior, en Islandia, el consumo de sustancias que pueden llevar a la comisión de delitos, es baja, pues el consumo de cocaína por parte de los ciudadanos Islandeses de entre 15 y 64 años para el año 2012 fue del 0,9%, para el éxtasis fue del 0,5% y para las anfetaminas fue del 0,7%. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito., 2012). Ahora bien, un estudio mucho más reciente demostró que:

“el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 16 años consumidores de alcohol se desplomó del 42 por ciento en 1998 al 5 por ciento en 2016; el de los consumidores de marihuana pasó del 17 al 7 por ciento y el de los fumadores de cigarrillos cayó del 23 al 3 por ciento. ¿Cómo

lo lograron? (...) Las leyes cambiaron. Se penalizó la compra de tabaco por menores de 18 años y la de alcohol por menores de 20. Se suspendió la publicidad de ambas sustancias y se aprobó una ley que prohibía a los adolescentes de entre 13 y 16 años salir a la calle después de las 10 de la noche en invierno y después de medianoche en verano. Así mismo, se reforzaron los vínculos entre familias y centros de enseñanza mediante organizaciones de madres y padres creadas por ley en todos los centros educativos. Los padres, además, firmaron acuerdos que los comprometían a pasar tiempo de calidad con sus hijos (...)” (Young, 2017)

Claramente, el lector pensará que las cifras arrojadas, son simplemente incomparables con Colombia, pues es claro que nuestra población supera excesivamente la de Islandia, pues para el año 2017 se contaba con 49.381.250 habitantes según el DANE; y con una superficie de 1.141.748 km². Sin embargo, es indiscutible que cuando existe un Estado que además de suplir las necesidades de sus asociados, toma conciencia de la importancia de la prevención e interviene oportunamente para detener los crímenes en sus primeras fases, sin importar el número poblacional con el que se cuente; ello genera confianza ciudadana y por ende una ausencia absoluta del crimen que trae como resultado logros magníficos tales como que los miembros de la fuerza pública sólo sean requeridos para educar, orientar, dar ejemplo y sobre todo proteger a los suyos, pues no es necesario ni siquiera que estos porten armas de fuego para controlar a una sociedad que además de ser educada, es consciente no solo de sus derechos, sino también de sus deberes.

Dinamarca:

Aunado a lo anterior y a la par de Islandia, se encuentra Dinamarca, oficialmente el Reino de Dinamarca, el cual está integrado por la propia Dinamarca y por sus dos territorios de ultramar o dependientes: Groenlandia y las Islas Feroe. Dicho país tiene como capital a Copenhague, cuenta con el Danés como idioma oficial y con la corona danesa como moneda. Desde 1849, Dinamarca se convirtió en una Monarquía Constitucional, sin embargo, es necesario aducir que, el poder ejecutivo está en cabeza del consejo de ministros y el poder legislativo es compartido entre el Gobierno y el Parlamento Danés.

¿Cuál es la razón para mencionar a Dinamarca en la presente monografía? Pues bien, de acuerdo al Global Peace Index, para el año 2017, el Reino de Dinamarca fue el cuarto país más pacífico del mundo (Institute for Economics & Peace, 2017, pág. 17), contando con una mínima puntuación en la existencia de violencia y conflicto, pues obtuvo tan solo un 1.33, en una escala de 1 a 5. De igual modo, dicho país ocupó el primer puesto como “País más legal”, de acuerdo al estudio Rule of Law Index, realizado en el año 2016 (World Justice Project., 2016), pues contó con un índice de 0,89 sobre 1 en cumplimiento a leyes.

Al igual que Islandia, Dinamarca cuenta con un número poblacional relativamente poco, en comparación al caso colombiano, puesto que para el año 2017, éste contó con una población total de 5.734.000 de acuerdo al informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas, 2017, pág. 30); no obstante, nótese que dicho país cuenta con una superficie mucho menor a la Islandesa, pues posee en total 43.094 km² para sus habitantes, razón por la cual teniendo en cuenta que su territorio es realmente reducido, se podría pensar erróneamente que los índices de conflictividad entre sus habitantes no solo son altos, sino que además,

tenderían a aumentar. Sin embargo, al respecto, de acuerdo a una noticia –entre muchas otras– publicada por el periódico El Tiempo el pasado 25 de noviembre del año 2017, titulada “Así se vive en Dinamarca, el país más feliz del mundo”, tres (3) familias Danesas aseguraron que su bienestar “se funda en un sistema basado en la confianza”. Pues bien, el promedio de homicidio en dicho país es de uno (1) por cada 100.000 habitantes, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y parece ser que el motivo por el cual Dinamarca es uno de los países con menores índices de criminalidad, radica en que los entes estatales funcionan a la perfección y llegan a los ciudadanos no para sancionar, sino para prevenir la comisión de delitos.

“Aquí pagamos muchos impuestos (el 48,2 por ciento sobre las rentas personales, el índice más alto de la Unión Europea; el IVA, por otro lado, es del 24 por ciento) y lo hacemos felices, porque vemos que el sistema funciona. Todo se basa en la confianza. Si tomas el beneficio del día libre por enfermedad de tu hijo, por ejemplo, no tienes que presentar ningún certificado médico. Los daneses somos esencialmente honestos. Si viviera en un país con corrupción, por ejemplo, probablemente preferiría guardar mi plata debajo del colchón”, reflexiona Marie. (Beuchat, 2017)

Suiza:

Por otro lado, teniendo como común denominador entre los países ya citados la prevención al delito y la efectividad de los entes estatales, no se puede pasar por alto mencionar a Suiza, como otro ejemplo internacional de paz, confianza y justicia; pues, la Confederación Suiza, ubicada en Europa Central, ocupó el puesto número siete (7) en el ranking mundial de paz (Institute for Economics & Peace, 2017). Dicho país, tiene como

capital Berna y como idiomas oficiales: Alemán, Francés, Italiano y Romanche. Su moneda es el Franco Suizo y cuenta con el parlamento bicameral para el poder legislativo, con el Consejo Federal para el ejecutivo y con la Corte Suprema Federal de Suiza para el judicial.

Además de constar en estándares internacionales como uno de los países más pacíficos del mundo, es uno de los Estados más desprocedimentalizados a nivel mundial y cuenta con la maravillosa virtud de ser uno de los más seguros, pues de acuerdo a un sondeo suizo de seguridad, realizado por la empresa Killias Research & Consulting (KRC), por encargo de la Conferencia de Comandantes de las Policías Cantonales de Suiza (CCPCS), para el año 2015, ocho (8) de cada diez (10) personas se sienten seguras en dicho país, es decir, el 85,3% de 2000 personas encuestadas. (SWI, 2016)

De otro lado, dicho sondeo aseguró que 9 de cada 10 personas confía en la policía (87,9%). Dichas cifras de seguridad y confianza resultan siendo asombrosas, teniendo en cuenta que a pesar de contar con una superficie total de 41.290 km² para una población de 8.476.000 (Organización de las Naciones Unidas, 2017, pág. 33), los conflictos son mínimos y la delincuencia mucho menor, pues el Estado es protector y proveedor de herramientas necesarias para la supervivencia de sus asociados, a tal punto de permitirles a los mismos experimentar un ambiente pleno de tranquilidad e igualdad.

Japón:

Claramente los países previamente mencionados, cuentan con un número de habitantes mucho menor que Colombia y muchos de los lectores podrían pensar que es por ello que el país se hace tan seguro y confiable, pues a menor población, menores índices de conflictividad y de criminalidad. Sin embargo, es indispensable ir a otro extremo en cuanto

a población y territorio se refiere, para demostrar que el número poblacional no es impedimento para crear una sociedad educada, segura, justa, tolerante, respetuosa y con una amplia capacidad para confiar en los entes estatales. Así pues, valga la pena mencionar a Japón, país soberano del este de Asia, que tiene como capital Tokio y como moneda oficial el Yen. Su forma de Gobierno es una Monarquía Constitucional, en donde la ciudadanía vota para elegir a los miembros del parlamento y estos a su vez son quienes eligen a un Primer Ministro.

Japón, al igual que otros países, poseen actualmente un problema de sobrepoblación bastante grave, pues tal como se comprueba, éste para el año 2017 contó con una población aproximada de 127.484.000 y con una superficie de tan solo 377.835 km² (Organización de las Naciones Unidas, 2017). Así pues, tal como se puede evidenciar la superficie terrestre con la cual cuenta Japón es insignificante para el número poblacional que tienen; sin embargo, aún con las dificultades espaciales y el aumento desmesurado en sus habitantes, hoy por hoy, ocupa el décimo (10) puesto en el ranking de países más pacíficos a nivel internacional (Institute for Economics & Peace, 2017, pág. 12), lo cual es admirable, teniendo en cuenta lo previamente dicho.

Comparándolo con Colombia, se tendría que decir que aun cuando Japón supera en población a Colombia, éste es mucho más pequeño que nuestro país en cuanto a territorio se refiere, pues para generar una idea, los 127.484.000 habitantes cuentan con un territorio mucho menor que la Región Amazónica Colombiana para convivir, pues de acuerdo a estadísticas del DANE, dadas para el año 2016, dicha Región contó con una superficie total de 483.119 km², pero valga la pena mencionar que en Colombia dicho espacio es ocupado por una población aproximada de 264.945 habitantes.

Con lo dicho se quiere resaltar que, aun cuando Japón excede los índices demográficos y tiene un territorio mucho más pequeño (la tercera parte de Colombia), es un Estado pacífico, en comparación con éste último, el cual evidencia de acuerdo con lo narrado en lo corrido de este escrito que, es conflictivo, peligroso, inseguro e intolerante. Es así como, el hacinamiento y la sobrepoblación en Japón deberían generar en los habitantes excesivos conflictos e índices de criminalidad desbordantes, pero de acuerdo a estadísticas de la ONU, para el año 2013 (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2013), el índice de homicidios fue de 0.3 por cada 100.000 habitantes, equivalente a 442 muertos (BBC MUNDO, 2013); a diferencia de Colombia, que para el año 2017 según el director de Medicina Legal, el Doctor Carlos Eduardo Valdés, se registró un promedio de 32 homicidios diarios, esto es de 23.2 por cada 100.000 habitantes. (Colprensa, 2017).

Japón, además cuenta con uno de los índices de crímenes por arma de fuego más bajos del mundo, pues para el año *“2014 este tipo de armas causaron tan solo seis muertes en el país asiático, mientras que en Estados Unidos provocaron 33.599”* (Low, 2017), y habría que recordar que la ONU, para el año 2005 registró que *“en Colombia se presentaron 17,331 homicidios, de los cuales el 70% (12,055) fueron cometidos con armas de fuego”* (Oficina contra la Droga y el Delito. Naciones Unidas., 2005).

¿Cuál es la razón para que Japón tenga un control social absoluto, en el que los índices de criminalidad son mínimos? Pues bien, dicho alcance se debe no solo a la cultura ciudadana que se ha infundido con honestidad, igualdad y justicia, sino también a la existencia de entes estatales transparentes, oportunos, efectivos y radicales, que previenen el delito con educación y sanciones estrictamente fuertes. Claramente, en Japón existe un nivel de integración y cohesión social tan alto, que enseña a los ciudadanos a tener confianza y a

reconocer al otro como su semejante, a tal punto que los conflictos se resuelven per se sin la necesidad de recurrir a aparatos represivos. Por su parte, la capacidad del sistema penal es tan amplia que investiga a tiempo los pocos delitos cometidos y castiga sin dilaciones las conductas que le son reprochables a un sujeto. Sanciones como la pena de muerte, son soluciones radicales al problema presentado, pues claramente ello genera una sanción-prevenición, al ejemplarizar lo que ocurre cuando se comete un comportamiento desviado que afecta gravemente al grupo social. La pena capital está estipulada no solo en Japón, sino también en China que cuenta con niveles bajos de criminalidad, con una ciudadanía excepcional y con unas sanciones ejemplarizantes, pues valga la pena recordar que el pasado veintisiete (27) de Febrero del año 2017, Caracol Radio publicó una noticia en donde Cancillería habría confirmado la ejecución del primer colombiano por narcotráfico en China, llamado Ismael Arciniegas, el cual a sus 74 años fue condenado a muerte por intentar ingresar a dicho país casi cuatro kilos de droga. (CARACOL , 2017)

En relación con **China**, es preciso destacar que para el año 2017 contó con una población de 1.409.517.000 y con una superficie de 9.596.960 Km². La República Popular China, que tiene como capital Tokio y que se encuentra ubicada en Asia Oriental, es uno de los países más poblados del mundo, pero con índices de criminalidad mucho más bajos que los de Colombia, toda vez que para el año 2014, **la tasa de homicidios alcanzó la misma estadística que se evidenció en Suiza, puesto que logró ser de 0.7 por cada 100.000 habitantes.** (Liu Wei, 2015). Aun cuando, valga la pena recordar que, China cuenta con un número poblacional y una superficie terrestre que supera en exceso no solo a Suiza, sino al resto del mundo.

Holanda:

Así mismo, resulta importante destacar a Holanda, el cual ocupó el puesto No. 19 en el ranking mundial de paz para el año 2017 (Datos Macro, 2018), mejorando respecto del año 2016, pues alcanzó un puntaje de 1,525 sobre 5. Holanda es un país que está ubicado en la costa occidental de los Países Bajos, tiene como capital Ámsterdam, contó con una población aproximada para el año 2017 de 17.081.507 y con una superficie de 41.540 Km².

Se hace necesario hacer alusión a dicho país, toda vez que ha sido noticia mundial la insólita “crisis” que ha sufrido por escasez de delincuentes, pues ello, ha dejado las cárceles ausentes de presos, pero llenas de guardias. Al respecto, Holanda se ha centrado tanto en la prevención y en la verdadera resocialización del delincuente, que sus índices de reincidencia son menores al 10% y en efecto, aprovechan los centros de reclusión para prestar una atención especial al individuo que por distintas causas acudió al delito.

Jan Roelof van der Spoel, vicegobernador para el año 2016 de la prisión de alta seguridad en el noreste de los Países Bajos llamada Norgerhaven, explicó: *“En el servicio holandés nos fijamos en el individuo, si alguien tiene un problema de drogas, tratamos su adicción; si son agresivos proporcionamos terapia para controlar la ira; si tienen problemas de dinero, les damos asesoramiento para manejar la deuda. **Tratamos de eliminar lo que los llevó a delinquir.** El recluso o la reclusa debe estar dispuesto a cambiar, pero nuestro método ha sido muy eficaz. En los últimos 10 años, nuestro trabajo ha mejorado más y más. Añade que algunos delincuentes reincidentes son eventualmente condenados a penas de dos años y programas de rehabilitación a medida. Después de eso, menos del 10% vuelven a la prisión”.* (Lucy Ash., 2016)

En los últimos años, 19 cárceles han cerrado y la tasa de encarcelamiento disminuyó a 57 por cada 100.000 habitantes para el año 2016. (Lucy Ash., 2016), es tan asombrosa la reducción en los índices de criminalidad, que Holanda ha optado por alquilar sus cárceles a países vecinos o por dejar las mismas como centros para refugiados migrantes. En efecto, Bélgica fue uno de los primeros países en iniciar diálogos para enviar reclusos a dicho país y en el año 2010 se firmó el acuerdo correspondiente por el que más de 500 presos fueron enviados a cumplir su condena en la prisión de Tilburg, en el sur de los Países Bajos. (El Colombiano, 2015). Noruega, al igual que Bélgica, decidió iniciar conversaciones con Holanda para alquilar una cárcel, teniendo en cuenta el grave problema de hacinamiento carcelario que existe en dicho país. Así pues, en el año 2015 envió lo primeros 25 reclusos de los 242 que la prisión holandesa de Norgerhaven acogió.

“Noruega acordó pagar a los Países Bajos aproximadamente 25 millones de euros anualmente (27 millones de dólares) a cambio de un contrato de tres años con la prisión Norgerhaven, una construcción de alta seguridad a la cual envió 242 prisioneros” (Clarín Mundo, 2017)

En efecto, Holanda encontró que lo que su sociedad necesitaba específicamente para disminuir los índices de conflictividad y por ende de criminalidad, no era un aumento desmesurado en las sanciones o en las penas de su código penal, ni mucho menos imponer sanciones radicales a los delincuentes; sino centrarse en la verdadera prevención y resocialización del individuo, que se logra desde un sistema penitenciario con excelentes condiciones humanitarias que les ofrece a los individuos grandes oportunidades para continuar y sobrevivir, aun después de los errores cometidos.

Por último, se quiere mencionar y resaltar la labor que **Alemania** ha hecho después de la Segunda Guerra Mundial en la reconstrucción de una sociedad mucho más tolerante y pacífica, porque si bien es cierto cuenta con un pasado doloroso y decepcionante, en donde lamentablemente tuvo que ser el protagonista del odio, la segregación y el exterminio de muchos seres humanos por la tragedia del nazismo, hoy muestra inclusión social e igualdad. Al respecto, es preciso destacar que luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó no solo con un recuerdo catastrófico, sino también con un dolor de patria que martillaba como una de las peores pesadillas en cada edificio destruido, en cada inocente asesinado, en cada mujer accedida o en cada niño huérfano. Su nación parecía no tener otra oportunidad, sin embargo, aun con todos los errores y dificultades encontradas, pudo revivir de las cenizas y reconstruir una nueva patria que hoy por hoy tiene el orgullo de ocupar el puesto número 16 sobre 163 Estados, en el ranking mundial de paz. (Institute for Economics & Peace, 2017).

Alemania, que cuenta con 82.114.000 habitantes y con una superficie aproximada de 357.380 Km². (Organización de las Naciones Unidas, 2017, pág. 30), es oficialmente denominada República Federal de Alemania, se encuentra ubicada en el centro de Europa y es miembro actual de la Unión Europea. Está organizada como una república parlamentaria, tiene como capital Berlín y posee como idioma y moneda oficial el alemán y el Euro respectivamente.

Ejemplos como los que fueron presentados y como los que más adelante se mencionarán en las propuestas de cambio, son algunos de los que demuestran que en realidad la implantación de una verdadera cultura y la recuperación de la confianza ciudadana, es lo mínimo que debe hacer Colombia para lograr grandes cambios, toda vez que, si se revisa el Global Peace Index para el año 2017, para desdicha nacional, Colombia es el país de América Latina menos pacífico, pues ocupa el penoso último puesto, superando a Estados en su orden

como: Venezuela, México, Guatemala, El Salvador, Brasil y Honduras. Y no siendo suficiente con ello, a nivel mundial éste ocupa el puesto 146 sobre 163 países estudiados.

Lo anterior, evidencia que la erradicación del populismo punitivo y la unificación de pocas leyes que establezcan principios y valores e incluso límites claros a los ciudadanos, son entre otras, unas de las medidas que se deben adoptar para que Colombia no sea el país más feliz del mundo solo de palabra, sino que sea una verdadera realidad al interior del mismo, tal como sucede en Dinamarca y en los países previamente mencionados.

Estudio de casos e influencia de los medios de comunicación.

A lo largo de la investigación, se ha hecho un recuento histórico acerca del fenómeno a analizar, esto es, la justicia por mano propia y desde luego su causa principal, es decir, la congestión judicial. Así pues, luego de los capítulos que anteceden, se concluye que al parecer la congestión aumenta y con ella la desconfianza en el sistema, que genera un incremento descontrolado de la justicia por mano propia, porque el ser humano en general y el colombiano en especial, al ver que el monopolio de justicia administrado por el Estado no funciona, crea sus propias soluciones y genera sus respuestas, en la violencia (generalmente).

“El Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC) divulgó un estudio donde se muestra que entre enero y junio de 2014 los bogotanos capturaron a 8.101 delincuentes sorprendidos en flagrancia. Es decir, cada día descubrieron a 45 delincuentes robando o atracando, y corrieron tras ellos para entregarlos a la Policía para que esta, a su vez, los pusiera a disposición de la Fiscalía.

Según el estudio, tres de cada diez capturados por los ciudadanos quedaron libres y en poco tiempo las víctimas volvieron a ver a los mismos delincuentes en sus zonas habituales.

En muchos casos los infractores fueron puestos en libertad porque eran menores de edad, porque no se fundamentó bien la captura ante la Fiscalía, porque las víctimas no denunciaron o porque la cuantía del daño fue tan baja que no se avanzó en los procesos de detención y audiencia de legalización” (Ortega Contreras, 2015)

Partiendo de esta triste realidad social y teniendo ya unas bases teóricas de contextualización, a continuación, se presentará ante el lector un acumulado de notas periodísticas, de los últimos tres (3) años, en las cuales, los medios de comunicación registraron casos escandalosos a nivel nacional, en los que los ciudadanos decidieron administrar justicia por su cuenta. Así mismo, en un acápite final del presente capítulo, se revelará la gran influencia de los medios de comunicación, no sólo en el pensamiento ciudadano de impunidad y ausencia de justicia, sino en la promoción indirecta de la toma de la justicia por mano propia.

Registros periodísticos años 2015, 2016 y 2017.

DICIEMBRE 14 DE 2014: Informe acerca de la Justicia por mano propia, presentado por Séptimo Día, en noticias Caracol, refleja los altos índices de justicia por mano propia. Basados en registros periodísticos, se plasmó la preocupación de los crecientes casos de linchamiento y de los casos en los que la comunidad enfurecida, traspasa esa delgada línea que separa la justicia de la venganza y literalmente arremeten contra el presunto delincuente, transformándose de víctimas a victimarios.

Para el Senador Jorge Robledo, el tomar la justicia por mano propia, es lo peor que le puede pasar a un País, pues sólo el Estado es el encargado de velar por la seguridad de la

ciudadanía, sin embargo, al no haber una respuesta institucional, las personas buscan la justicia por mano propia.

“Según la Policía Nacional, de 473.000 capturas que se realizaron a nivel nacional en lo corrido del año, 88.900 eran de delincuentes reincidentes, incluso ha habido casos en los que las personas son capturadas 2 o 3 veces por lo mismo, pero hoy están en libertad”. La noticia concluyó que cada vez son más las personas que se están armando por inseguridad, *“cada vez más se renuevan acerca de 10.000 y 20.000 permisos de porte y tenencia de armas”* y así mismo, un reciente estudio de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, indicó que 7 de los 10 países con las tasas más altas de homicidio, están en América Latina y de las 50 ciudades con mayores tasas de homicidio 42 están en Latinoamérica y dentro de las primeras 16 varias son de Colombia. (Séptimo Día., 2014)

ABRIL 21 DE 2015: Caracol Televisión, registró un caso que se presentó en Villavicencio, en donde la comunidad enfurecida golpeó fuertemente a unos sujetos que al parecer intentaban hurtar una motocicleta. La reacción de la sociedad fue tal, que uno de los presuntos delincuentes terminó herido con el arma que portaba para cometer el hurto. Las autoridades, recordaron la importancia de denunciar los hechos delictivos y de no hacer uso de la justicia por mano propia, toda vez que en virtud a la desproporción del castigo, los ciudadanos podrían incurrir en un delito. (Noticias Caracol., 2015)

MAYO 11 DE 2015: El noticiero de RCN, bajo el título “cuando los ciudadanos se toman la justicia por sus propias manos”, expresó la preocupación por el alza en los casos en los que la ciudadanía decide tomar la justicia por su cuenta, pues en Cali, una horda enfurecida de vecinos decidió ir a la casa de un hombre, acusado de golpear despiadadamente a su hijo menor de edad hasta dejarlo sin signos vitales, para lincharlo como castigo por el

presunto delito cometido. Pero no sólo pasó en dicha ciudad, sino también en Barranquilla, Bogotá y en casi todos los rincones del país, los ciudadanos descontrolados reclaman justicia a través de la violencia.

El sociólogo y violentólogo Fernelly Domínguez, entrevistado por el noticiero, afirmó que tomar la justicia por mano propia *“tiene que ver con que el Estado colombiano ha resultado ineficaz para proveer justicia rápida, cumplida y efectiva. (...) los índices de impunidad son muy altos, lo que genera una desconfianza por parte de la sociedad hacia sus instituciones”* (Negrilla y subrayado fuera de texto). (Noticias RCN., 2015)

JUNIO 1 DE 2015: Revista Semana, a través del periodista Fabián Cristancho, reveló que en las redes sociales, cada día aumentaban los videos e imágenes de presuntos ladrones que atrapados en flagrancia han sido castigados por la comunidad. Así, apoyado en el concepto del experto en seguridad Jairo Libreros, afirmó que la causa fuerte para que se den los linchamientos en Colombia y en Latinoamérica *“pasa por el profundo descontento social por la justicia”,* toda vez que las personas ya no están interesadas *“en protestar, sino en actuar por mano propia”*. Así mismo, reflejó como estadísticas que en el 2014, aproximadamente 4.891 delincuentes fueron capturados por la comunidad y que en el 2015, ésta cifra aumentó en un 23%, es decir, a 6.007. Lo importante de dicho asunto, no es que civiles aprehendan a los presuntos infractores de la ley, sino la venganza o el castigo que les imprimen, el cual es desbordado en violencia y por supuesto desproporcionado respecto al daño inicialmente causado.

La revista semana, realiza una encuesta a los usuarios, preguntándoles sobre la reacción violenta al agresor y obtuvo como resultado, que la mayoría de los ciudadanos la legitima, porque al parecer, la justicia se encuentra en golpear fuertemente al delincuente, en dañar su

nombre en las redes sociales y en exponerlo al escarnio público. (Negrilla y subrayado fuera de texto). (Cristancho, 2015)

JUNIO 7 DE 2015: No muchos días más adelante, el periódico El Espectador, registró un nuevo caso, en donde policías salvaron la vida de tres (3) hombres, que iban a ser linchados y asesinados por la comunidad enfurecida e inconsciente, toda vez que al parecer eran presuntos ladrones. En ésta oportunidad, se afirmó que “(...) *Muchas veces ese rencor es el que incita a la violencia: hay una inconformidad con el funcionamiento de las instituciones que rigen la vida diaria. El linchamiento, más que una enfermedad, es un síntoma de una red mucho más compleja de ineficacia estatal: es el sentir generalizado de una población que descrea del sistema que los rige, combinado con una agresividad latente, una violencia que crece con el correr de los días. No es una excusa, por supuesto. Pero no deja de ser importante, entonces, que las autoridades mejoren en pro de generar una mayor credibilidad entre sus ciudadanos.* (...)”. (Subrayado fuera de texto). (El Espectador., 2015)

AGOSTO 1 DE 2015: Bajo la expresión “*lo que le puede pasar a usted si decide hacer justicia por mano propia*”, el periodista de Caracol Televisión, informó el caso ocurrido en Medellín, en donde la madre de una menor de 14 años agrede al profesor de ésta última con un arma blanca, porque al parecer habría abusado sexualmente de su hija. Por estos hechos, la madre fue capturada por intento de homicidio y el docente de 40 años también, por el delito de acceso carnal violento. (Noticias Caracol, 2015)

OCTUBRE 21 DE 2015: Noticias Caracol, registra el momento en el que un presunto delincuente que habría intimidado a un joven para hurtarle su celular sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 111 en Bogotá, es perseguido por quienes transitaban por el lugar, encerrado y agredido por la comunidad violentamente. El presunto asaltante, fue defendido por guardias

de seguridad de una cadena de supermercados que evitaron que el joven fuera linchado. No obstante, fue desnudado y retenido para luego ser entregado a las autoridades. (Noticias Caracol, 2015)

NOVIEMBRE 5 DE 2015: Nuevamente, Caracol Televisión, registra el momento en el que habitantes de la ciudad de Barranquilla, deciden quemar la motocicleta en donde se transportaban dos (2) presuntos ladrones que previamente habían hurtado un celular. Luego de éste hecho la comunidad los persigue, toman la justicia por mano propia y golpean fuertemente a uno de ellos porque el otro se logró refugiar en una casa hasta que la policía llegó al lugar de los hechos. (Noticias Caracol, 2015)

ENERO 7 DE 2016: *“Cada vez más huilenses cuestionan, con o sin razón, falta de acción y rigurosidad de las instituciones y autoridades en casos donde los delincuentes no pagan las consecuencias que supuestamente deberían por sus actos. Por eso, porque sienten que la justicia se queda corta o no los puede proteger, están tomando la justicia por propia mano, actuando con excesos y violencia contra los victimarios”.* En el Huila se registraron 2 casos, en los que presuntos delincuentes que se movilizaban en motocicleta, fueron perseguidos por la comunidad; uno de ellos, perdió el control de la motocicleta, ocasionando un accidente de tránsito. Al ver ello, la comunidad emprendió contra ellos, pero lograron escaparse dejando la moto tirada. Una vez llega la comunidad al lugar del accidente, le prende fuego a la motocicleta, tomando la justicia por mano propia. El comandante del Departamento de Policía del Huila, llamó a la cordura a los ciudadanos y les anunció que colaborar con la justicia no era tomar la misma por mano propia, sino capturar al delincuente y entregarlo a las autoridades competentes, sin agredirlo de ningún modo. (La Nación., 2016)

MARZO 22 DE 2016: Una vez más en Medellín, se registra un nuevo caso de justicia por mano propia. En esta oportunidad, las autoridades confiesan que se ha vuelto común que los ciudadanos tomen la justicia por mano propia, y que en lo corrido del año, se tiene una cifra aproximada de 200 casos entre Medellín y Bogotá, en los que las personas violentamente agreden a su presunto agresor, en donde la víctima pasa a ser victimario. ¿Qué genera esa reacción en los ciudadanos? Algunas personas consideran que la falta de efectividad del sistema judicial, conlleva a que las personas actúen tomando la justicia por mano propia. (Noticias Caracol, 2016)

ABRIL 6 DE 2016: Autoridades invitando a la comunidad a no tomar la justicia por mano propia en Medellín, reportaron nuevamente un caso en el que habitantes enfurecidos, en horas de la madrugada, golpearon a un presunto delincuente que minutos antes, había intentado hurtar. Las autoridades afirman que en lo corrido del año más de 50 casos de estos (en los que las personas toman la justicia por mano propia), se han registrado. (Noticias Caracol, 2016)

MAYO 15 DE 2016: *“Es un acto atroz, inhumano, atentatorio contra la integridad y la vida de una persona. Jamás podrá llamarse así (justicia por mano propia), independiente de lo que haya hecho esta persona”, exclamó el funcionario, quien agregó que ya la Personería ha sentado su voz de protesta en los despachos judiciales frente a los hechos que son denominados justicia por mano propia (...)*”. Guillermo Durán, personero de Medellín, aseguró que el pasado viernes 13 de mayo del año 2016, una persona se acercó a denunciar que su pareja, había sido víctima de una agresión por parte de la comunidad, pues al parecer, la joven de 31 años de edad, fue encontrada en flagrancia hurtando unos productos de belleza que ascendían a los DOSCIENTOS MIL PESOS (\$200.000). Dicha situación hizo

que personas de la comunidad, le echaran sacol (pegamento) en la cabeza y le prendieran fuego; la mujer fue llevada de inmediato a un centro asistencial, siendo diagnosticada con lesiones por quemadura de tercer grado en rostro, cráneo y otras partes del cuerpo. El personero pidió que se investigara el hecho, porque al parecer los hombres sospechosos de cometer el hecho delictivo, hacen parte de un grupo delincuencial que ofrece seguridad ilegal a la comunidad a cambio de un pago mensual.

El registro periodístico informó que *“En los primeros tres meses del año en Medellín se dieron a conocer ante las autoridades, a modo de denuncia, más de 50 casos de violencia contra personas sospechosas de hurto y que fueron sorprendidas por la comunidad”*. (Noticias Caracol, 2016)

MAYO 21 DE 2016: Noticias Caracol, registró en vivo y en directo cuando una comunidad enfurecida en Barrios Unidos, golpean, insultan, desnudan y maltratan fuertemente a un presunto delincuente que le habría hurtado el bolso y el celular a una joven que transitaba por el lugar. Dos (2) policías llegaron al sitio, pero debido a la agresividad de la comunidad, fue necesario mayor apoyo policial para sacar al presunto ladrón desnudo del lugar. Luego de ello, se le preguntó a la comunidad qué tan buena idea era tomar la justicia por mano propia y todos determinaron que era absolutamente reprochable, pero muchos de ellos indicaron que *“(...) el Estado es el 100% culpable de esto, ellos nos inducen a nosotros a que cometamos errores de esa índole (...)”*. (Negrilla y subrayado fuera de texto). (Noticias Caracol, 2016)

JULIO 25 DE 2016: El Espectador, registró un caso de justicia por mano propia en Cali, en el que una mujer persiguió en su vehículo a quienes le habrían hurtado su celular en una motocicleta. Unos cincuenta metros más adelante, los arrolló y asesinó a uno de ellos,

mientras que el conductor de la motocicleta, que era un menor de edad quedó gravemente herido con el accidente. Para el Abogado Penalista Iván Cancino *“estos hechos son el reflejo del desespero de la ciudadanía en un país en el que las medidas que toman las administraciones locales no sirven de mucho (...) El debate es largo y, lo cierto, es que muchos colombianos prefieren castigar a los delincuentes por su cuenta que esperar procesos que, no en muy pocas ocasiones, los dejan de nuevo y en pocas horas en las calles”*. (El Espectador., 2016)

SEPTIEMBRE 29 DE 2016: Caracol Radio, registró que un hombre de 20 años, ingresó a la estación de Transmilenio de Patio bonito en la localidad de Kennedy, y allí despojó a un usuario de sus pertenencias. La víctima persiguió al agresor por la Avenida Ciudad de Cali y pasó a ser victimario cuando sacó un cuchillo y atacó al ladrón, hiriéndolo de muerte. *“El oficial agregó que el hombre de 24 años que hizo justicia por mano propia fue capturado y a esta hora está en proceso de judicialización por el delito de homicidio”*. (Caracol Radio, 2016)

OCTUBRE 5 DE 2016: En Medellín, específicamente, en la comuna 10, fue registrado un caso, en el que una persona que habría intentado hurtar una moto, fue retenido por la comunidad para ser entregado a las autoridades, pero durante dicha espera, un hombre apareció y con un arma de fuego asesinó al presunto delincuente. Dicho caso fue publicado por Noticias Caracol, en donde se aseguró que testigos del hecho no quisieron dar detalles, debido a que en dicha ciudad es común que aparezcan ciudadanos armados para tomar la justicia por su propia mano. (Noticias Caracol, 2016)

OCTUBRE 30 DE 2016: Noticias RCN, registró la gran preocupación que existe en el aumento desproporcionado de los casos de justicia por mano propia en ciudades tales como

Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. Así pues, se denunció que en Medellín existe una página web con miles de seguidores, en donde la comunidad se dedica a subir videos de personas tomando la justicia por mano propia, como sanción social al hurto a motocicletas y vehículos.

Por su parte, en Cali, al ver el aumento de la inseguridad y del hurto con arma de fuego, la comunidad decidió a través de las redes sociales publicar los rostros de los delincuentes para llamar la atención a la seguridad. La noticia, además reflejó que en dicha ciudad, se presentan tres casos semanales de justicia por mano propia, en donde la comunidad prefiere no denunciar.

De igual modo, en la ciudad de Bogotá, son varios los casos, en los que la comunidad suele retener a los delincuentes e infringirles fuertes agresiones, golpes y torturas, generando la comisión de delitos graves como secuestro y homicidio, antes que acudir a las autoridades. Por último, el estudio de RCN, demostró que en Barranquilla se presenta a diario por lo menos 1 caso de justicia por mano propia, lo que genera mayor sensación de inseguridad entre la comunidad. Lo anterior, reflejó que la ciudadanía prefiere agredir al delincuente antes que denunciar, porque las autoridades no hacen nada y a pocas horas de haber sido retenido el presunto delincuente, es dejado en libertad. (Noticias Caracol, 2016)

ABRIL 1 DE 2017: Noticias Caracol, registra otra caso de justicia por mano propia, en donde un hombre que pretendía realizar un hurto, en el centro de Medellín, fallece cuando es sorprendido por la comunidad y atacado fuertemente por la misma, a golpes y con arma blanca. Según el registro periodístico, *“el hombre recibió una herida letal en el tórax, otra en el costado interno ocasionados con arma blanca y múltiples traumas en la cabeza, rostro y cuerpo”*. (Noticias Caracol, 2017)

JUNIO 7 DE 2017: En Pueblo Rico Risaralda, la comunidad capturó a cuatro (4) indígenas, los ataron a un poste, los torturaron y los desnudaron, porque según ellos habían sido sorprendidos en repetidas ocasiones hurtando. La noticia dada por Noticias Caracol, refleja que en el departamento, los casos de justicia por mano propia han aumentado, principalmente por dos (2) razones: La primera, porque los ciudadanos no denuncian y la segunda porque cuando lo hacen, las autoridades no toman los correctivos suficientes porque aparentemente son delitos menores, situaciones que genera una desconfianza y una desazón de impunidad en la comunidad. (Noticias Caracol., 2017)

JULIO 21 DE 2017: Un nuevo caso es registrado en el nororiente de Medellín, en donde un hombre que estaba siendo acusado de haber hurtado un bolso, es perseguido por otro que portaba un palo para agredirlo. El presunto delincuente, gritaba que él no había sido, sin embargo, el agresor no fue conmovido y con el palo le propinó fuertes golpes en el cráneo que le ocasionaron la muerte. (Noticias Caracol, 2017)

AGOSTO 29 DE 2017: En un barrio del Norte de Cali, el equipo periodístico de Noticias Caracol, registró un caso en el que una persona fue agredida presuntamente porque estaba vinculada con un hurto. La víctima, fue un hombre de 29 años, el cual recibió una puñalada de la enardecida comunidad en medio del ataque, que más adelante le ocasionó la muerte. El Coronel Henry Jiménez, Subcomandante de la policía de Cali, aseguró, *“Fueron varias personas, de acuerdo a lo que se ha podido establecer, ya que una acción de estas es como un detonante. Si alguien está atacando por un hurto, muchas personas ajenas al procedimiento también intervienen sin saber qué fue lo que pasó”*. (Noticias Caracol, 2017)

SEPTIEMBRE 15 DE 2017: Luego del fallecimiento de un menor de edad en un centro médico de Medellín, por presuntos maltratos físicos, la comunidad airada decide

agredir a la madre del menor y a su compañero sentimental, por los citados hechos. De acuerdo al registro periodístico, publicado por Noticias RCN, habían huellas en el cadáver del menor que señalan que podía haber violencia doméstica, razón por la cual *“cerca de 200 personas armadas con palos y piedras, intentaron hacer justicia por mano propia, pero la mamá del niño y la pareja fueron retirados de la vivienda, protegidos por la Policía”* (Noticias RCN, 2017)

OCTUBRE 20 DE 2017: Noticias Caracol, registró el caso en el que el propietario de un local comercial, luego de escuchar ruidos en plena madrugada, sorprende a unos delincuentes que intentaban hurtar de su negocio algunas bebidas alcohólicas y el dinero que reposaba en la caja registradora. Tras ver ello, el ciudadano decide sacar su arma de fuego y arremeter contra los delincuentes, ocasionándole la muerte a uno de ellos y dejando gravemente herido al otro. Al llegar la Policía, deciden capturar a la víctima que tras los hechos se convirtió en victimario y procesarlo por el delito de porte ilegal de armas, toda vez que el arma de fuego no contaba con salvoconducto. (Noticias Caracol, 2017)

OCTUBRE 23 DE 2017: Los hechos ocurrieron en el sector conocido como El Tabazo, sur del Valle de Aburrá – Medellín, en donde presuntos delincuentes que pretendían hurtar un vehículo de servicio público, fueron sorprendidos por habitantes de la zona, los cuales al percatarse de los hechos, decidieron despojar de sus prendas de vestir a los presuntos ladrones y agredirlos físicamente. (Noticias Caracol, 2017)

OCTUBRE 28 DE 2017: Un hombre que habría acabado de hurtar unas canastas al interior de un supermercado, fue agredido por algunos ciudadanos, según testigos de los hechos, en Bello Antioquia. El presunto delincuente, fue obligado a portar un cartel desnudo

corriendo por aproximadamente ocho (8) cuadras, perseguido por la comunidad, que airada lo agredía física y verbalmente. (Noticias Caracol, 2017)

OCTUBRE 29 DE 2017: Un joven de 26 años, en el barrio Alameda en Cali, fue agredido por la comunidad, propinándole varias heridas con arma blanca que al final desataron su muerte. El fallecido, abordó a un ciudadano que trabajaba en el sector, lo intimidó con un arma de fogueo e intentó hurtarle sus pertenencias. Sin embargo, la comunidad airada se lo impidió y le ocasionó la muerte. *"La reacción de la ciudadanía fue arremeter contra la integridad de esta persona, la cual resultó gravemente lesionada y de inmediato se evacuó a un hospital, donde falleció en la madrugada de este domingo a causa de las heridas, dijo el mayor Jonathan Sandoval, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana"* (Noticias Caracol, 2017)

Como se puede advertir, se consolidó un breve reporte de los registros periodísticos que evidenciaron los numerosos casos de justicia por mano propia que se registran a diario, los cuales, en virtud a la proximidad y a la gravedad de los hechos, tuvieron una relevancia tal que por ende fueron registrados. Así pues, se encontró que tan solo en el año 2015, de abril a noviembre, los medios de comunicación informaron de siete (7) casos; de enero a octubre del año 2016, se reportaron nueve (9) casos y de abril a octubre del presente año, se han registrado hasta la fecha, nueve (9) casos, siendo el mes de octubre del año de 2017 un referente trágico de violencia por mano propia toda vez que hubo cuatro (4) casos como se pudo observar en las noticias.

Sin embargo, valga la pena mencionar que estos son tan solo algunos de los innumerables casos que se viven a diario en nuestro país, pues lo cierto es que los índices de violencia en Colombia son supremamente altos y la ciudadanía desconfiada decide

simplemente acudir a la violencia, reportando numerosos casos de justicia por propia mano principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Influencia de los Medios de Comunicación.

Luego de transcribir los interminables casos registrados por los medios de comunicación, en donde los ciudadanos deciden acudir a la justicia por mano propia, es necesario dar una mirada a qué tan influyentes resultan siendo los medios de comunicación en una investigación judicial, para que al final desencadenen en un pensamiento generalizado en la comunidad de impunidad y ausencia de justicia.

Colombia, debe apoyar *“una presa libre pero responsable”*, en donde valga más un fallo judicial que una percepción mediática apoyada en simples suposiciones y verdades superficiales. Casos como los que se registran a diario, en donde los medios de comunicación cuestionan las decisiones judiciales y las califican de injustas, hacen que la percepción desfavorable de la ciudadanía hacia la justicia aumente y su desconfianza continúe igual. Con el fin de ejemplificar lo dicho, el pasado 12 de agosto del año 2017, Noticia RCN, bajo el titular *“Juez deja en libertad al subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá”*, informó que el coronel William Sánchez, que es investigado junto a otros 13 uniformados por su presunta responsabilidad en la muerte del profesor Javier Ocampo Cepeda en Cali, fue dejado en libertad por la jueza 37 de control de garantías tras considerar, que los uniformados no representan un riesgo para la sociedad y no existe un riesgo de no comparecencia. Dicho medio de comunicación, además, reveló que la Fiscalía 124 de derechos humanos de Cali, acusó a 9 de los 13 uniformados de golpear y posteriormente asesinar al profesor y alterar la escena del crimen, para lo cual, presentó 28 pruebas contra los policías, entre estas unos

panfletos que habrían puesto en el maletín del profesor asesinado y que eran alusivos a una banda criminal.

Al respecto, Noticias RCN, en ningún momento se toma el trabajo de transcribir algunos apartes de la motivación dada por la juez para tomar dicha decisión, ni mucho menos resalta cuál fue la labor investigativa o probatoria que la juez tuvo en cuenta en su valoración para llegar a tal determinación. Por el contrario, simplemente emite la noticia, generando en la comunidad una desazón de impunidad y de injusticia, puesto que, en sí el registro periodístico transcrito, sin tener en cuenta ningún debido proceso, señala a un condenado claro y a una víctima plenamente determinada.

Éste no es el único caso en el que los medios de comunicación irresponsablemente publican las noticias y transforman la realidad, buscando un impacto social negativo y olvidando sus deberes de velar por el bien común y de informar de manera clara, veraz, objetiva y sobre todo íntegra y oportuna.

“Sobre este aspecto, siempre he considerado que hay dos factores que afectan la relación entre los periodistas y los jueces: 1. La diferencia de ritmos entre el quehacer periodístico y el quehacer jurisdiccional, y 2. La complejidad de los procedimientos judiciales que dificultan la comprensión de “tiempo y momentos procesales. En el primer aspecto, mientras los sucesos en nuestro país ocurren a una velocidad vertiginosa que muchas veces no le deja tiempo al periodista, de detenerse en el examen de los hechos, pues tiene que moverse al ritmo del acontecer noticioso, el juez por su parte está obligado a examinar con cuidado, analizar, recoger pruebas, cotejarlas, llenarse de razones para evitar equivocarse y conservar el equilibrio entre la eficacia y las garantías del debido proceso. A

veces en esa labor, se tarda bastante, de manera que cuando llega a la conclusión que la sociedad espera ha pasado demasiado tiempo desde la ocurrencia del suceso, y, lo que es más grave aún, su conclusión puede resultar diferente a esa primera impresión que motivó la noticia, con la cual se refuerza la sensación de impunidad. En lo segundo, aún estamos lejos de tener reporteros suficientemente capacitados en materia jurídica para realizar la delicada labor de comprender la terminología de las providencias judiciales, interpretarla, transcribirla y transmitirla en lenguaje comprensible para el público en general, mucho más si tomamos en cuenta la cantidad de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás piezas jurídicas que ni siquiera los expertos conocen” (Garay, 2003, págs. 352-353).

Lo anterior, refleja la amplia responsabilidad que tienen a su cargo los medios de comunicación al momento de informar, pues es claro que cada detalle o juicio de valor que ellos decidan publicar en sus registros periodísticos, no sólo penetran de forma radical el grupo social, sino que además dejan rezagos de verdades parciales o de realidades inexistentes, pues entre más amarillista sea la noticia mucho mejor. De acuerdo a ello, es claro que la labor periodística y la labor judicial son ampliamente distantes, puesto que tal como se refirió en la cita anterior, un reportero tiene que velar por salvaguardar la oportunidad de la noticia, es decir, la actualidad de la misma, razón por la cual poco y nada le interesa ahondar en los hechos y en las pruebas de lo que realmente sucedió, sino que se da a publicar la nota con juicios de valor subjetivos; y no han sido pocos los casos, en los que –sobre todo en el ámbito penal- la sentencia es dictada primero en los medios de comunicación, antes que el aparato judicial pueda si quiera estudiar los elementos materiales probatorios. *“aun cuando se haya realizado una juiciosa investigación periodística, ésta no puede sustituir a las instancias*

judiciales y llegar a la conclusión de que la razón la tienen los medios y los equivocados son los jueces o magistrados” (Garay, 2003, pág. 357)

Lo dicho precedentemente, genera un caos social absoluto, toda vez que hoy por hoy la confianza se ha trasladado a los medios de comunicación y la sociedad cree más en la “condena” que éstos hacen antes que creer en la decisión de la autoridad judicial competente, pues la absolución de éste último es errada, impune e injusta, frente a las acusaciones, señalamientos y desaprobaciones que los medios hicieron frente a un determinado caso.

Ahora bien, la influencia mediática no se limita meramente al desastre social que pueden generar con una simple nota que entre líneas tiene juicios de reproche contra las decisiones de la administración judicial, sino que además tienen un poder de presión enorme frente a los fallos judiciales; se hace referencia al influjo que los medios de comunicación podrían tener en las decisiones que los jueces toman en casos concretos de importancia nacional, pues desde ya habría que decir que la opinión pública toma un papel tan protagónico, que terminan manipulando la justicia, generando a través de presiones y coacciones morales y sociales, fallos moldeados y decisiones poco objetivas, que hacen que el juez inconscientemente tome de una vez una posición y parcialice su decisión, por miedo a ir en contra de una opinión pública que no tendrá compasión a la hora de cuestionar una sentencia contraria a lo que esperan los monopolios periodísticos.

El caso de Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante que murió en la noche de Halloween del año 2010, ejemplifica la gran influencia y el daño que los medios de comunicación le pueden causar a una investigación judicial. Desde el momento en que se causaron los hechos, hasta el día en el que se dictó la sentencia absolutoria, esto es, el 20 de

febrero del año 2017, los medios no dejaron de presionar y de catalogar la muerte del joven Luis Andrés Colmenares como un homicidio que habría sido planeado en coautoría por Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno. Fueron casi siete (7) años en los que ningún detalle fue saltado por los medios de comunicación, tanto así que, en agosto del año 2012, la Fiscalía decide solicitar al Juez que restrinja el acceso de los medios en el juicio, toda vez que tal como lo reveló el periódico del Espectador en dicha fecha, *“El organismo investigativo reconoce que, en Colombia, la libertad de prensa incluye el derecho a escarbar en cualquier proceso judicial. El caso Colmenares, sin embargo, parece haberse salido de proporciones. A la Fiscalía le inquieta que las universitarias ya perdieron la presunción de inocencia como consecuencia de los juicios realizados por fuera de los estrados judiciales. La entidad, la misma que las llamó a juicio por considerar que cuenta con las pruebas para responsabilizarlas de la muerte del joven estudiante, señaló que Moreno y Quintero, al parecer, ya fueron condenadas a pesar de que no existe aún una sentencia que así lo indique”* (El Espectador, 2012). En efecto, todo el País conoció el caso Colmenares y las disputas entre las partes públicamente, tanto que socialmente se adoptó la posición condenatoria que los mismos medios se encargaron de construir. *“Para la fiscal Zamora, conservar la presunción de inocencia de Moreno y Quintero hasta que un fallo diga lo contrario no es el único propósito de esta medida. Proteger a la familia Colmenares también lo es. Se les ha presentado indiscriminadamente sin respetar su dolor, se les ha sometido al escarnio público y al ataque, resaltó la alta funcionaria”* (Ibíd.). Así pues, la sociedad en general y los medios de comunicación en particular tomaron partido desde el inicio condenando a las implicadas y apoyando a la familia Colmenares, tal como los padres de Luis Andrés Colmenares lo expresaron, luego de conocer la medida de restricción mediática solicitada por la Fiscalía. *“Los padres de Luis Andrés Colmenares, sin embargo,*

creen que de no haber sido por los medios al caso de su hijo se lo estaría carcomiendo la impunidad: Nosotros hemos recibido de los medios apoyo y solidaridad para que el caso esté donde está, con el apoyo por supuesto de la Fiscalía y la Dijín. De todas maneras, yo soy respetuoso de las decisiones de la Fiscalía, le dijo a El Espectador Luis Alfonso Colmenares” (Ibíd.).

Ahora bien, son los mismos medios de comunicación los que reconocen su influencia negativa en el caso citado, puesto que, de acuerdo a un artículo elaborado también por el periódico del Espectador, el 26 de junio del año 2012, *“los límites se cruzan, por ejemplo, en el caso de Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante que murió por causas que aún no han sido confirmadas, en el cual hay una serie de sospechas e indicios. La justicia debe encargarse, no nosotros, de hacer claridad. Un testimonio de José Wílmer Ayala envió a la cárcel, de manera preventiva, al sospechoso Carlos Cárdenas. Pero en esto hay menos de lo que pretende verse: es tan sólo una detención preventiva. Una medida de aseguramiento. Sin embargo, los medios en nuestra labor saltamos a entrevistar al nuevo testigo, a sacarle más datos, a ver en dónde se quiebra y por qué lado se puede extraer una conclusión que anticipe el trabajo de la justicia”* (El Espectador, 2012).

La justicia mediática, afecta a los operadores judiciales que ven permeadas sus decisiones porque gracias a la información que los medios le brindan a la sociedad, ésta espera una respuesta específica del aparato judicial; sin embargo, debemos concluir que aun a pesar de las presiones y de la humanidad del juez, éste debe mantenerse inmune e imparcial ante los casos que llegan a su despacho, por más escandalosos o atrayentes que resulten siendo a la opinión pública, tal como sucedió en el caso Colmenares, entre otros tantos, en donde la Juez del Juzgado Once (11) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de

Bogotá, Paula Astrid Jiménez, de forma objetiva, valiente y podríamos decir que imparcial, se da a analizar el caso profundamente y a extraer una convicción plena más allá de toda duda razonable, no por los medios de comunicación, sino por los elementos materiales probatorios, de que el joven Colmenares murió no por homicidio, sino por asfixia en agua, coadyuvado por una intoxicación etílica; argumento que desencadenó en la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero.

Dicha decisión, desde luego, fue catalogada como injusta no sólo por los padres del causante, sino también por los medios de comunicación en general, puesto que, en noticia publicada por la Revista Semana, el 20 de febrero del año 2017, verbigracia, se ahonda sobre la tesis de la fiscalía y se hace una mención respecto a la defensa, pero en ningún momento se mencionan los argumentos e incluso la *ratio decidendi* que llevó a la juez a tomar la determinación de absolver a las jóvenes universitarias.

El hecho de que los medios de comunicación no muestren al público las motivaciones reales de las sentencias que llevaron a los jueces a tomar una posición final en un caso concreto, hacen que indirectamente se ponga en tela de juicio los fallos y se deje un leve sentimiento de impunidad en la comunidad, pues el artículo previamente mencionado, finaliza diciendo *“A esta hora, la juez de conocimiento da lectura al extenso fallo, en el que resolverá el enigma que rodeó a esta historia por años. Aunque la justicia puede determinar que existen dudas sobre la forma como murió Colmenares, la respuesta al interrogante ¿fue crimen o accidente? aún no ha sido contestada”* (El Espectador, 2012).

Para finalizar, sería indiscutible afirmar que la opinión que hoy por hoy los ciudadanos tienen acerca del sistema judicial en Colombia, se debe en gran parte a la mala imagen que

los medios de comunicación se han encargado de crear en la sociedad, sin embargo, con lo anterior, no se quiere dar la impresión de que lo que se promueve es el desconocimiento de la dura realidad que nos abruma o el silencio mediático ante las verdaderas injusticias e impunidades, sino que lo que se pretende lograr, es llamar la atención a los mismos, para que sean mucho más responsables en cada registro periodístico que deciden publicar, para que dejen a un lado las verdades parciales que pululan en los medios a diario y para que se empiecen a crear escenarios académicos, en los que los reporteros puedan ser educados y formados, absolviendo tantas “ignorancias” que manejan como insignificantes. Lo anterior, reconociendo el papel protagónico que desempeñan los medios de comunicación en nuestra sociedad, donde no solamente informan, sino que además forman opinión, critican, cuestionan y construyen confianza o desconfianza ciudadana frente al ente estatal.

PROPUESTAS DE CAMBIO Y CONCLUSIONES.

Llegando al final de la presente monografía, es de notar claramente que los índices de violencia al parecer aumentan y la justicia disminuye. Es realmente lamentable que en un país como el nuestro, en pleno siglo XII, ni siquiera el sistema judicial funcione. Sin embargo, ningún sentido tendría, dar a conocer el presente estudio, con un contenido crítico y meramente problemático, sin ofrecer propuestas de cambio o herramientas de solución.

Así pues, a continuación se mostrarán algunas conclusiones que se extraen de cada uno de los capítulos y conjuntamente lo que se propone, con el fin de que el presente aporte académico trascienda aulas de clase y llegue hasta una sociedad con sed y hambre de justicia.

Primero: Lo que habría que afirmar inmediatamente, es que de acuerdo al Capítulo I, los altos índices de congestión judicial, resultan siendo esenciales y determinantes para que el fenómeno de justicia por mano propia aumente desmesuradamente, razón por la cual, su correlación termina siendo directamente proporcional, pues entre más aumente la congestión judicial, se tendrá mucha más desconfianza en el sistema y por ende los casos de justicia por mano propia aumentarán.

Dicho esto, es evidente que lo primero que se debe hacer es empezar a descongestionar el sistema judicial, pero ¿cómo hacerlo?, pues bien, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

a. Verdadera Oralidad: Lo que desde siempre se ha intentado, pero que continuamente ha fracasado, es implementar un verdadero sistema de oralidad, en donde un proceso judicial tenga mínimas etapas escritas y por el contrario, en su mayoría se desarrolle en audiencias, garantizando principios básicos como la celeridad y la concentración. No

obstante, como ya fue visto, ello nunca ha funcionado plenamente, porque pese a que se encuentran vigentes leyes que han impulsado dicho sistema (la Ley 906 del 2004 y con la ley 1564 del 2012), los despachos y operadores judiciales, aún no están preparados para semejante cambio. Mucho menos cuando antes de implantar el sistema que garantice la resolución de un conflicto en una (1) o máximo dos (2) audiencias, se debe preparar el camino con otras medidas de descongestión.

b. Contratación de operadores judiciales: Una justicia descongestionada, requiere de una mayor oferta judicial, que se traduce en la contratación de más personal que pueda ayudar a controlar la inmensa demanda de procesos que llegan a diario por reparto. Lo anterior, no solo ayudaría a desahogar el aparato judicial y a demostrarle a la ciudadanía una justicia celera, sino que también aliviaría un poco las cargas laborales, eliminando el exceso de trabajo entre los funcionarios y con ello la excusa de mora judicial que ha creado procesos tediosos y eternos. Así mismo, la necesidad de mayor número en el personal que conforma la rama judicial, abre las puertas para que el gran número de estudiantes de derecho que se gradúan de manera permanente encuentren mayores oportunidades laborales, y por ende, muchos de ellos se alejen de la comisión de delitos, pues tal como lo indicaría en su oportunidad Emile Durkheim, cuando la sociedad y en sí el Estado ofrece oportunidades diferenciales legítimas, el sujeto conforme con ello, se aparta de los comportamientos desviados y actúa correctamente en el grupo social, pero cuando jóvenes recién graduados, sin experiencia y sin oportunidades para suplir sus necesidades básicas, ven que la sociedad no les brinda un apoyo, simplemente se convierten en delincuentes al principio ocasionales, pero más adelante habituales.

La contratación de operadores judiciales, trae consigo desde luego una capacitación exhaustiva a los mismos para mejorar su productividad y además implicaría la implementación de nuevas técnicas judiciales, tales como la utilización de medios electrónicos que faciliten a los usuarios el acceso a la administración de justicia y a los procesos judiciales.

c. Disminución en la carga laboral: Tal como se pudo concluir en el capítulo I, el problema de la congestión judicial, se debe en su gran mayoría, a la interposición desmesurada de acciones constitucionales, tales como la tutela y el habeas corpus; pues dichos mecanismos de protección, tienen un nivel de prioridad tan alto, que obligan a los jueces a detener el trámite de los demás procesos que tienen bajo su conocimiento para fallar las precitadas acciones. Así pues, teniendo en cuenta que el porcentaje de acciones de tutela y habeas corpus que ingresa a reparto a diario es supremamente alto, es menester no sólo contratar mayor número de operadores judiciales, sino la creación de jueces constitucionales que se encarguen únicamente de conocer tanto acciones de tutela como de habeas corpus. Lo anterior, desde luego implica quitarle la competencia a todos los jueces de la república de conocer de dichas acciones, y en su lugar asignarle la misma a solo un grupo de jueces, previniendo el atraso judicial que se vive a diario, en donde los jueces de la república se dan a detener procesos ordinarios, para fallar acciones constitucionales que en muchos de los casos resultan siendo improcedentes.

d. Desprocedimentalización y verdadera recodificación: Emile Durkheim explicaría en su Teoría de la Anomia que las personas cometen delitos, porque carecen de normas básicas de convivencia, situación que los lleva a actuar sin solidaridad. En este

sentido, paradójicamente aunque Colombia está llena de normas jurídicas, la ciudadanía las desconoce y lamentablemente adolece de reglas básicas en el grupo social.

El hecho de que el mar interminable de códigos, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, entre otros, no disminuyan los índices de criminalidad en el país, demuestra que la solución no está en el populismo punitivo y mucho menos en la expedición de normas jurídicas, pues ello sólo conlleva al desorden social y a la confusión del operador judicial.

Así pues, Lo que se propone es que se consoliden en realidad unos pocos códigos que contengan unos mínimos artículos y que se encarguen principalmente de prevenir, pero en el evento en el que deban sancionar ciertas conductas, dichas penas sean respecto a pocos comportamientos, que afecten de forma grave el grupo social y que su sanción sea tan rigurosa, estricta y tajante, que la mera sanción genere una prevención social. En Colombia, es necesario una desprocedimentalización y una recodificación del sistema legislativo, que busque no sólo la unificación de pocas normas, sino la elaboración de una política criminal estatal poco sancionadora y mucho más preventiva.

Dicha propuesta y conclusión, es corroborada con ejemplos internacionales que demuestran que con pocas leyes, se puede hacer un país mucho más seguro y sobre todo justo. Países tales como Noruega, Suiza, Dinamarca, Islandia, Singapur y sobre todo Japón, demuestran que el secreto no está en la innumerable legislación existente, pues en los países mencionados, es poca la legislación y aun así los índices de criminalidad reportados, son realmente bajos. Aún con pocas leyes, pero realmente radicales y tajantes que sancionan al sujeto, la sociedad se siente segura en su país, pues por ejemplo en Japón, las pocas leyes existentes, son sumamente estrictas, condenando en caso de homicidio verbigracia a la pena

capital. Lo mismo sucede en Suiza, donde solo existen treinta (30) leyes y los índices de criminalidad son realmente bajos.

Singapur, verbigracia, en 1960 era uno de los países más violentos del mundo y ocupaba los primeros puestos internacionales con los índices de criminalidad más altos. Los accesos carnales violentos y feminicidios eran noticia de todos los días y la impunidad, junto con la corrupción llegaban a sus niveles más altos. En el año 2004, subió al poder Lee Hsien Loong, quien transformó el país radicalmente. Por ejemplo, se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores. Así mismo, se decretó la pena de muerte para toda figura pública que fuera condenada por corrupción y respecto a los delitos de abuso sexual y delitos menores, se permite publicar el nombre de los violadores, e incluso televisar los juicios. Hoy, Singapur es uno de los países más educados, prósperos y seguros del mundo, en seis (6) meses, las cárceles pasaron de 500.000 presos a tan solo 50 y la ciudadanía ha forjado un cambio radical en su conducta, llevando al país a los menores puestos, en los índices de criminalidad y violencia entre los países asiáticos y en el mundo.

Segundo: Tal como se reveló en el capítulos II, la razón por la cual el fenómeno de justicia por mano propia pervive, es por la inmensa desconfianza en el aparato judicial, razón por la cual, una vez descongestionada la justicia, el siguiente paso a seguir sería trabajar por la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema judicial, pues con ello, el ciudadano promedio ante una controversia, pensaría primero en acudir a las autoridades competentes y con ello, el fenómeno de justicia por mano propia sería erradicado definitivamente. Para ello, es menester tener en cuenta:

a.Importancia jurídica de los casos de mínima cuantía: Tal como lo diría la Escuela de Lyon a finales del siglo XIII y a principios del siglo XIX, con el médico francés y criminólogo Alexandre Lacassagne, son las sociedades corruptas y pobres (refiriéndose a aquellas que no ofrecen oportunidades laborales a sus asociados), las promotoras del delito. En ese sentido, el autor afirmaba que “*las sociedades tienen los delincuentes que merecen*”, pues tanto éstas como el Estado, son los responsables de que en la comunidad existan delincuentes que dañen al grupo social. En efecto, cuando el Estado decide ser indiferente y no actuar oportunamente ante un delito por mínimo que sea, está impulsando y apoyando indirectamente la comisión del mismo, situación que hace que por ejemplo las cárceles que son reflejo de la sociedad en la que se vive, estén hacinadas de personas reincidentes.

La descongestión supone que la justicia le brinde importancia a los casos que a simple vista no revisten alguna trascendencia económica, pues resultan ser de mínima cuantía. Lo anterior, debido a que muchas veces las personas no acuden al sistema judicial porque piensan que su caso en concreto no es importante, porque se trata de un “simple hurto de celular” o de una “limitada letra de cambio” y ese pensamiento surge de acuerdo al mensaje que la justicia congestionada les envía.

Sí un país es incapaz de resolver los pequeños conflictos, con dificultad podrá solucionar las grandes controversias de sus ciudadanos. Así, es necesario que el ciudadano vea que existe un sistema judicial que se preocupa por sus problemas, por mínimos que sean, que existen terceros imparciales que desean escuchar y solucionar sus controversias y que existe una justicia que hace lo que sea para dar una respuesta oportuna a quienes acuden a la jurisdicción. Para lo anterior, es menester dar aplicación a la teoría de la saturación criminal,

propuesta por Enrico Ferri hace mucho tiempo atrás, en donde fracción por fracción se vaya solucionando, hasta alcanzar un cubrimiento nacional en cuando a justicia se refiere.

Tercero: Ahora bien, teniendo en cuenta que una vez recuperada la confianza ciudadana en el sistema judicial, éste se sentirá seguro y por lo tanto tendrá la iniciativa de acudir al aparato jurisdiccional, porque corroborará los resultados efectivos y será testigo de las consecuencias que verbigracia le generan a un ladrón el haber hurtado un bien; no se quiere pasar por alto lo mencionado en el Capítulo III, según el cual lo ideal no es que los ciudadanos continúen interponiendo demandas, denuncias, tutelas y/o habeas corpus, derechos de petición, entre otros, sino que aun cuando la ciudadanía encuentre respaldo en el Estado, la misma no vea la necesidad de acudir ante la jurisdicción, porque la prevención y el control social, erradicarían las posibilidades de delinquir y de vulnerar los derechos ajenos.

En efecto, el objetivo no es descongestionar la justicia, para que la misma siga teniendo la misma demanda de procesos judiciales, o recuperar la confianza ciudadana para que los conflictos sigan creciendo en número, pero en lugar de resolverlos por mano propia, decidan acudir a las autoridades competentes; sino que lo que se pretende es que en efecto el nivel de conflictividad en Colombia disminuya y con ello los índices de criminalidad, razón por la cual, las propuestas de solución, que desde luego fueron extraídas del Capítulo III son:

a. Implantación de una verdadera cultura ciudadana: A lo largo del presente documento se ha reiterado que es muy necesario que el colombiano promedio, tenga una formación profunda en cultura, respeto y tolerancia hacia el otro, toda vez que, hoy por hoy el ciudadano es egoísta y poco le interesa la vida del prójimo. El Estado debe centrarse en la educación que se le está prestando a los niños, porque es ahí donde se implantan los

verdaderos principios y valores, razón por la cual, es menester que primero se proteja a éste, para que cuando crezca, no sea un adulto problema, sino uno que dé ejemplo a los demás.

Al respecto, valga la pena mencionar lo ocurrido en Reino Unido recientemente, donde el Secretario de Desarrollo Internacional, Michael Bates, presentó su carta de renuncia al Parlamento tras sentirse absolutamente avergonzado por haber llegado dos (2) minutos tarde a la Cámara y por no haber podido responder una pregunta sobre la brecha salarial, formulada por la diputada Ruth Lister. Aduciendo descortesía y ante una envidiable transparencia y sinceridad, Bates honorablemente asume su responsabilidad, porque tras su retraso otro miembro del parlamento tuvo que responder a dicha pregunta y decide renunciar alegando una grave falta al principio ético según el cual *“los diputados tienen que alcanzar los niveles de cortesía más altos posibles”*. (El País., 2018) Dicha noticia, desde luego conmociona al mundo y ofrece un gran ejemplo de la verdadera cultura ciudadana impuesta en un País, pues desde ya se debe decir que el solo hecho de asumir la puntualidad con tal nivel de cortesía y de respeto hacia el otro, genera tal nivel de confianza en la ciudadanía, que ésta en lugar de quejarse o decepcionarse de sus mandatarios, los aplaude y se enorgullece de tener a tan honorables hombres asumiendo un cargo público con seriedad, responsabilidad y transparencia. No obstante, la pregunta inmediata que se deja al lector es ¿Qué podría ser descortés para un colombiano promedio, cuando es experto en llegar tarde a cualquier cita?

Además de lo anterior, se resalta que el ente estatal debe aprovechar no solo los espacios académicos, sino también aquellos en los que los ciudadanos toman roles específicos, para erradicar la violencia y la delincuencia como forma de supervivencia actual. Apoyados en lo que sostenía la Escuela Intersicológica, específicamente Gabriel Tardé, los

ciudadanos al ver que la delincuencia es “normal” y que además representa una forma viable y mucho mejor que cualquier otra manera lícita, de suplir las necesidades y de vivir en comunidad, lo que hacen es imitar al ladrón, al asesino o al violador, pues ven que esa conducta es aceptada por todos e incluso admitida por un Estado pasivo que no interviene ni siquiera para sancionar, por lo cual, deciden repetir la misma. Razón por la que, teniendo en cuenta las imitaciones lógicas, el Estado, debe implantar una cultura ciudadana que el sujeto pueda imitar, en donde lo único que éste vea sea educación, respeto, tolerancia, oportunidades lícitas de empleo, justicia, responsabilidad ciudadana y estatal, confianza, seguridad, entre otras; para que lo que resalte en la sociedad colombiana no sea el narcotráfico y el conflicto armado, sino los valores y principios citados, que con un arduo trabajo, pueden ser implantados permanentemente.

b. Promoción de Medios Alternos de Solución de Conflictos: Tal como se indicó en los Capítulos II y III, el problema ha sido atacado, por una causa equivocada, puesto que la dificultad no radica en determinar ¿cómo controlar los procesos judiciales?, sino en ¿cuál es la razón de tanta conflictividad en Colombia?

Así pues, partiendo de la premisa según la cual lo importante es disminuir el nivel de conflictividad en el país, es menester que la ciudadanía empiece a pensar en que no todas las controversias que surgen, deben ser llevadas necesariamente ante un juzgado, sino que, por el contrario, el Estado debe desarrollar la capacidad ciudadana de resolver los conflictos por otros medios alternos, tales como la conciliación, la transacción, la mediación, el arbitramento, la amigable composición, el simple acuerdo de voluntades, el arreglo pacífico, entre otros, en los cuales, aun cuando interviene un tercero, por una parte, éste es distinto a un juez de la república, lo cual desde luego ayuda a descongestionar el aparato judicial, y por

otra, ayuda a que la controversia sea solucionada de forma pacífica, lo cual permite que la justicia por mano propia y con ella la violencia sean erradicadas en nuestra sociedad.

Colombia debe entender que la violencia no hace parte de los recursos al momento de solucionar un conflicto, sino que es de ciudadanos, presentar fórmulas de acuerdo y solución, efectivas, respetuosas y sobre todo justas.

Cuarto: Una de las grandes conclusiones que se extraen de todo el presente documento, es la importancia y la necesidad de estructurar un nuevo código, no punitivo, sino preventivo, en donde se llegue al origen de las conductas delictivas y se eviten las mismas. Pues la experiencia y la historia nos ha demostrado que la solución no está en el aumento de normas sancionatorias o en el acrecimiento de las penas, sino que es menester realizar un estudio exhaustivo en el que el ciudadano NO vea como opción factible acudir al delito, o porque el Estado le proporciona todas las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida y salir adelante, o porque en el remoto caso donde decida acudir al delito, la sanción es tan radical y definitiva, que los ciudadanos pensarían dos (2) veces dicha determinación.

Valga la pena reiterar, lo dicho en el capítulo número II, lo importante no es el populismo punitivo, sino la prevención delictiva. Es decir, sí existe una problemática con ácido, prohíban el expendio de dichas sustancias en el mercado; sí el problema es colarse en Transmilenio, además de multas, suspendan al ciudadano, para que no pueda volver a usar dicho transporte por un periodo; sí la dificultad radica en accidentes de tránsito por ciudadanos embriagados, aumenten el costo de las bebidas alcohólicas y prevengan así que las personas decidan consumir las mismas, pues tal como lo decía la Escuela Positiva en su momento, la pena debe ser impuesta no como castigo, sino como defensa social, buscando

que ninguna persona tomara la justicia por mano propia, sino que el sujeto delincente, se rehabilitara, apartándolo de la sociedad.

Quinto: Por último, valga la pena mencionar que en el estudio realizado en el Capítulo III, se demostró que los medios de comunicación han sido muy influyentes en la imagen negativa que los ciudadanos tienen acerca del sistema judicial, razón por la cual para concluir ésta monografía, debe recordarse que los medios en efecto, tienen como función **INFORMAR, NO JUZGAR**, razón por la cual ha de rechazarse todo juicio de valor subjetivo que realicen en cada registro periodístico, puesto que los mismos, muchas veces irresponsablemente, deciden presentar notas amarillistas que reflejan verdades parciales y opiniones convenientes. En efecto, de ningún modo se pretende restringir la libertad de prensa, sino formarla en lo que a Derecho corresponda, para que la misma pueda informar y comunicar a la ciudadanía, no decidir o tomar postura sobre determinado asunto, porque se recuerda que ellos son comunicadores sociales y periodistas, no jueces o magistrados.

Concluyendo, cada franja, noticiero, programa de opinión, magazín, emisión, frecuencia radial, entre otros que contienen los medios de comunicación, debería tener un grupo de abogados que pueda ilustrar **objetivamente** las notas que implican a la rama judicial y temas de Derecho en general, para que no se mal interprete la decisión del juez de determinó no imponer la medida de aseguramiento o reducir la pena, absolver o condenar, archivar, precluir, ordenar el desistimiento tácito, suspender el proceso, entre otras providencias; pues de esta forma se le pueda transmitir al ciudadano una percepción de justicia y no de inseguridad o desconfianza.

Referencias

- Abascal Carranza, S. (2014.). *Derechos Humanos, Seguridad y Justicia*. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/419/5.pdf>.
- Alta consejería presidencial para la seguridad y convivencia. . (2008-2013.). *Arquitectura Institucional para la seguridad ciudadana*. Bogotá.: Naciones Unidad; Cámara de Comercio de Bogotá.
- Amnistía Internacional. (2016-2017.). *La situación de los derechos humanos en el mundo. Informe*. Londres.: Amnesty International Ltd.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991.). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2013). *Análisis de los homicidios en seis países de América Latina*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- BBC MUNDO. (2013). Japón está entre los 4 países con la menor tasa de homicidios del mundo. . *BBC MUNDO*.
- BBC MUNDO. (3 de Diciembre de 2013). Por qué hay tan pocos crímenes en Islandia. *BBC MUNDO*.
- Beuchat, S. (25 de Noviembre de 2017). Así se vive en Dinamarca, el país más feliz del mundo. *El Tiempo*.
- Boaventura, D. S., & García Villegas, M. (2001.). *El caleidoscopio de las justicias en Colombia*. (2001. ed.). Bogotá., Colombia.: Colciencias. Universidad de lo Andes. Universidad Nacional de Colombia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- C-154 (Corte Constitucional. 31 de Marzo de 2016).
- C-258 (Corte Constitucional 7 de Mayo de 2013).
- Cámara de comercio de Bogotá. (1990.). *Un breve diagnóstico de la administración de justicia en Colombia*. Bogotá.: Instituto Ser de Investigación.
- CARACOL . (27 de Febrero de 2017). Cancillería confirma ejecución de primer colombiano por narcotráfico en China. *Caracol Radio*.
- Caracol Radio. (29 de Septiembre de 2016). Víctima de atraco en transmilenio mató al ladrón que le robó. Bogotá, Colombia. Obtenido de http://caracol.com.co/emisora/2016/09/29/bogota/1475145634_273508.html.
- Carnelutti, F. (1989). *Cómo se hace un proceso*. Bogotá: Temis S.A.

- Clarín Mundo. (12 de Febrero de 2017). Por falta de presos, Holanda les alquila sus cárceles a otros países. *Clarinmundo.com*.
- Colprensa. (22 de Diciembre de 2017). Tasa de homicidios en Colombia bajó en 2017, aunque se esperaba mayor reducción. *El País*.
- Comisión Colombiana de Juristas. (2017). *Organizaciones y movimientos que llevamos a la CIDH, nuestras preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Colombia*. Bogotá.
- Concha Cantú, H. (2002). *Eficacia de la administración de justicia*. . México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Consejo Superior de la Judicatura. (2005.). *Descongestión de la Jurisdicción Civil*. (Primera ed.). Bogotá.
- Consejo Superior de la Judicatura; Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2009). *Convenio Interadministrativo Específico No. 183 de 2007*. . Bogotá.
- Coronado Britto, X., & Valencia Nieto, D. G. (2009.). *La congestión judicial en Colombia*. Bogotá.: Pontificia Universidad Javeriana.
- Corporación Excelencia en la justicia. . (1998-2016.). *El estado de nuestra justicia*. Bogotá.: Consejo Superior de la Judicatura - SIERJU.
- Cristancho, F. (2015). Justicia o linchamiento, Cuál es el límite? *Semana*. Obtenido de <http://www.semana.com/nacion/articulo/linchamiento-ladrones-por-que-en-colombia-hay-justicia-por-la-mano-propia/429908-3>.
- Cuéllar M, R. (2011). *Seguridad, justicia y derechos humanos: Una propuesta desde la función policial con énfasis en los derechos de las víctimas*. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Datos Macro. (8 de Febrero de 2018). *Expansión / DatosMacro.com*. Obtenido de Holanda - Índice de Paz Global: <https://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global/holanda>
- Defensoría del Pueblo. (2016-2017.). *Informe de riesgo*. Colombia. .
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (Septiembre de 2017). Gran Encuesta Integrada de Hogares. *Boletín Técnico*. Bogotá. , Colombia.
- Departamento Nacional Administrativo de Estadística. (Enero de 2017). Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana. *Boletín Técnico*. Bogotá D.C., Colombia.

Dueñas Mendoza, L. (2007-2011). *Descripción epidemiológica del fenómeno de violencia interpersonal Colombia*. . Bogotá.

El Colombiano. (1 de Noviembre de 2015). Por falta de presos, Holanda decidió alquilar sus cárceles. *El Colombiano*.

El Espectador. (22 de Agosto de 2012). Caso Colmenares: "Medios han afectado la investigación". Obtenido de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/caso-colmenares-medios-han-afectado-investigacion-articulo-369494>

El Espectador. (26 de Junio de 2012). Justicia Mediática. Obtenido de <https://www.elespectador.com/opinion/editorial/justicia-mediatica-articulo-355584>

El Espectador. (7 de Junio de 2015). La justicia por mano propia. Obtenido de <https://www.elespectador.com/opinion/editorial/justicia-mano-propia-articulo-565131>

El Espectador. (31 de Mayo de 2016). La temible justicia por mano propia. *El Espectador*.

El Espectador. (25 de Julio de 2016). Otro caso de justicia por mano propia: mujer atropelló y mató a presunto ladrón en Cali. Obtenido de <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/otro-caso-de-justicia-mano-propia-mujer-atropello-y-mat-articulo-645330>

El Espectador. (22 de Septiembre de 2017). El cara a cara entre Gustavo Moreno y Musa Besaile.

El nuevo siglo. (17 de Septiembre de 2017.). Hay 11 jueces por cada 100 mil habitantes en el país. Obtenido de <http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-colombia-solo-tiene-10-95-jueces-por-cada-100-mil-habitantes>

El País. (1 de Febrero de 2018). Un lord dimite "por vergüenza" tras llegar dos minutos tarde al Parlamento británico. *El País*.

El Tiempo. (13 de Septiembre de 2014). La justicia, en su nivel más bajo de imagen favorable. *El Tiempo*.

El Tiempo. (31 de Agosto de 2017). Imagen de la justicia y los partidos, en su peor momento. *El Tiempo*.

El Tiempo. (26 de Diciembre de 2016). Cada 3,5 minutos se presenta una tutela por la salud. Obtenido de <http://www.eltiempo.com/vida/salud/tutelas-por-vulnerar-el-derecho-a-la-salud-en-colombia-48516>

- Fiscalía General de la Nación. (2015 - 2016.). *Censo delictivo*. Colombia. Obtenido de <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Boleti%CC%81n-censo-delictivo-2016-Final.pdf>
- Flores, A. T. (2002.). *El caso del Estado de Morelos*. México.
- Garay, J. L. (2003). *El papel de la desjudicialización en un Estado Social de Derecho a propósito de la justicia colombiana*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- González Cuervo, M. (11 de Octubre de 2013). Justicia pronta, pronto! *El Tiempo*.
- González Mariscal, O. (2002). *Eficacia de la procuración de justicia*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Gossaín, J. (21 de Julio de 2017). Francamente ¿Lo del 20 de julio fue una revolución o una pelotera? *El Tiempo*.
- Guarín, R. (2017). Zanahoria y garrote. *Semana*.
- Hobbes, T. (1651). *Leviatán*.
- Institute for Economics & Peace. (2016). *Global Peace Index*. New York.
- Institute for Economics & Peace. (2017). *Global Peace Index*. New York.
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2015.). *Forensis 2014 Datos para la vida*. Bogotá.: Imprenta Nacional.
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2017.). *Forensis 2016 Datos para la Vida*. Bogotá.: Imprenta Nacional.
- Islas, G. (2002). *La justicia por propia mano y la recuperación de nuestra memoria*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Jiménez de Cisneros, J. (1959.). *Los hombre frente al derecho*. Madrid.: Aguilar.
- La Nación. (7 de Enero de 2016). Justicia por mano propia. Obtenido de <http://www.lanacion.com.co/2016/01/07/justicia-por-mano-propia/>
- La Rota, M. E., Lalinde Ordoñez, S., Santa Mora, S., & Uprimny Yepes, R. (2013.). *Ante la justicia: Necesidades jurídicas y acceso a la justicia en Colombia*. Bogotá.: Colección de justicia.
- Lagos E, M., Becerra H, V., Cardona L, J., Guerrero B, J., Medina M, P., & Murillo H, J. (2002). *Dos estudios sobre la justicia en Colombia*. . Cali: Universidad Libre.
- Ley 1098. (Congreso de la República. 8 de Noviembre de 2006).

- Ley 1761. (Congreso de la República. 6 de Julio de 2015).
- Ley 1801. (Congreso de la República. 29 de Julio de 2016.).
- Ley 1826. (Congreso de la República. 12 de Enero de 2017).
- Ley 270 , Artículo 1 y 2. (Congreso de la República. 7 de Marzo de 1996).
- Ley 599. (Congreso de la República. 24 de Julio de 2000.).
- Ley 906., Ley 906. (Congreso de la República. 31 de Agosto de 2004).
- Liu Wei. (28 de Septiembre de 2015). *Spanish. People.Cn*. Obtenido de La tasa de homicidio de China entre las más bajas del mundo. :
<http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/0928/c31614-8956447.html>
- Locke, J. (1689). *Carta sobre la tolerancia*. Madrid: Edición a cargo de Pedro Bravo Gala.
- López Blanco, H. F. (2003). *El ejercicio de la profesión de abogado frente a la administración de justicia*. Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Low, H. (8 de Enero de 2017). Cómo hizo Japón para casi erradicar los crímenes con armas de fuego? *BBC MUNDO*.
- Lucy Ash. (12 de Noviembre de 2016). La insólita crisis de Holanda: la escasez de delincuentes. *BBC MUNDO*.
- Marthe M, A. M. (2011). *Descripción epidemiológica del fenómeno de violencia interpersonal Colombia. Comportamiento del homicidio en Colombia*. Bogotá.: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- Martínez Bullé, G. V. (2002). *Seguridad y Justicia como Derechos Humanos*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Monsiváis, C. (2002). *Justicia por propia mano*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Moreno Barreto, J. D., & Dulce Romero, L. (30 de Mayo de 2017). Menores delincuentes, un problema mayor. *El Espectador*. .
- Moreno Moreno, L. A., & Malagón Martínez, L. Á. (2008.). *Unificación de procedimiento y sus términos procesales en materia civil como solución a la congestión de despachos judiciales en Bogotá D.C*. Bogotá.: Universidad Gran Colombia.
- Noticas Caracol. (30 de Octubre de 2016). Casos de justicias por mano propia, cada vez más frecuentes en Colombia. Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali, Colombia.

Obtenido de <http://www.noticiasrcn.com/videos/casos-justicia-mano-propia-cada-vez-mas-frecuentes-colombia>

- Noticia Caracol. (11 de Julio de 2017). Así fue el paseo de la muerte de usuaria de Cafesalud en busca de atención médica. *Noticias Caracol*.
- Noticias Caracol. (21 de Octubre de 2015). Casi linchan a joven señalado de robar un celular en Bogotá. Cali, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/colombia/casi-linchan-joven-senalado-de-robar-un-celular-en-bogota>
- Noticias Caracol. (5 de Noviembre de 2015). Comunidad quemó moto de presuntos ladrones. Barranquilla, Colombia. Obtenido de <http://noticias.caracoltv.com/colombia/comunidad-quemo-moto-de-presuntos-ladrones>.
- Noticias Caracol. (1 de Agosto de 2015). Víctima y victimario, a la cárcel en Medellín. Medellín, Colombia. Obtenido de <http://noticias.caracoltv.com/medellin/victima-y-victimario-la-carcel-en-medellin>
- Noticias Caracol. (27 de Mayo de 2016). Alarma por reiterativas golpizas a ladrones en Bogotá. Bogotá, Colombia. Obtenido de <http://noticias.caracoltv.com/colombia/polemica-por-reiterativas-golpizas-ladrones-en-bogota>.
- Noticias Caracol. (22 de Marzo de 2016). Dos agresiones a supuestos ladrones en Medellín es denunciada cada tres días. Medellín, Colombia. Obtenido de <http://noticias.caracoltv.com/medellin/cada-tres-dias-denuncian-dos-agresiones-supuestos-ladrones-en-medellin>
- Noticias Caracol. (15 de Mayo de 2016). Le prenden fuego a mujer que sorprendieron robando en Medellín. Medellín, Colombia. Obtenido de <http://noticias.caracoltv.com/medellin/le-prenden-fuego-mujer-que-sorprendieron-robando-en-medellin>.
- Noticias Caracol. (5 de Octubre de 2016). Supuesto ladrón de motos recibió tres disparos en el centro de Medellín. Medellín, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/medellin/asesinan-supuesto-ladron-de-motos-que-iba-ser-entregado-la-policia>
- Noticias Caracol. (6 de Abril de 2016). Turba intenta linchar a supuesto ladrón en el centro de Medellín. Medellín, Colombia. Obtenido de <http://noticias.caracoltv.com/medellin/turba-intenta-linchar-supuesto-ladron-en-el-centro-de-medellin>

- Noticias Caracol. (21 de Julio de 2017). Aunque suplicó por su vida, lo señalaron de robarse un bolso y terminó asesinado a palazos. Medellín, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/medellin/aunque-suplico-por-su-vida-lo-senalaron-de-robarse-un-bolso-y-termino-asesinado-palazos>
- Noticias Caracol. (23 de Octubre de 2017). Comunidad desnudó a dos presuntos ladrones luego de supuesto intento de hurto a un bus en Itagüi. Medellín, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/medellin/comunidad-desnudo-dos-presuntos-ladrones-luego-de-supuesto-intento-de-hurto-un-bus-en-itagui>
- Noticias Caracol. (20 de Octubre de 2017). Enfrentó a ladrones que robaban su tienda: mató a uno y dejó herido a otro. Bogotá, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/bogota/enfrento-ladrones-que-robaban-su-tienda-mato-uno-y-dejo-herido-otro>
- Noticias Caracol. (27 de Octubre de 2017). Enfrentó a ladrones que robaban su tienda: mató a uno y dejó herido a otro.
- Noticias Caracol. (28 de Octubre de 2017). Habitantes de Bello detuvieron y desnudaron a un presunto ladrón en el sector de Niquía. Medellín, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/medellin/habitantes-de-bello-detuvieron-y-desnudaron-un-presunto-ladron-en-el-sector-de-niquia>
- Noticias Caracol. (29 de Octubre de 2017). Intentó robar a un hombre y terminó muerto luego que la comunidad arremetiera en su contra. Cali, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/cali/intento-robar-un-hombre-y-termino-muerto-luego-que-la-comunidad-arremetiera-en-su-contra>
- Noticias Caracol. (29 de Agosto de 2017). Lo sorprendieron asaltando a una persona y la reacción de la comunidad provocó una tragedia familiar. Cali, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/cali/lo-sorprendieron-asaltando-una-persona-y-la-reaccion-de-la-comunidad-provoco-una-tragedia-familiar>
- Noticias Caracol. (11 de Abril de 2017). Quién era el supuesto ladrón que fue linchado por la comunidad en el centro de Medellín? Medellín, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/medellin/quien-era-el-supuesto-ladron-que-la-comunidad-intento-linchar-en-el-centro-de-medellin>
- Noticias Caracol. (21 de Abril de 2015). Comunidad en Villavicencio le disparó a delincuente y lo entregó a la Policía. Villavicencio, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/colombia/comunidad-en-villavicencio-le-disparo-delincuente-y-lo-entrego-la-policia>

- Noticias Caracol. (7 de Junio de 2017). Desnudaron y amarraron a un poste a cuatro indígenas por supuesto robo. Risaralda, Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/colombia/desnudaron-y-amarraron-un-poste-cuatro-indigenas-por-supuesto-robo>
- Noticias RCN. (15 de Septiembre de 2017). Vecinos intentaron justicia a mano propia tras muerte de un niño por presunto maltrato. Bogotá, Colombia. Obtenido de <http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-centro/vecinos-intentaron-justicia-mano-propia-tras-muerte-un-nino-presunto>
- Noticias RCN. (11 de Mayo de 2015). Cuando los ciudadanos se toman la justicia por sus propias manos. Cali, Colombia. Obtenido de <http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/cuando-los-ciudadanos-se-toman-justicia-sus-propias-manos>
- Noticias RCN. (1 de Agosto de 2016). La impunidad en Colombia es del 99%: Néstor Humberto Martínez.
- Oficina contra la Droga y el Delito. Naciones Unidas. (2005). *Violencia, Crimen y Tráfico ilegal de armas en Colombia*. ONU.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2012). *Informe Mundial sobre las drogas*. New York: ONU.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2013). *Informe Global de Homicidios*. ONU.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2017). *Estudio mundial sobre el homicidio*.
- Organización de las Naciones Unidas. (2017). *World Population Prospects*. New York: Departament of Economic and Social Affairs.
- Ortega Contreras, C. (6 de Julio de 2015). *RazónPública.Com*. Obtenido de Justicia por mano propia: Cómo entenderla y cómo erradicarla?
- Ospina Duque, E. (s.f.). La crisis de la justicia laboral y su descongestión. Las pequeñas causas para los ricos son las grandes causas de los pobres. *Ensayo*. Bogotá., Colombia. : Universidad Libre. .
- Representantes del Buen Pueblo de Virginia. (1776). *Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia*. Virginia.
- Representantes del Pueblo Francés. (1789). *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano*. Francia.

- Revista Semana. (2015.). El "Proceso sin fin" de Samuel Moreno. *Revista Semana*.
Obtenido de <http://www.semana.com/nacion/articulo/las-estrategias-de-samuel-moreno-para-dilatar-el-juicio/446385-3>
- Rey Cantor, E. (2010). *Teorías Políticas Clásicas de la Formación del Estado*. Bogotá: Quinta Edición.
- Rojas Gómez, M. E. (2011.). *Apuntes sobre la ley de la descongestión*. Segunda Edición.
- Rojas Gómez, M. E. (2013). *Lecciones de derecho procesal. Teoría del proceso*. (Tercera ed., Vol. I).
- Rousseau, J.-J. (1999). *Del Contrato Social*.
- Sala de Redacción. (13 de Octubre de 2017). Corte Suprema aumenta condena de los Nule por el "carrusel de contratos". *El Espectador*.
- Sarmiento Granada, J. (2003). Justicia y medios de comunicación. En U. E. Colombia, *El estado actual de la justicia colombiana: Diagnóstico y Soluciones*. (pág. 40). Bogotá.
- Sarralde Duque, M. (30 de Noviembre de 2015). La mitad de juzgados no está listo para el comienzo de justicia oral. *El tiempo*.
- Séptimo Día. (14 de Diciembre de 2014). Justicia por mano propia: cuando ciudadanos sienten que la ley se queda corta. Bogotá., Colombia. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/septimo-dia/justicia-por-mano-propia-cuando-ciudadanos-sienten-que-la-ley-se-queda-corta>
- Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales -SINEJ-. (2014.). *Indicadores para ciclo de la criminalidad*. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. .
- SWI. (1 de Marzo de 2016). *Swissinfo.ch*. Obtenido de [Swissinfo.ch: https://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/crimen-a-la-baja_en-suiza-se-respira-seguridad/41992998](https://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/crimen-a-la-baja_en-suiza-se-respira-seguridad/41992998)
- T-1249 (Corte Constitucional. 16 de Diciembre de 2004.).
- T-230 (Corte Constitucional 18 de Abril de 2013).
- T-803 de 2012., T-803 de 2012. (Corte Constitucional. 11 de Octubre de 2012).
- Torres Calderón, L. A. (s.f.). Congestión Judicial en la jurisdicción de los contencioso administrativo colombiana. *Dikaión-Lo justo.*, 4.

- Uprimny Yepes, R., Rodríguez Garavito, C., & García Villegas, M. (2006.). *¿Justicia para todos? Sistema Judicial, derechos sociales y democracia en Colombia*. Norma.
- Vanegas Torres, G., Ballén Molina, R., Daza González, A., Ávila Pacheco, V. M., Cadena Afanador, W. R., Matías Carmargo, S. R., . . . Galeano, J. (2011). Guía para la elaboración de proyectos de investigación. *Centro de Investigaciones Socio Jurídicas - Universidad Libre*.
- Vanguardia Liberal. (12 de Mayo de 2013). *Vanguardia.com*. Obtenido de Credibilidad de las altas cortes, de capa caída.:
<http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/207942-credibilidad-de-las-altas-cortes-de-capa-caida>
- World Justice Project. (2016). *Rule of Law Index Reports*. Washington.
- Young, E. (22 de Octubre de 2017). Islandia venció el consumo de drogas entre adolescentes. *El Tiempo*.